

LA CIUDAD DE MÉXICO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

OF.	6864	VI	CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
OF.	6865	VI	CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
OF.	6866	VI	PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (Por conducto del Secretario de la Reforma Agraria).
OF.	6867	VI	SECRETARIO DE LA REFORMA AGRARIA
OF.	6868	VI	SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA.
OF.	6869	VI	JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6870	VI	SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6871	VI	SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6872	VI	CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO), POR CONDUCTO DEL JEFE DE GOBIERNO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE DICHO ÓRGANO COLEGIADO.
OF.	6873	VI	SECRETARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6874	VI	SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6875	VI	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6876	VI	DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
OF.	6877	VI	DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6878	VI	DIRECTOR DEL REGISTRO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6879	VI	DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS METROPOLITANOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6880	VI	JEFE DELEGACIONAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN TLALPAN. (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6881	VI	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN TLALPAN (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6882	VI	DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN TLALPAN (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6883	VI	SUBDIRECTOR DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS EN LA DELEGACIÓN TLALPAN.
OF.	6884	VI	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN URBANA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6885	VI	DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y VIALIDAD DE LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL GOBIERNO DE DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6886	VI	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6887	VI	DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6888	VI	JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN TLALPAN (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6889	VI	DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6890	VI	DELEGADO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN EL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6891	VI	OFICINA DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD AGRARIA, REPRESENTANTE AGRARIO EN LA AHORA CIUDAD DE MÉXICO POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (ANTES SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA).
OF.	6892	VI	DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA.
OF.	6893	VI	COMISIÓN AGRARIA MIXTA SUSTITUIDA POR EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO OCHO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6894	VI	DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA Y PLANEACIÓN AGRARIA DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA.
OF.	6895	VI	DIRECTOR GENERAL DE PROCEDIMIENTOS AGRARIOS DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA.
OF.	6896	VI	SUBSECRETARIO DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA.
OF.	6897	VI	DIRECTOR GENERAL DE PROCEDIMIENTOS AGRARIOS DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA.
OF.	6898	VI	JEFE DE DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA.
OF.	6899	VI	DIRECTOR DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL.
OF.	6900	VI	DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA.
OF.	6901	VI	DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA Y PLANEACIÓN AGRARIA DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA.
OF.	6902	VI	SUBSECRETARIO DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA.
OF.	6903	VI	DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO EN LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN COYOACÁN (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6904	VI	SECRETARIO DE GOBERNACIÓN
OF.	6905	VI	DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6906	VI	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA DE LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6907	VI	SUBDIRECTOR DE INSPECCIÓN E INVESTIGACIÓN INMOBILIARIA DE LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6908	VI	SUBDIRECTORA DE APOYO JURÍDICO INMOBILIARIO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6909	VI	SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS, INVESTIGACIÓN E INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO INMOBILIARIO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)

Parten 12:10

			TLALPAN (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6916	VI	SUBDELEGADO JURÍDICO Y DE GOBIERNO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN TLALPAN (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6917	VI	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN TLALPAN (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6918	VI	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA DELEGACIÓN TLALPAN (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6919	VI	TESORERO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6920	VI	DIRECTOR DE LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA (CORETT).
OF.	6921	VI	DIRECTOR DE INVENTARIO INMOBILIARIO Y SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6922	VI	JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL PADRÓN INMOBILIARIO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL JEFATURA DELEGACIÓN EN TLALPAN (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6923	VI	DIRECTORA DE LO CONTENCIOSO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL
OF.	6924	VI	DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PAGO DE PREDIOS E INDEMNIZACIONES DE LA JEFATURA DE UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA
OF.	6925	VI	ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6926	VI	COMITÉ DE PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6927	VI	FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL
OF.	6928	VI	TITULAR DEL ARCHIVO GENERAL AGRARIO
OF.	6929	VI	TITULAR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN EL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO)
OF.	6930	VI	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTA
OF.	6931	VI	DELEGADO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
OF.	6932	VI	AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA

EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 579/2005, PROMOVIDO POR COMISARIDO EJIDAL DEL EJIDO DE HUIPULCO DELEGACIÓN TLAPAN, EN ESTA CIUDAD, HOY SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

" Ciudad de México a quince de febrero de dos mil diecinueve.

1. Resolución del recurso de revisión.

Promoción.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito remite copia certificada de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión R.A. 467/2017, los autos originales del juicio de amparo 579/2005 conforme a la cuenta que antecede.

Fundamentación.

-Artículo 107, fracción XVI, de la Constitución.

-Artículos 81, fracción I, inciso e), 192, 193, 237, fracción I, 238, 258 y 267, fracción I, de la actual Ley de Amparo cuyo artículo transitorio tercero, establece:

"CONTINUACIÓN DE LOS TRÁMITES INICIADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY.

ARTÍCULO TERCERO. Los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la Ley de Amparo actual, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo lo que se refiere las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo."

-Artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia.

Acuerdo y/o motivación.

a) Acúcese recibo y efectúense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

b) Agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo, previo desglose de las copias con las que se formó el mismo.

c) Hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad en sesión de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, determinó lo siguiente:

"PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida únicamente para tener como actos destacados los precisados en el considerando octavo de esta ejecutoria.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo número 579/2005 y su acumulado 259/2015, promovidos por el Ejido de Huipulco, en la Ciudad de México, a través de su respectivo comisariado ejidal, en contra de los actos y las autoridades precisados en los considerandos quinto y séptimo de la sentencia recurrida.

TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al ejido de Huipulco, a través de su respectivo comisariado ejidal, en contra de los decretos que expropiaron al ejido, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de octubre de dos mil novecientos cincuenta y cuatro y

b) La privación en forma total y definitiva de las propiedades, posesiones y disfrute

de los derechos agrarios del ejido denominado "Ejido de Huipulco", delegación Tlalpan, en la Ciudad de México, correspondiente a la dotación contenida en la resolución presidencial de fecha diecinueve de octubre de mil novecientos veintidós.

c) La cancelación, revocación, desconocimiento o suspensión de cualquier otra índole de la resolución presidencial de dotación y ampliación de tierras con las que se vio beneficiado el ejido quejoso.

d) La cancelación, revocación o suspensión de cualquier otra índole, que tenga como consecuencia el desconocimiento de los derechos agrarios que haya adquirido el quejoso.

e) La cancelación, revocación, desconocimiento o suspensión de cualquier otra índole en forma unilateral por las responsables de la toma de posesión, planos provisionales y definitivos de ejecución de las diligencias, censos, certificados y resoluciones agrarias que desconozcan los derechos del quejoso.

f) La prohibición e impedimento para que la impetrante de garantías realice los fines sociales con las tierras con que fue beneficiada.

g) La orden de desalojo de las tierras, aguas, posesiones y derechos agrarios de la quejosa.

h) Los permisos, autorizaciones, licencias de construcción y funcionamiento, la aprobación de planos, las autorizaciones para construcciones y urbanización que están otorgando las autoridades responsables y que afectan la superficie de terreno con que fue beneficiado el ejido quejoso.

i) El fraccionamiento de los terrenos de propiedad del impetrante de garantías, lotificación, ventas, enajenaciones, planos de notificación, planos de urbanización, resoluciones o sentencias por autoridades judiciales o administrativas, inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de escrituras, fideicomisos, convenios, acuerdos, resoluciones, sentencias, que tengan como propósito lotificar la superficie citada.

CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege al ejido de Huipulco, a través de su respectivo comisariado ejidal, en contra de la omisión de pago de la indemnización derivada de los decretos expropiatorios publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de octubre de dos mil novecientos cincuenta y cuatro y trece de agosto de dos mil novecientos sesenta y cinco, para los efectos precisados en el considerando último de la sentencia recurrida.

QUINTO. Se declara sin materia la revisión adhesiva."

2. Efectos de la sentencia de amparo.

En sentencia de veinte de julio de dos mil diecisiete, este juzgado de distrito concedió el amparo para los efectos siguientes:

"DÉCIMO SEGUNDO. Efectos de la concesión del amparo. En las relatadas circunstancias y toda vez que el concepto de violación analizado en último término es fundado, procede conceder el amparo, para efecto de que las autoridades responsables Jefe del Departamento del Distrito Federal (hoy Jefe de Gobierno de la Ciudad de México); Jefe del Departamento Agrario (hoy Secretaría de la Reforma Agraria); y Presidente de la República, en el respectivo ámbito de su competencia, emitan los siguientes actos:

1. Dejen insubsistente los actos relacionados con la fijación del valor de los bienes expropiados para determinar el monto de la indemnización.
2. Repongan los actos relacionados únicamente con la valuación de los bienes, a fin de que se le dé oportunidad al ejido quejoso de comparecer al procedimiento administrativo indemnizatorio, en el cual la Secretaría de la Reforma Agraria se imponga de la propuesta de indemnización que en su caso efectúe el Gobierno de la hoy Ciudad de México, y se manifieste al respecto, dando oportuna participación al ejido quejoso sobre dicha propuesta.
3. Se recabe nuevamente el avalúo por parte de la hoy Secretaría de la Reforma Agraria a través de la dependencia facultada para ello (Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales -artículo 94 de la Ley Agraria-) en el cual el ejido quejoso se encuentre en aptitud de ofrecer pruebas y formular alegatos en defensa de su derecho a la indemnización. En el entendido que el valor que debe tomarse en consideración para fijar el monto de la indemnización es el valor comercial de los bienes en el momento de la expropiación, esto es, en los años de 1954 y 1965; monto que debe quedar debidamente actualizado.
4. Lo anterior para que en su oportunidad, una vez desahogados los avalúos respectivos, con la debida participación del ejido quejoso, con plenitud de jurisdicción se emitan el dictamen y posteriormente la resolución que en derecho corresponda por parte del Presidente de la República respecto a la indemnización justa que le corresponda al ejido quejoso por la expropiación de sus tierras, pero siempre respetando

cincuenta y cuatro y el Decreto expropiatorio del Ejido de Huipulco la afectación de dos fracciones, la norte con una superficie de 2 hectáreas 64 áreas y la sur con 3 hectáreas 5 áreas, para la apertura del Viaducto que ligara la calzada de Tlalpan con las carreteras de Cuemavaca publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto de mil novecientos sesenta y cinco, en virtud de dicha concesión debe implicarse a ellos también en el presente considerando:

Predio	Ubicación respecto del Ejido de Huipulco
7. Ubicado en calzada Acueducto entre San Juan de Dios y San Juan Bosco "Campamento de Limpia".	Dentro de la superficie del ejido, expropiado en decreto de fecha cuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro , para la ampliación de la calzada de Tlalpan y un jardín de niños.
9. Ubicado en calle San Juan Bosco número 1 entre Calzada de Tlalpan y Calzada Acueducto "Jardín de Niños Cámara Junior".	Dentro de la superficie del ejido, expropiado en decreto de fecha cuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro , para la ampliación de la calzada de Tlalpan y un jardín de niños.
12. Ubicado en Viaducto Tlalpan entre calle Capirote y Arenal "Pozo Xochimilco 28".	Dentro de la superficie del ejido, expropiado en decreto de fecha once de agosto de mil novecientos sesenta y cinco , para la apertura del Viaducto que ligará la Calzada de Tlalpan, con la carretera Cuemavaca.
14. Ubicado en Viaducto Tlalpan entre San Juan de Dios y San Juan Bosco "Pozo 29".	Dentro de la superficie del ejido, expropiado en decreto de fecha once de agosto de mil novecientos sesenta y cinco , para la apertura del Viaducto que ligará la Calzada de Tlalpan, con la carretera Cuemavaca.
17. Ubicado en Calzada de Tlalpan entre San Juan de Dios y San Juan Bosco "remanente con giro comercial".	Dentro de la superficie del ejido, expropiado en decreto de fecha cuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro , para la ampliación de la Calzada de Tlalpan y un jardín de niños.

Sin que la presente concesión de amparo implique de modo alguno dejar sin efectos la declaratoria de utilidad pública determinada en los procedimientos de expropiación respectivos y tampoco afecta la vigencia y validez de dichos decretos en cuanto a la privación de la propiedad de la parte quejosa, sino únicamente respecto a lo determinado sobre la indemnización que corresponde al ejido quejoso con motivo de esas expropiaciones."

3. Requerimiento de cumplimiento de sentencia a las autoridades responsables.

a) **Requírase a las autoridades directamente encargadas del cumplimiento** para que, dentro del término de **tres días**, den cumplimiento en los términos precisados en la ejecutoria dictada por el **Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito**.

Apercibimiento.

Se apercibe a las **autoridades directamente encargadas del cumplimiento del fallo protector** que, de no hacerlo sin causa justificada, se les impondrá una multa por el equivalente **cien veces** el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 238 párrafo primero y 258, todos de la Ley de Amparo.

Sin perjuicio de que se remita el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que este a su vez, en caso de considerarlo procedente emita la resolución de reiteración respectiva en relación con el incumplimiento de la ejecutoria de amparo y envíe los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable, además de la consignación ante el Juez de Distrito por los delitos de incumplimiento de una sentencia de amparo o el delito de no hacerla cumplir.

Las autoridades responsables deberán exhibir copias certificadas de las constancias fehacientes que acrediten el cumplimiento del fallo protector y su notificación a la parte quejosa.

b) Requerimiento de cumplimiento de sentencia a las autoridades vinculadas.

No es el caso, por el momento, requerir a autoridad alguna como vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ya que hasta el momento no se advierte la existencia de alguna autoridad.

c) Requerimiento de cumplimiento a los superiores jerárquicos.

Sin que en el caso se requiera a alguna autoridad como superior jerárquico de las directamente obligadas a acatar el fallo protector, toda vez que debido a las funciones que realizan, son únicamente tales autoridades quienes deben cumplir el fallo constitucional.

4. Promociones que presenten las autoridades requeridas a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo.

De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela judicial efectiva de los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, este juzgador determina que los oficios que presenten las autoridades relativos al acatamiento paulatino a la sentencia de amparo, con excepción de las comunicaciones que demuestren

En términos del artículo 62 del citado Código, el secretario encargado del expediente hará constar el día en que se presentó el oficio y dará cuenta al titular de este Juzgado una vez fenecido el plazo para acatar la sentencia de amparo.

Las manifestaciones que exponga la autoridad oficiante se tendrán por hechas desde el momento en que se presente el oficio y las partes podrán imponerse de ellas, las cuales, sin embargo, serán objeto de valoración conjunta una vez fenecido el término concedido para acatar el fallo protector.

Esta determinación tiene como objeto que el juzgador efectúe una valoración conjunta de las promociones que paulatinamente exhiben las autoridades para el cumplimiento del fallo constitucional, ya que la presentación, en ocasiones indiscriminada, de promociones que se limitan a informar las gestiones para cumplir con la misma, tienden a trivializar la finalidad de la ejecución de las sentencias de amparo, así como relativizar el objetivo del propio juicio, máxime que una interpretación contraria del sistema jurídico aplicable generaría que las autoridades controlen y dispongan de los tiempos para el cumplimiento de las sentencias de amparo, sin que ello sea correcto tomando en cuenta que en esta fase procesal ya no existe duda ni está ya sujeto a debate que se ha actualizado una conducta ultra vires, más allá del poder legítimo de la autoridad, que ha originado una violación a derechos humanos constatada en una sentencia de amparo firme que debe repararse.

5. Pronunciamiento de cumplimiento de la sentencia de amparo.

Una vez transcurrido el término de **tres días**, con las constancias de cumplimiento o sin ellas, este Juzgador se pronunciará en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; o bien, decidirá si concede prórroga a las autoridades para cumplir con el fallo protector.

En el entendido de que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma **Claudia Gabriela Villeda Mejía**, Secretaria en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamente la organización y funcionamiento del propio Consejo, y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de enero de dos mil diecinueve hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno referido adscriba titular a este órgano jurisdiccional, comunicado mediante el oficio CCJ/ST/0117/2019 de ocho de enero de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con **Katya Cisneros González**, Secretaria que autoriza y da fe. *Doy fe.*"

LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES PERTINENTES.

CIUDAD DE MÉXICO, 15 DE FEBRERO DE 2019

**LA SECRETARIA DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN
LA CIUDAD DE MÉXICO**

LIC. KATYA CISNEROS GONZÁLEZ



AMPARO EN REVISIÓN: R.A. 467/2017

QUEJOSO Y RECURRENTE:

EJIDO DE HUIPULCO DE LA DELEGACIÓN
TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDADES

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, JEFE DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO Y OTRAS.

RECURRENTES:

RECURRENTE ADHESIVA: DIRECTORA
JURÍDICA DEL SISTEMA DE AGUAS,
ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

MAGISTRADO PONENTE: ARTURO ITURBE
RIVAS

SECRETARIA: MARLEN ÁNGELES TOVAR



Ciudad de México. Acuerdo del Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,
celebrado en sesión de veinticinco de enero de dos mil
diecinueve.

**VISTOS; y,
RESULTANDO:**

PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de
abril de dos mil cinco, en la Oficina de Correspondencia Común
de los Juzgados de Distrito en Materia de Administrativa en la
Ciudad de México, TOMÁS FLORES SALAZAR, BERTOLDO
AVILÉS BOCARDO Y ANTONIO ALEJANDRO MORA
JIMÉNEZ en su carácter de Demandantes,

suplente y Tesorero suplente, respectivamente, del comisariado ejidal del EJIDO DE HUIPULCO DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, promovieron demanda de amparo (foja 7 a 51) en contra de las autoridades y actos siguientes:

"C. AUTORIDADES RESPONSABLES:

- 1.- CONGRESO DE LA UNIÓN.
- 2.- PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
- 3.- SECRETARIO DE LA REFORMA AGRARIA, ANTES JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS AGRARIOS Y COLONIZACIÓN.
- 4.- SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA.
- 5.- JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
- 6.- SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
- 7.- DIRECTOR DE POLÍTICA ECOLÓGICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
- 8.- SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
- 9.- CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
- 10.- SECRETARIO DE GOBIERNO, DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
- 11.- DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
- 12.- SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
- 13.- DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
- 14.- DIRECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
- 15.- DIRECTOR DEL REGISTRO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
- 16.- DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS METROPOLITANOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
- 17.- JEFE DELEGACIONAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN TLALPAN.
- 18.- SUBDELEGADO DE OBRAS DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN TLALPAN.
- 19.- SUBDELEGADO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN TLALPAN.
- 20.- DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DEL

21.- SUBDIRECTOR JURÍDICO Y DE GOBIERNO, DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN LA DELEGACIÓN TLALPAN.

22.- JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LICENCIAS DE USO DE SUELO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN LA DELEGACIÓN TLALPAN.

23.- JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LICENCIAS E INSPECCIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE LA DELEGACIÓN TLALPAN.

24.- SUBDIRECTOR DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN.

25.- COORDINADOR DE VERIFICADORES DE NORMAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN LA DELEGACIÓN TLALPAN.

26.- DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN URBANA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

27.- DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS (CETRAVI) DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

28.- DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

29.- DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

30.- DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

31.- SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN TLALPAN.

32.- JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN E INSPECCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN TLALPAN.

33.- JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LICENCIAS Y VERIFICACIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN TLALPAN.

34.- JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O ENCARGADO DE DICHA UNIDAD DE LA DELEGACIÓN POLÍTICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN TLALPAN.

35.- SUBDIRECTOR DE REGLAMENTACIÓN URBANA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

36.- DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL.

37.- DELEGADO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN EL DISTRITO FEDERAL.

38.- COORDINADOR AGRARIO EN EL DISTRITO FEDERAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA.

39.- DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA.

40.- COMISIÓN AGRARIA MIXTA, SUBSTITUIDA POR EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO OCHO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DISTRITO FEDERAL.



TRIBUNAL COLEGIADO
PRIMER CIRCULO

41.- DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN AGRARIA
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA
AGRARIA.

42.- DIRECTOR GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
AGRARIOS DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA.

43.- SUBSECRETARIO DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA
SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA.

44.- DIRECTOR GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
AGRARIOS DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA.

45.- JEFE DE OFICINA DE REGISTRO Y TITULACIÓN DE
LA SECRETARIA DE REFORMA AGRARIA.

46.- DIRECTOR DE REGISTRO AGRARIO NACIONAL.

47.- DIRECTOR GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
AGRARIOS DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA.

48.- DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN AGRARIA
DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA

49.- SUBSECRETARIO DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA
SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA

50.- JEFE DE LA OFICINA DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD
AGRÍCOLA DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA, SUSTITUIDA POR LA SECRETARÍA DE LA
REFORMA AGRARIA.

D. ACTOS RECLAMADOS:

I. El desconocimiento, cancelación y revocación en forma unilateral que hacen las autoridades responsables de los acuerdos presidenciales de fechas 28 de octubre y 20 de diciembre de 1940, que tratan sobre las compensaciones a todos aquellos gobernados que se vieron afectados por las dotaciones y ampliación de tierras de los pueblos, núcleos de población y ejidos, en el reparto agrario como garantía social que debe cumplir el Estado Mexicano, así como la circular de fecha 4 de octubre de 1940, emitida por el Jefe del Departamento Agrario hoy Secretario de la Reforma Agraria, en total detrimento de las tierras, aguas, montes y demás derechos agrarios del impetrante de garantías, tal y como se especifica de los antecedentes de esta demanda.

II. Las resoluciones administrativas dictadas en los expedientes O.P.P.A./200(23)6, de 21 de noviembre de 1939 y el 12 de junio de 1940, emitidas por la entonces oficina de la Pequeña Propiedad Agraria dependiente de la Presidencia de la República actualmente substituida por la Secretaría de la Reforma Agraria y su confirmación por el Presidente de la República en las quejas interpuestas por Aurelio Cabello y coagraviados, en contra de la resolución presidencial que beneficia a los impetrantes de garantías con la ampliación de tierras y solicitada de fecha 9 de marzo de 1938, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de julio de 1938, dotación ampliatoria que culminó con la toma definitiva y el plano definitivo concedida al Ejido de Huipulco, Delegación de Tlalpan, Distrito Federal, por lo que la misma se ejecutó definitivamente, siendo inmodificable.



SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA
DEL PNU

Como consecuencia de la resolución administrativa antes indicada se reclaman los actos autoritarios siguientes:

1. El desconocimiento, cancelación y revocación en forma unilateral que hacen las autoridades responsables de la resolución administrativa pronunciada por el Presidente de la República de fecha 10 de diciembre de 1947, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 17 del mismo mes y año, en la cual se determinó declarar las resoluciones ampliatorias que benefician al impetrante de garantías con plena validez y fuerza legal, declarando improcedentes todas las quejas formuladas ante la entonces Oficina de la Pequeña Propiedad Agraria hoy Secretaría de la Reforma Agraria, así como decretando la nulidad de todos los acuerdos, desposesiones, y demás actos por los que se hubiere ordenado por el entonces departamento agrario hoy Secretaría de la Reforma Agraria, la desposesión de tierras concedidas a los poblados beneficiados, ordenándose confirmar las posesiones dadas en los casos en que se hubiere ordenado la devolución.
2. El desconocimiento y cancelación del oficio de fecha 29 de octubre de 1940, emitido por el entonces Jefe de Departamento Agrario por medio del cual se reconoce la posesión de las tierras a favor del Ejido de Huipulco, Delegación Tlalpan, Distrito Federal y ordena se continúe la posesión de los terrenos que se les entregaron definitiva el 20 de junio de 1938, sobre la dotación ampliatoria otorgada al impetrante de garantías de fecha 9 de marzo de 1938, tal y como se especifica en los antecedentes de esta demanda.
3. La resolución emitida por el Presidente de la República de fecha 15 de febrero de 1956, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de marzo de 1956, y su inexacta ejecución en la que se resuelve en definitiva las quejas presentadas en la entonces Oficina de la Pequeña Propiedad Agrícola hoy Secretaría de la Reforma Agraria, en los expedientes O.P.P.A/200(23)6, promovidas por Aurelio Cabello y coagraviados, en contra de la resolución Presidencial que beneficia a los impetrantes de garantías con la ampliación de tierras solicitada, de fecha 9 de marzo de 1938, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de julio de 1938.
4. La resolución administrativa de fecha 20 de marzo de 1957, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de mayo de 1957 y su inexacta ejecución, emitida por el Presidente de la República en la que se resuelve en definitiva las quejas presentadas en la entonces Oficina de la Pequeña Propiedad Agrícola hoy Secretaría de la Reforma Agraria, en los expedientes O.P.P.A/200(23)6, promovidas por Aurelio Cabello y coagraviados, en contra de la resolución Presidencial que beneficia a los impetrantes de garantías con la ampliación de tierras solicitada, de fecha 9 de marzo de 1938, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de julio de 1938.

5. La resolución administrativa de fecha 11 de diciembre de 1957, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de mayo de 1958, y su inexacta ejecución, emitida por el Presidente de la República en la que se resuelve en definitiva las quejas presentadas en la entonces Oficina de la Pequeña Propiedad Agrícola hoy Secretaría de la Reforma Agraria, en los expedientes O.P.P.A/200(23)6, promovidas por Aurelio Cabello y coagraviados, en contra de la resolución Presidencial que beneficia a los impetrantes de garantías con la ampliación de tierras solicitada, de fecha 9 de marzo de 1938, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de julio de 1938.

6. Las diligencias de toma de posesión y ejecución de las resoluciones administrativas emitidas por la entonces Oficina de la Pequeña Propiedad (Oficina de la Pequeña Propiedad Agraria) en las quejas O.P.P.A/200(23)6, promovidas por Aurelio Cabello y coagraviados, en contra de la resolución Presidencial que beneficia a los impetrantes de garantías con la ampliación de tierras solicitada, de fecha 9 de marzo de 1938, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de julio de 1938, de fechas 28 de septiembre y 27 de octubre de 1940 (sic), en las que dicen se tomó posesión y se efectuó la resolución presidencial de rectificación y modificación de dotación ampliatoria.

7. Las resoluciones administrativas que en forma unilateral emiten las autoridades responsables y su ejecución por las que se modifica la resolución de ampliación del ejido a favor del impetrante de garantías, emitidas en las quejas interpuestas por los supuestos pequeños propietarios que se dicen afectados con la ampliación otorgada al Ejido de Huipulco, Delegación Tlalpan, Distrito Federal, mediante resolución presidencial de fecha 9 de marzo de 1938, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1938, dotación ampliatoria que ya es definitiva.

8. Las resoluciones administrativas, acuerdos, su indebida ejecución y acta de toma de posesión de la resolución administrativa dictada por el Presidente de la República, en las quejas interpuestas por supuestos pequeños propietarios afectados con la dotación de ampliación otorgada al Ejido de Huipulco, Delegación de Tlalpan, Distrito Federal, mediante resolución presidencial de fecha 9 de marzo de 1938, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1938 y ejecutada en forma definitiva con la toma de posesión y plano definitivo a favor del impetrante de garantías.

9. El acuerdo de 12 de septiembre de 1940 y su inminente ejecución, emitidos por el entonces Jefe del Departamento Agrario hoy Secretario de la Reforma Agraria, mediante el cual se ordena se ponga en posesión a los supuestos pequeños propietarios que interpusieron queja en contra de la resolución presidencial de ampliación concedida al impetrante de garantías, en cumplimiento del mandato del Presidente de la República contenido en la resolución administrativa de fecha 21 de septiembre de 1939 la

10. Las resoluciones administrativas dictadas por el Presidente de la República de fechas 21 de noviembre de 1939 y 12 de junio de 1940, por el cual se aprueba el dictamen formulado por la entonces Oficina de la Pequeña Propiedad Agrícola dependiente de la Presidencia de la República actualmente substituida por el Secretario de la Reforma Agraria, en las quejas O.P.P.A/200/(23)6, presentadas por los supuestos pequeños propietarios que dicen fueron afectados por la dotación de ampliación otorgada al Ejido de Huipulco, Delegación de Tlalpan, Distrito Federal que se especifica en los antecedentes de esta demanda.

11. El o los dictámenes definitivos emitidos por la entonces Oficina de la Pequeña Propiedad Agrícola, en las quejas O.P.P.A/200/(23)6, interpuestas por supuestos pequeños propietarios que dicen fueron afectados por la ampliación de tierras otorgadas al ejido quejoso, tal y como se especifica en los antecedentes de esta demanda.

III. El decreto expropiatorio de fecha 18 de agosto de 1954, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre del mismo año, por medio del cual se expropia al impetrante de garantías de una superficie de 00-33-31-47 hectáreas, a favor del entonces Departamento del Distrito Federal, para la construcción de la Calzada de Tlalpan en esta Ciudad Capital.

IV. El decreto expropiatorio de fecha 24 de marzo de 1959, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 1959, por medio del cual se expropia el ejido quejoso una superficie de 00-97-73 hectáreas, a favor de la Compañía Amacuzac, para la construcción de una Planta Eléctrica.

V. El decreto expropiatorio de 11 de agosto de 1965, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 1965, por medio del cual se expropia el ejido quejoso una superficie de 5-69-00 hectáreas, a favor del entonces Departamento del Distrito Federal, para la construcción del Viaducto Tlalpan, en esta Ciudad Capital.

VI. El decreto expropiatorio de fecha 4 de enero de 1982, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 1982, por medio del cual se expropia al ejido quejoso una superficie de 59-65-44.11 hectáreas de terreno, a favor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, para su notificación y regularización mediante su venta.

VII. La expropiación o libramiento de paso que en forma unilateral emiten las autoridades responsables para la construcción y ensanchamiento de la avenida Acoxta en el tramo comprendido al ejido quejoso de acuerdo con los planos definitivos de dotación y ampliación, así como de las actas correspondientes y demás documentos que amparan los derechos agrarios del impetrante de



COLEGIO DE
ADMINISTRATIVOS
CIRCUITO

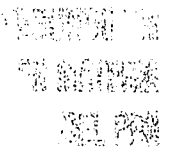
VIII. El inminente fraccionamiento de los terrenos propiedad del impetrante de garantías, lotificación, ventas, enajenación, planos de lotificación, planos de urbanización, resoluciones o sentencias emitidas por autoridades judiciales y administrativas, inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de escrituras, fideicomisos, convenios, acuerdos, resoluciones, sentencias, o de cualquier otra índole que tengan como propósito lotificar los terrenos propiedad de la quejosa, así como para burlar sus derechos agrarios, con la simulación de fraccionamiento de latifundios, haciendas o predios que de acuerdo al Código Agrario, a la Ley Federal de la Reforma Agraria y demás, acuerdos, circulares y decretos que regulaban el reparto agrario y las fincas afectables alrededor de los siete kilómetros del poblado solicitante, en particular el desconocimiento de la Ley del 6 de enero de 1915, y del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que elevan a garantía social el reparto y rezago agrario.

IX. La Ley Agraria de fecha 23 de febrero de 1992, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de febrero de 1992, y reformado por decreto publicado el 9 de julio de 1993, a través del capítulo IV que se refiere a la expropiación de bienes comunales y ejidales, actos de aplicación que se especifican en los antecedentes de esta demanda.

Este acto se lo atribuyó en cuando a su discusión y aprobación al Congreso de la Unión integrado por las Cámaras de Diputados y Senadores de conformidad con la jurisprudencia firme y los artículos 50, 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que hace a su sanción, promulgación, publicación e iniciación de la vigencia al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y por lo que respecta su refrendo se lo imputamos al Secretario de Gobernación y al Secretario de la Reforma Agraria, asimismo su aplicación se la imputo a todas y cada una de las autoridades responsables en virtud de que se desconoce el carácter con que están actuando.

X. Los Planes, Programas de Desarrollo Urbano de la Delegación de Tlalpan, hasta su última versión publicada en las Gacetas Oficiales del Gobierno del Distrito Federal, por medio del cual se priva al impetrante de garantías de sus propiedades, posesiones y derechos agrarios en los que se le beneficio, al cambiar el uso de suelo y permitir el fraccionamiento y venta de tierras ejidales.

Este acto se lo imputo, en cuanto a su discusión y aprobación a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y/o al Congreso de la Unión como órgano legislativo local antes de las reformas de los artículos 44 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en cuanto a su publicación y aprobación al C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal antes Jefe de Departamento del Distrito Federal y/o al C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; en cuanto a su aplicación se le atribuye a todas y cada



aspecto de ordenadoras y ejecutoras, en virtud de que se desconoce el carácter con que están actuando.

XI. La privación en forma total y definitiva de las propiedades posesiones y disfrute de los derechos agrarios del ejido denominado 'Ejido de Huipulco', Delegación Tlalpan, Distrito Federal, correspondientes a la dotación contenida en la resolución presidencial de fecha 19 de octubre de 1922, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de noviembre de 1922, con una superficie de 36-00-00 hectáreas tomadas de la hacienda, "San Juan de Dios" propiedad de la señora Soledad Toriello Viuda de Arena(s), con las que se vio afectada el impetrante de garantías, así como de la dotación ampliatoria de 133-16-57 hectáreas, de las cuales 123-83-00 hectáreas son de humedad y 9-33-57 hectáreas del monte afectadas íntegramente a la hacienda de San Juan de Dios, propiedad de la señora Soledad Toriello viuda de Arena (s), en las fracciones que aparecen a nombre de las personas siguientes: a Alberto P. Pellandini, 8-54-21 hectáreas; Manuel Appendini, 32-70-03 hectáreas; Juan B. Massetto, 1-42-78 hectáreas; Juana A. de Figaredo, 1-68-87 hectáreas, Serafín Sierra, 13-40-99 hectáreas; Joel Morales Estrada, 3-38-56 hectáreas; Casimiro Martínez y hermanos 6-22-43 hectáreas; Augusto Rodríguez 20-45-29 hectáreas, Salvador Pintuelas 10-98-94 Hectáreas, S Romano y A Sordo 34-00-20 hectáreas, todas estas superficies de humedad y la fracción a nombre de José Roldan Venegas, 9-33-57 hectáreas de monte, pasando a poder del Poblado beneficiado, con todos sus usos accesorios, costumbres, servidumbres, localizados de acuerdo al plano aprobado por el entonces Departamento Agrario; otorgadas mediante la resolución presidencial de fecha 9 de marzo de 1938, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 18 de julio de 1938, las cuales se ejecutaron en forma definitiva en la toma de posesión y plano definitivo, tal y como se especifica en los antecedentes de esta demanda.

XII. La privación en forma total y definitiva de las propiedades, posesiones y disfrute de los derechos agrarios del ejido denominado 'Ejido de Huipulco', Delegación Tlalpan, Distrito Federal de la superficie 8-50-00 hectáreas, ubicadas dentro del predio denominado 'El Trébol', también conocido como colonia Villa Lázaro Cárdenas, de esta ciudad, el cual se especifica en los antecedentes de esta demanda.

XIII. La cancelación, revocación, desconocimiento, suspensión o de cualquier otra índole, la resolución presidencial de dotación y ampliación de tierras con las que se vio beneficiado el ejido quejoso, que realizan en forma unilateral, las autoridades responsables, la cual se adjunta en copia certificada a este escrito.

XIV. La cancelación, revocación, suspensión o de cualquier otra índole, que tenga como consecuencia el desconocimiento de los derechos agrarios, propiedades, posesiones y demás derechos agrarios del quejoso que haya adquirido respecto de las tierras,

aguas, propiedades, y concesiones de impetrante de garantías que se especifican en los antecedentes de esta demanda.

XV. La cancelación, revocación, suspensión, desconocimiento ó de cualquier otra índole, que se realice en forma unilateral por las responsables de las actas de toma de posesión, planos provisionales y definitivos de ejecución de las diligencias agrarias, de los censos agrarios, de los certificados de derechos agrarios, resoluciones provisionales definitivas o de cualquier otra índole con el solo propósito de desconocer los derechos agrarios de la impetrante de garantías.

XVI. La prohibición e impedimento para la impetrante de garantías realice los fines sociales (sic) con las tierras con las que fue beneficiada y se especifican en esta demanda.

XVII. La orden de desalojo de las tierras, aguas, posesiones y derechos agrarios de la impetrante de garantías y que se especifican en esta demanda.

XVIII. Las sentencias dictadas en los juicios civiles, tramitados en los juzgados que se indican en los antecedentes de esta demanda así como los actos procesales consistentes en los acuerdos admisorios los que tienen por perdido el derecho para contestar la demanda, el auto que abre el periodo de pruebas, el auto que admite las pruebas ofrecidas por las partes, la audiencia de desahogo de pruebas, la citación para sentencia, el acuerdo que declara ejecutoriada la sentencia, el acuerdo que ordena la ejecución de la sentencias, el acuerdo que ordena la toma de posesión del bien inmueble propiedad del ejido quejoso, derivados de la falta de emplazamiento al impetrante de garantías, por encontrarse viciados de origen, las sentencias de segunda instancia y las demás actuaciones que de ellos se deriven en virtud de que la quejosa nunca fue parte en los mismos, las cuales se especifican en los antecedes de esta demanda.

XIX. La negativa a inscribir la sentencia que se precisa en los documentos que se adjuntan en esta demanda, el oficio 31-477 de fecha 30 de junio de 1986, emitido por el Subdelegado Jurídico y de Gobierno de la Delegación Política en Tlalpan del Departamento del Distrito Federal hoy Gobierno del Distrito Federal, que contiene entrega y toma de posesión al impetrante de garantías de 8-50-00 hectáreas que se restituyeron al ejido quejoso, así como del acta y toma de entrega de la superficie antes indicada de fecha 26 de junio de 1996, relativas a las 8-50-00 hectáreas del lugar conocido como 'EL TRÉBOL' del Ejido de Huipulco, Delegación de Tlalpan, en el Distrito Federal, firmada por el Subdelegado Jurídico de Gobierno de la Delegación Tlalpan del entonces Departamento del Distrito Federal y del Subdelegado de Obras y Servicios de la misma delegación, así como por los entonces integrantes del Comisariado Ejidal y los testigos de calidad Coordinador Agrario en Tlalpan y Asesor Jurídico de la Coordinación Agraria en Tlalpan, en virtud de que las autoridades responsables se han negado a inscribirlas a



virtud de ser un documento registrable en el Registro Agrario Nacional correspondiente, tal y como se especifica en los antecedentes de esta demanda.

XX. El inminente fraccionamiento de los terrenos propiedad del impetrante de garantías, notificación, ventas, enajenaciones, planos de lotificación, planos de urbanización, resoluciones o sentencias emitidas por autoridades judiciales o administrativas, inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de escrituras, fideicomisos, convenios, acuerdos, resoluciones, sentencias o de cualquier otra índole que tengan como propósito notificar de los terrenos cuya superficie es de 8-50-00 hectáreas que se le restituyeron al ejido quejoso, en el acta y toma de entrega de la superficie antes indicada de fecha 26 de junio de 1996, relativas a las 8-50-00 hectáreas del lugar conocido como 'EL TRÉBOL' del Ejido Huipulco, Delegación de Tlalpan, en el Distrito Federal, así como para burlar sus derechos agrarios, con la simulación de fraccionamiento de latifundios, haciendas o predios que de acuerdo al Código Agrario, a la Ley Federal de la Reforma Agraria y demás acuerdos, circulares y decretos, que regulaban el reparto agrario y las fincas afectables alrededor de los siete kilómetros del poblado solicitante, en particular desconocimiento de la Ley de 6 de enero de 1915 y del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que elevan a garantía social el reparto y rezago agrario.

XXI. Las consecuencias lógicas que se deriven de los anteriores actos reclamados, que pueden consistir en la omisión de escrituras públicas, su protocolización e inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Distrito Federal; la cancelación en el Registro Nacional Agrario Nacional de la Inscripción de documentos y derechos agrarios con que cuenta la impetrante de garantías; la toma de posesión de las tierras y aguas de la quejosa; la orden u órdenes que emitan las autoridades responsables para desposeer y privar al impetrante de garantías de sus derechos agrarios, las demandas, juicios, procedimientos de tipo civil o administrativo, así como cualquier otro que sin intervención de la impetrante de garantías o sin su emplazamiento se hayan realizado con el solo propósito de llevar a cabo los actos reclamados, la transmisión de la propiedad a terceros; la enajenación de las tierras y aguas propiedad de la impetrante de garantías a favor de los terceros; la conformación de fideicomisos, la inscripción de escrituras públicas o privadas, sentencias civiles o resoluciones administrativas tendientes a privar al quejoso de sus derechos agrarios; la elaboración de planos de subdivisión, convenios o de cualquier otra índole; los planes programas o decretos de expropiación para la regularización o de cualquier otra índole que tengan como propósito llevar a cabo los actos que se reclaman, la expedición de licencias, permisos, constancias de uso de suelo, expedición de licencias, permisos, constancias de uso de suelo, alineamiento y número oficial; boletas prediales; planos de lotificación, autorizaciones de notificaciones, la demolición de la casas que se encuentran en la superficie del terreno afectado, su ocupación, la sustracción del régimen judicial de la propiedad, su

índole que tiendan a ejecutar los actos reclamados; la imposición de sanciones, arrestos administrativos o de cualquier otra índole emitidos en contra del quejoso o sus representantes tendientes a realizar los actos que se reclaman.

Los actos reclamados señalados con antelación se los atribuimos en forma indistinta a todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables en su doble aspecto de ordenadoras y ejecutoras, ya sea que los ejecuten por sí mismas o a través de sus subalternos, en virtud de que se desconoce el carácter con el que están actuando."

La parte quejosa invocó como derechos vulnerados en su perjuicio los previstos por los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señaló terceros perjudicados; y, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes de la demanda que estimó pertinentes.

SEGUNDO. Por acuerdo de veintisiete de abril de dos mil cinco, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a quien por razón de turno tocó conocer de la demanda de amparo, la registró con el número de expediente 579/2005; y ordenó su envío al Juzgado Décimo de Distrito en la misma materia y jurisdicción, al estimar que procedía su retorno, por estar estrechamente vinculados los actos reclamados con los que fueron motivo de la diversa demanda radicada con el número de expediente 42/1984; sin embargo, el juzgado mencionado no aceptó el turno planteado; y el asunto fue remitido a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, la que por resolución de veinticinco de mayo de dos mil cinco, determinó que el Juzgado Octavo debía conocer del asunto.

TERCERO. Mediante proveído de uno de junio de dos mil cinco, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa se

parte quejosa para que acreditara fehacientemente su personalidad, lo que fue desahogado por escrito presentado el diez de junio siguiente.

Por acuerdo de catorce del mes y año mencionados, el **Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo**; pidió informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; tuvo con el carácter de terceros perjudicados a los señalados por la parte quejosa; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y concedió la suspensión de oficio para que se mantuvieran las cosas en el estado que se encontraban y no se privara al quejoso de las tierras ejidales ni se sustrajeran las mismas del régimen jurídico ejidal.

CUARTO. Inconformes con el acuerdo anterior, diversas autoridades interpusieron recursos de queja, de los cuales conoció este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo Presidente mediante acuerdos de cuatro de julio de dos mil cinco, los admitió y registró respectivamente con los números Q.A. 58/2005 y Q.A. 59/2005, los que en sesión de diecinueve de agosto de dos mil cinco, este tribunal colegiado resolvió, en el sentido de desechar el interpuesto por el Director General Adjunto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria, y, por otra parte, declaró infundados los recursos.

QUINTO. Por acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil cinco, el Juzgado de Distrito requirió a la parte quejosa para que

precisara las denominaciones y domicilios correctos de diversas autoridades, con el apercibimiento que de no hacerlo, no se tendrían como autoridades responsables; en cumplimiento de lo anterior, por escrito presentado el treinta del mismo mes y año, la parte quejosa desahogó la vista insistiendo en las denominaciones de las autoridades, respecto de lo cual, en su momento, se pronunció el juez.

SEXTO. Por acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil cinco, el Juzgado de Distrito tuvo por recibidas diversas constancias del juicio de amparo 954/88, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y del recurso de revisión 482/90, del índice de este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por lo que, previo análisis de las constancias de autos, determinó que el Juzgado Primero de Distrito era el competente para seguir conocimiento del juicio de amparo, por estar estrechamente vinculados los actos reclamados.



Recibidos los autos en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, su titular mediante acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil cinco, ordenó su registró con el número 1420/2005; y determinó no compartir el criterio del Juez declinante, por lo que ordenó devolver el juicio de amparo al Juzgado Octavo de Distrito, en el que el Secretario encargado de despacho, por acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil cinco, insistió en el retorno planteado, por lo que ordenó el envío de los autos a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, para que resolviera el conflicto de turno, la que, en sesión de veinticinco

al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el cual, por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil seis se avocó al conocimiento del juicio de amparo.

SÉPTIMO. El Juzgado de Distrito ordenó emplazar con el carácter de terceros perjudicados a Banco Unión, sociedad anónima, institución de banca múltiple (antes Banco B.C.H. y Bajío, sociedad anónima de capital variable), en su actual denominación Banco del Bajío; Villa Lázaro Cárdenas, sociedad civil; Trabajo y Acción, sociedad civil; a la sucesión de Juan Ríos Hernández, en relación con el juicio ordinario civil 1489/1991, del índice del Juzgado Décimo Octavo de lo Civil en la hoy Ciudad de México; así como a diversas personas vinculadas con los juicios civiles mencionados por la parte quejosa, que finalmente se separaron del juicio de amparo y su acumulado (con excepción del juicio ordinario civil 1489/1991), por los motivos precisados más adelante.

OCTAVO. Mediante escrito presentado en el Juzgado del conocimiento, el doce de febrero de dos mil ocho, **la parte quejosa promovió ampliación a la demanda** en contra de diversas autoridades y actos reclamados (foja 4932 a 4961); sin embargo, por acuerdo de tres de marzo de dos mil ocho, el juez requirió a la parte quejosa, para que precisara los actos de todas y cada una de las autoridades que señaló como responsables.

El once de marzo de dos mil ocho, el ejido quejoso presentó su **escrito aclaratorio** (foja 5025 a 5045) en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en los términos

siguientes:

"(...) En virtud de contener varios requerimientos en uno solo procedo a dar cumplimiento a cada uno de ellos separándolos de la forma siguiente:

1. Por lo que hace, a lo señalado en forma textual: " ... precise los actos que reclama de cada una de las autoridades que señala como de responsables, debiendo hacerles imputación directa y exacta de éstos ... " es de manifestarse bajo protesta de decir verdad que los actos reclamados a cada una de las autoridades responsables que se señalan en la ampliación de la demanda y las imputaciones directas y exactas de estos, se realiza de la forma siguiente:

a).- Por lo que hace al acto reclamado marcado con el número "1" del escrito de ampliación de la demanda que en forma textual dice:

• Los decretos, acuerdos, actas administrativas o de cualquier otra índole que hayan emitido las autoridades responsables para la afectación del inmueble ubicado en la calle Juan Bosco, calle San Lorenzo, colonia Huipulco, delegación Tlalpan, clasificación catastral 53-002-02 con superficie de 552.92 metros cuadrados y las medidas y colindancias siguientes: al Norte de 25.47 metros, con cerrada de San Lorenzo; al Este el (sic) 21.80 metros con propiedad particular; al Sur en 24.07 metros con calle Juan Bosco; y al Oeste en 22.90 metros con calle San Lorenzo, predio que se encuentra dentro de las poligonales de dotación y ampliación con que fue beneficiado el ejido quejoso.

Este acto se lo imputamos al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; al Secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Gobierno del Distrito Federal; al Jefe de Gobierno del Distrito Federal; al Director General del Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal; al Director de Administración Inmobiliaria de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal; al Director de Inspección e Investigación Inmobiliaria de la Oficialía del Gobierno del Distrito Federal; al Subdirector de Inspección e Investigación Inmobiliaria de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal; a la Subdirectora de Apoyo Jurídico Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal; al Director de Investigación Inmobiliaria, Estudios y Proyectos del Gobierno del Distrito Federal; al Jefe de la Unidad Departamental de Análisis y Proyectos Inmobiliarios de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal; al Director General de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET); al Director de Comercialización y Administración Inmobiliaria de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET); al Director de Administración y Finanzas de Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V. (SERVIMET); al Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal; al Jefe Delegacional de la Delegación del Gobierno del Distrito Federal en Tlalpan; al Subdelegado de Desarrollo Social de la Delegación del Gobierno del Distrito Federal en Tlalpan; al Subdelegado Jurídico y de Gobierno de la Delegación del Gobierno del Distrito Federal en Tlalpan; al

Subdelegado de Administración de la Delegación del Gobierno del Distrito Federal en Tlalpan; al Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Delegación Tlalpan; al Tesorero de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal hoy Jefe de Finanzas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal; al Director de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT); al Director de Regularización Territorial y Tenencia de la Tierra del Gobierno del Distrito Federal; al Jefe de la Unidad Departamental de Padrón Inmobiliario y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal; al Jefe de la Unidad Departamental de Padrón Inmobiliario y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal; y a la Jefa Delegación del Gobierno del Distrito Federal en Tlalpan; lo anterior se acredita con las copias simples que se adjuntaron al escrito de ampliación de la demanda de amparo de las cuales se desprenden su participación.

b).- Por lo que hace al acto reclamado marcado con el número "II" del escrito de ampliación de la demanda que en forma textual dice:

II. El decreto por el que se desincorpora del dominio público del Departamento del Distrito Federal los predios ubicados en las zonas que se indican, y se autoriza al mismo departamento para venderlos fuera de subasta pública (registrado con el número 3340), de fecha 7 de marzo de 1980, emitido por el Presidente de la República y refrendado por el entonces Secretario de Programación y Presupuesto, hoy Secretario de Hacienda y Crédito Público; por el Secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y por el entonces Jefe del Departamento del Distrito Federal, hoy Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en 14 de marzo de 1980, por medio del cual se afecta con el número 119 de la lista de inmuebles desincorporados del Departamento del Distrito Federal, hoy Gobierno del Distrito Federal, referente al ubicado en calle Juan Bosco, calle San Lorenzo, y cerrada San Lorenzo Colonia Huipulco, delegación Tlalpan, clasificación catastral 53-002-02, con superficie de 552.92 metros cuadrados y las medidas y colindancias siguientes: al Norte de 25.47 metros, con cerrada de San Lorenzo; al Este el (sic) 21.80 metros con propiedad particular; al Sur en 24.07 metros con calle Juan Bosco; y al Oeste en 22.90 metros con calle San Lorenzo, predio que se encuentra dentro de las poligonales de dotación y ampliación con que fue beneficiado el ejido quejoso, lo anterior sin que exista decreto de expropiación alguno que ordene afectar las tierras ejidales del impetrante de garantías.

Este acto se lo atribuimos en cuanto a su expedición al Presidente de la República y en cuanto a su refrendo al entonces Secretario de Programación y Presupuesto, hoy Secretario de Hacienda y Crédito Público; por el Secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y por el entonces Jefe del Departamento del Distrito Federal, hoy Jefe de Gobierno del Distrito Federal; y por lo que hace a su ejecución a todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables en su doble aspecto de ordenadoras y ejecutoras, en virtud de desconocerse el carácter con que están actuando.

c). Por lo que hace al acto reclamado marcado con el número

"III" del escrito de ampliación de la demanda que en forma textual dice:

III. El acta de entrega recepción de la administración de inmuebles que integra el Programa de Centros de Barrio y Servicio de fecha 31 de julio de 1998, realizada en el inmueble denominado "Centro de Barrio Huipulco", ubicado en calle San Juan Bosco sin número, esquina San Lorenzo, Colonia Huipulco, Delegación Tlalpan, Distrito Federal, celebrada entre el Director General de Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V. (SERVIMET), el entonces Oficial Mayor del Departamento del Distrito Federal hoy del Gobierno del Distrito Federal, el Director General del Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal y por la Delegación de Tlalpan el Jefe Delegacional y otros por medio del cual se entrega al Departamento del Distrito Federal el inmueble ubicado en calle Juan Bosco, calle San Lorenzo y cerrada San Lorenzo Colonia Huipulco, Delegación de Tlalpan, clasificación catastral 53-002-02 con Superficie de 552.92 metros cuadrados y las medidas y colindancias siguientes: al Norte de 25.47 metros, con cerrada de San Lorenzo; al Este el 21.80 metros con propiedad particular al Sur en 24.07 metros con calle Juan Bosco; y al Oeste en 22.90 metros con calle San Lorenzo, predio que es propiedad del ejido quejoso por encontrarse dentro de las tierras con que fue beneficiado.

Este acto se lo imputamos en cuanto a su celebración al Director General de Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V. (SERVIMET), el entonces Oficial Mayor del Departamento del Distrito Federal hoy del Gobierno del Distrito Federal, el Director General del Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal y por la Delegación Tlalpan el Jefe Delegacional en Tlalpan; y por lo que hace a su ejecución a todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables en su doble aspecto de ordenadora y ejecutoras, en virtud de desconocerse el carácter con que están actuando.

d).- Por lo que hace al acto reclamado marcado con el número "IV" del escrito de ampliación de la demanda en forma textual dice:

IV. El oficio número 2485 DIIYSI de fecha 4 de agosto de 1999, mediante el cual se informa al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, que el predio ubicado en calle Juan Bosco, calle San Lorenzo y cerrada San Lorenzo Colonia Huipulco, Delegación de Tlalpan, clasificación catastral 53-002-02 con superficie de 552.92 metros cuadrados y las medidas y colindancias siguientes: al Norte de 25.47 metros, con cerrada de San Lorenzo; al Este el 21.80 metros con propiedad particular; al Sur en 24.07 metros con calle Juan Bosco; y al Oeste en 22.90 metros con calle San Lorenzo, predio que es propiedad del ejido quejoso por encontrarse dentro de las tierras con que fue beneficiado, le corresponde la cuenta catastral anterior y actual 053-002-01 y 053-002-02.

Este acto se lo imputamos en cuanto a su emisión al Director de Inventario Inmobiliario y Sistema de Información del a Dirección General del Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal, José Fernando González Ayala quien fungía en ese entonces, adjuntando copia simple del mismo para que obre como prueba y forme parte

Por lo que hace a su ejecución se le atribuye a todas y cada una de las autoridades responsables en su doble aspecto de ordenadoras y ejecutoras, en virtud de que se desconoce el carácter con el que están actuando,

e).- Por lo que hace al acto reclamado marcado con el número "V" del escrito de ampliación de la demanda que en forma textual dice:

V. La inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del predio ubicado en calle Juan Bosco, calle San Lorenzo y cerrada San Lorenzo Colonia Huipulco, Delegación de Tlalpan, clasificación catastral 53-002-02 con superficie de 552.92 metros cuadrados y las medidas y colindancias siguientes: al Norte de 25.47 metros, con cerrada de San Lorenzo; al Este el 21.80 metros con propiedad particular; al Sur en 24.07 metros con calle Juan Bosco; y al Oeste en 22.90 metros con calle San Lorenzo, predio que es propiedad del ejido quejoso por encontrarse dentro de las tierras con que fue beneficiado, a favor del Gobierno del Distrito Federal.

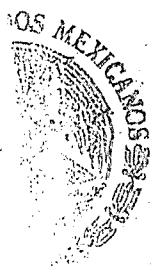
Este acto se lo imputamos al Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, como se desprende de la solicitud de entrada y trámite del registro en comento, la cual se adjunta en copia simple a este desahogo para que forme parte integrante de la ampliación de la demanda.

Por lo que hace a su ejecución se le atribuye a todas y cada una de las autoridades responsables en su doble aspecto de ordenadoras y ejecutoras, en virtud de que se desconoce el carácter con el que están actuando,

f).- Por lo que hace al acto reclamado marcado con el número "VI" del escrito de ampliación de la demanda que en forma textual dice:

VI. El oficio número 3097 DIIYSI de fecha 28 de septiembre de 1999, mediante el cual se le informa al Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Delegación Tlalpan, que el predio ubicado en calle Juan Bosco, calle San Lorenzo y cerrada San Lorenzo Colonia Huipulco, Delegación de Tlalpan, clasificación catastral 53-002-02 con superficie de 552.92 metros cuadrados y las medidas y colindancias siguientes: al Norte de 25.47 metros, con cerrada de San Lorenzo; al Este el 21.80 metros con propiedad particular; al Sur en 24.07 metros con calle Juan Bosco; y al Oeste en 22.90 metros con calle San Lorenzo, predio que es propiedad del ejido quejoso por encontrarse dentro de las tierras con que fue beneficiado, quedó inscrito a favor del Gobierno del Distrito Federal con el folio real número 1155292.

Este acto se lo imputamos en cuanto a su emisión al Director de Inventario Inmobiliario y Sistema de Información de la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal, José Fernando González Ayala, quien fungía en ése entonces adjuntando copia simple del mismo para que obre como prueba forme parte integrante de la ampliación de la demanda.



COLEGIO
ADMINISTRATIVO
ACUATO

Por lo que hace a su ejecución se le atribuye a todas y cada una de las autoridades responsables en su doble aspecto de ordenadoras y ejecutoras, en virtud de que se desconoce el carácter con el que están actuando,

g).- Por lo que hace al acto reclamado marcado con el número "VII" del escrito de ampliación de la demanda que en forma textual dice:

VII. El oficio número C21-UDAI-43299 de fecha 7 de mayo de 1999, por medio del cual el Subdelegado Jurídico y de Gobierno en Tlalpan remite el acta de entrega recepción del inmueble ubicado en calle Juan Bosco, calle San Lorenzo y cerrada San Lorenzo Colonia Huipulco, Delegación de Tlalpan, clasificación catastral 53-002-02 con superficie de 552.92 metros cuadrados y las medidas y colindancias siguientes: al Norte de 25.47 metros, con cerrada de San Lorenzo; al Este el 21.80 metros con propiedad particular; al Sur en 24.07 metros con calle Juan Bosco; y al Oeste en 22.90 metros con calle San Lorenzo, predio que es propiedad del ejido quejoso por encontrarse dentro de las tierras con que fue beneficiado, para la instalación de la Oficina de Licencias y Tesorería del Gobierno del Distrito Federal.

Este acto se lo imputo en cuanto a su emisión al Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales en Tlalpan del Gobierno del Distrito Federal Licenciado Rafael Barbarena Hurtado, adjuntando copia del mismo para que obre como prueba y forme parte integral de la ampliación de demanda.

Por lo que hace a su ejecución se le atribuye a todas y cada una de las autoridades responsables en su doble aspecto de ordenadoras y ejecutoras, en virtud de que se desconoce el carácter con el que están actuando,

h).- Por lo que hace al acto reclamado marcado con el número VIII" del escrito de ampliación de la demanda que en forma textual dice:

VIII. La sesión ordinaria 66/97 de fecha 23 de octubre de 1997, en la cual se acordó que el predio ubicado en calle Juan Bosco, calle San Lorenzo y cerrada San Lorenzo Colonia Huipulco, Delegación de Tlalpan, clasificación catastral 53-002-02, con superficie de 552.92 metros cuadrados y las medidas y colindancias siguientes: al Norte de 25.47 metros, con cerrada de San Lorenzo; al Este el 21.80 metros con propiedad particular; al Sur en 24.07 metros con calle Juan Bosco; y al Oeste en 22.90 metros con calle San Lorenzo, predio que es propiedad del ejido quejoso por encontrarse dentro de las tierras con que fue beneficiado, marcado con el número progresivo 26, se destinó para un Centro de Barrio y Servicio.

Este acto se lo imputamos en cuanto a su emisión a Servicios Metropolitanos S. A. de C. V., al Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y al Comité del Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal.

Por lo que hace a su ejecución se le atribuye a todas y cada una de las autoridades responsables en su doble aspecto de ordenadoras y ejecutoras, en virtud de que se desconoce el carácter con el que están actuando,

i).- Por lo que hace al acto reclamado marcado con el número "IX" del escrito de ampliación de la demanda que en forma textual dice:

IX. El acta administrativa de entrega-recepción física del inmueble denominado "Deportivo San Nicolás Tolentino", ubicado en calle Ex Hacienda de San Nicolás Tolentino y Ejido de Huipulco, Colonia Prados Coapa, Delegación Tlalpan, con superficie de 14387.908 metros cuadrados, con motivo de la asignación a favor de la Delegación Tlalpan, derivado del acuerdo emitido por el Comité del Patrimonio Inmobiliario en su Novena Sesión Ordinaria (9/2005) de fecha 12 de mayo de 2005, por medio de la cual el Director General del Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, por medio del cual realiza la diligencia administrativa de entrega-recepción del inmueble antes descrito al Jefe Delegacional en Tlalpan y otras autoridades, y que se especifica en el Plano Topográfico clave CT058-C2/2005 de fecha 4 de mayo de 2005, elaborado por la Subdirección de Inspección e Investigación Inmobiliaria de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, toda vez que dicho predio se encuentra dentro de las poligonales con las que fue beneficiado el ejido quejoso.

Este acto se lo imputamos en cuanto a su emisión a Servicios Metropolitanos S. A. de C. V., al Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal a la Subdirectora de Administración Inmobiliaria, Subdirector de Inspección e Investigación Inmobiliaria y al Jefe de la Unidad departamental de Análisis y Proyectos Inmobiliarios éstos últimos dependientes de la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal; así como al C. Jefe Delegacional del Gobierno del Distrito Federal en Tlalpan y al Director General de Desarrollo Social de la Delegación del Gobierno del Distrito Federal en Tlalpan.

Por lo que hace a su ejecución se le atribuye a todas y cada una de las autoridades responsables en su doble aspecto de ordenadoras y ejecutoras, en virtud de que se desconoce el carácter con el que están actuando,

j).- Por lo que hace al acto reclamado marcado con el número "X" del escrito de ampliación de la demanda que en forma textual dice:

X. El acta de sesión ordinaria 9/2005 de fecha 12 de mayo de 2005, que contiene el acuerdo emitido por el Comité del Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal, por medio del cual asigna a favor de la Delegación de Tlalpan el inmueble denominado "Deportivo San Nicolás Tolentino", ubicado en calle Ex Hacienda de San Nicolás Tolentino y Ejido de Huipulco, Colonia Prados Coapa, Delegación Tlalpan, con superficie de 14387.908 metros cuadrados, en virtud de que el mismo afecta las tierras con que fue beneficiado el ejido quejoso.

Este acto se lo imputamos en cuanto a su emisión al Comité del Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal así como al Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, a la Subdirectora de Administración Inmobiliaria, Subdirector de Inspección e Investigación Inmobiliaria y al Jefe de la Unidad departamental de Análisis y Proyectos Inmobiliarios éstos últimos dependientes de la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal.

Por lo que hace a su ejecución se le atribuye a todas y cada una de las autoridades responsables en su doble aspecto de ordenadoras y ejecutoras, en virtud de que se desconoce el carácter con el que están actuando,

k).- Por lo que hace al acto reclamado marcado con el número "XI" del escrito de ampliación de la demanda que en forma textual dice:

XI. Los acuerdos, actas, decretos o de cualquier otra índole por medio de los cuales se ordena la afectación de la propiedad de los inmuebles propiedad del quejoso a favor del Departamento, del Distrito Federal hoy Gobierno del Distrito Federal el ubicado en:

1. El ubicado en Calzada México Xochimilco, esquina Viaducto Tlalpan y Periférico, servicio Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y Módulo Deportivo, con una superficie de 6500 metros cuadrados;

2. El ubicado en Calzada de Tlalpan s/n casi esquina Acoxta, unidad Médica Militar Familiar número 7, con una superficie de 4000 metros cuadrados.

3. El ubicado en Viaducto Tlalpan esquina San Juan Bosco denominado Centro Deportivo "Don Bosco", con una superficie de 2,301 metros cuadrados;

4. El ubicado en Calzada Acueducto esquina Calzada de Tlalpan "Parque Recreativo", con una superficie de 3500 metros cuadrados;

5. El ubicado en Calzada de Tlalpan, esquina calzada Acoxta y Viaducto Tlalpan, paradero "Estadio Azteca", Campamento de Desazolve y Mercado de Comidas, con una superficie de 15000 metros cuadrados.

6. El ubicada en Calzada de Tlalpan número 4379, "Oficinas de la Dirección General de Administración en Tlalpan", con una superficie de 450 metros cuadrados;

7. El ubicado en Calzada Acueducto entre San Juan de Dios y San Juan Bosco "Campamento de Limpia" con una superficie de 900 metros cuadrados;

Cerrada de San Lorenzo "Oficina de Tesorería, Oficina de Licencias y Control Vehicular y Consultorio Huipulco" con una superficie de 300 metros cuadrados.

9. El ubicado en calle San Juan Bosco número 1 entre Calzada de Tlalpan y Calzada Acueducto "Jardín de Niños Cámara Junior", con una superficie de 2500 metros cuadrados;

10. El ubicado en Calzada Acueducto esquina San Juan Bosco y San Lorenzo "Primaria Estado de San Luis Potosí", con una superficie de 2800 metros cuadrados;

11. El ubicado en Calzada Acueducto casi esquina San Juan de Dios "Rebombero Abastecimiento de Pipas", con una superficie de 480 metros cuadrados;

12. El ubicado en Viaducto Tlalpan entre calle Capirote y Arenal "Pozo Xochimilco 28", con una superficie de 120 metros cuadrados;

13. El ubicado en Periférico casi esquina Viaducto Tlalpan "Pozo 6", con una superficie de 250 metros cuadrados;

14. El ubicado en Viaducto Tlalpan entre San Juan de Dios y San Juan Bosco "Pozo 29", con una superficie de 240 metros cuadrados;

15. El ubicado en Viaducto Tlalpan, esquina Calzada Acoxpa "Pozo Xochi 30", con una superficie de 250 metros cuadrados;

16. El ubicado en Calzada de Tlalpan junto a la estación de mantenimiento del Tren Ligero "Pozo Periférico 4", con una superficie de 300 metros cuadrados;

17. El ubicado en Calzada de Tlalpan entre San Juan de Dios y San Juan Bosco "remanente con giro comercial", con una superficie de 79.244 metros cuadrados;

18. El ubicado en calle Huipulco con número 20 entre Calzada de Tlalpan y Calzada México Xochimilco, "terreno con construcción" con una especie de 575.66 metros cuadrados

19. El ubicado en calle San Lorenzo entre La Paz y Cerrada San Juan Lorenzo "Iglesia San Lorenzo Mártir" con una superficie de 1000 metros cuadrados.

20. El ubicado en Calzada Acueducto esquina San Juan de Dios "estacionamiento Compañía Luz y Fuerza" con una superficie de 150 metros cuadrados.

21. El ubicado en Calzada de Tlalpan número 3652 esquina Calzada Acueducto "Subestación Eléctrica Tren Ligero", con una superficie de 200 metros cuadrados.

22. El ubicado en Hacienda de San Nicolás Tolentino entre Hacienda de Xilotonco y Hacienda de San Nicolás Tolentino

Nicolás Tolentino, Pozo, Biblioteca, Casa de Salud T-1 Y Cibertlalpan", con una superficie de 18586.91 metros cuadrados.

Lo anterior en virtud de que dichos inmuebles se encuentran dentro de las poligonales de terrenos con que fue beneficiado el ejido quejoso, por lo que dichos actos están afectando la propiedad agraria.

Este acto se lo imputamos al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; al Secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Director General del Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal; al Director de Administración Inmobiliaria de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, al Director de Inspección e Investigación Inmobiliaria de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, al Subdirector de Inspección e Investigación Inmobiliaria de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, a la Subdirectora de Apoyo Jurídico Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal, al Director de Investigación Inmobiliaria de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, al Jefe de la Unidad Departamental de Análisis y Proyectos Inmobiliarios de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, al Director General de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET), al Director de Comercialización y Administración Inmobiliaria de Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V. (SERVIMET), al Director de Administración y Finanzas Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V. (SERVIMET), al Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, al Jefe Delegacional de la Delegación del Distrito Federal en Tlalpan, al Subdelegado de Desarrollo Social de la Delegación del Distrito Federal en Tlalpan, al Subdelegado Jurídico y de Gobierno de la Delegación del Distrito Federal en Tlalpan, al Subdelegado de Administración de la Delegación del Distrito Federal en Tlalpan, al Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Delegación Tlalpan, al Tesorero de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, al Director de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, al Director de Regularización Territorial y Tenencia de la Tierra del Gobierno del Distrito Federal, al Jefe de la Unidad Departamental de Padrón Inmobiliario y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, al Jefe de la Unidad Departamental de Padrón Inmobiliario y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, Jefatura Delegación en Tlalpan y al la Jefa Delegación del Gobierno del Distrito Federal en Tlalpan, lo anterior se acredita con las copias simples que se adjuntaron al escrito de ampliación de la demanda de amparo de las cuales se advierte su participación.

Así mismo, manifestamos bajo protesta de decir verdad que se desconoce por los suscritos el carácter con que están actuando dichas autoridades en la emisión del acto que se les imputa, es por lo que, dicha imputación se les hace en su doble aspecto de ordenadoras y ejecutoras.

1).- Por lo que hace al acto reclamado marcado con el número "XII" del escrito de ampliación de la demanda que en forma textual dice:

VII. Los decretos, acuerdos, actos administrativos de cualquier

los terrenos con los que fue beneficiado el ejido quejoso y que se adjudicaron al Departamento del Distrito Federal hoy Gobierno del Distrito Federal, así como los decretos, acuerdos, oficios y actas administrativas con las que pretenden desincorporar del dominio público del Departamento del Distrito Federal hoy Gobierno del Distrito Federal los inmuebles afectados al impetrante de garantías y en los cuales se ubicaron las oficinas públicas que se indican en la relación de inmuebles que emitió la Dirección General Jurídica y de Gobierno Dirección de Regularización Territorial y Tenencia de la Tierra U. D. Padrón Inmobiliario y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal Jefatura Delegación en Tlalpan documento que se adjunta a esta demanda en copia simple para los efectos legales conducentes y en la que se indica que los inmuebles son los siguientes: I. El ubicado en Calzada México Xochimilco esquina Viaducto Tlalpan y Periférico servicio Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y Módulo Deportivo, con una superficie de 6500 metros cuadrados; II. El ubicado en Calzada de Tlalpan s/n casi esquina Acoxta, Unidad Médica Familiar Número 7, con una superficie de 4000 metros cuadrados; III. El ubicado en Viaducto Tlalpan esquina San Juan Bosco denominado Centro Deportivo "Don Bosco", con una superficie de 2,301 metros cuadrados; IV.- El ubicado en Calzada Acueducto esquina Calzada de Tlalpan "Parque Recreativo", con una superficie de 3500 metros cuadrados; V.- El ubicado en Calzada de Tlalpan esquina Calzada Acoxta y Viaducto Tlalpan, paradero "Estadio Azteca", Campamento de Desazolve y Mercado de Comidas, con una superficie de 15000 metros cuadrados; VI.- El ubicado en Calzada de Tlalpan número 4379, "Oficinas de la Dirección General de Administración en Tlalpan", con una superficie de 450 metros cuadrados; VII. El ubicado en Calzada Acueducto entre San Juan de Dios y San Juan Bosco "Campamento de Limpia", con una superficie de 900 metros cuadrados; VIII. El ubicado en calle San Lorenzo entre San Juan Bosco y Cerrada de San Lorenzo "Oficina de Tesorería, Oficina de Licencias y Control Vehicular, y Consultorio Huipulco", con una superficie de 300 metros cuadrados; IX. El ubicado en calle San Juan Bosco número 1 entre Calzada de Tlalpan y Calzada Acueducto "Jardín de Niños Cámara Junior", con una superficie de 2500 metros cuadrados; X. El ubicado en Calzada Acueducto esquina San Juan Bosco y San Lorenzo "Primaria Estado de San Luis Potosí", con una superficie de 2800 metros cuadrados; XI. El ubicado en Calzada Acueducto casi esquina San Juan de Dios "Rebombeo Abastecimiento de Pipas", con una superficie de 480 metros cuadrados; XII. El ubicado en Viaducto Tlalpan entre calle Capirote y Arenal "Pozo Xochimilco 28", con una superficie de 120 metros cuadrados; XIII. El ubicado en Periférico casi esquina Viaducto Tlalpan "Pozo 6", con una superficie de 250 metros cuadrados; XIV. El ubicado en Viaducto Tlalpan entre San Juan de Dios y San Juan Bosco "Pozo 29", con una superficie de 240 metros cuadrados; XV. El ubicado en Viaducto Tlalpan, esquina Calzada Acoxta "Pozo Xochi 30", con una superficie de 250 metros cuadrados; XVI. El ubicado en Calzada de Tlalpan junto a la estación de mantenimiento del Tren Ligero "Pozo Periférico 4", con una superficie de 300 metros cuadrados; XVII. El ubicado en Calzada de Tlalpan entre San Juan de Dios y San Juan Bosco "remanente con giro comercial", con una superficie de 79.244 metros cuadrados; XVIII. El ubicado en calle Huipulco con número 20 entre Calzada de Tlalpan y Calzada México Xochimilco, "terreno con servidumbre".



de 575.66 metros cuadrados; XIX. El ubicado en calle San Lorenzo entre La Paz y Cerrada San Juan Lorenzo "Iglesia San Lorenzo Mártir" con una superficie de 1000 metros cuadrados. XX. El ubicado en Calzada Acueducto esquina San Juan de Dios "estacionamiento Compañía Luz y Fuerza" con una superficie de 150 metros cuadrados. XXI. El ubicado en Calzada de Tlalpan número 3652 esquina Calzada Acueducto "Subestación Eléctrica Tren Ligero", con una superficie de 200 metros cuadrados. XXII. El ubicado en Hacienda de San Nicolás Tolentino entre Hacienda de Xilotepec y Hacienda de Jalaltengo "Centro Deportivo San Nicolás Tolentino, Pozo, Biblioteca, Casa de Salud T-1 y Cibertlalpan", con una superficie de 18586.91 metros cuadrados, toda vez que dichos inmuebles se encuentran dentro de los poligonales de terrenos con que fue beneficiado el ejido quejoso, por lo que dichos actos están afectando la propiedad agraria.

Este acto se lo imputamos al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; al Secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Director General del Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal; al Director de Administración Inmobiliaria de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, al Director de Inspección e Investigación Inmobiliaria de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, al Subdirector de Inspección e Investigación Inmobiliaria de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, a la Subdirectora de Apoyo Jurídico Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal, al Director de Investigación Inmobiliaria de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, al Jefe de la Unidad Departamental de Análisis y Proyectos Inmobiliarios de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, al Director General de Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V. (SERVIMET), al Director de Comercialización y Administración Inmobiliaria de Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V. (SERVIMET), al Director de Administración y Finanzas Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V. (SERVIMET), al Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, al Jefe Delegacional de la Delegación del Distrito Federal en Tlalpan, al Subdelegado de Desarrollo Social de la Delegación del Distrito Federal en Tlalpan, al Subdelegado Jurídico y de Gobierno de la Delegación del Distrito Federal en Tlalpan, al Subdelegado de Administración de la Delegación del Distrito Federal en Tlalpan, al Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Delegación Tlalpan, al Tesorero de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, al Director de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, al Director de Regularización Territorial y Tenencia de la Tierra del Gobierno del Distrito Federal, al Jefe de la Unidad Departamental de Padrón Inmobiliario y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, al Jefe de la Unidad Departamental de Padrón Inmobiliario y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, Jefatura Delegación en Tlalpan y al Jefe Delegación del Gobierno del Distrito Federal en Tlalpan, lo anterior se acredita con las copias simples que se adjuntaron al escrito de ampliación de la demanda de amparo de las cuales se advierte su participación.

Así mismo, manifestamos bajo protesta de decir verdad que (sic) desconocerse por los suscritos el carácter con que están actuando dichas autoridades en la emisión del acto que se les imputa, es por lo

y ejecutoras.

M).- Por lo que hace al acto reclamado marcado con el número "XIII" del escrito de ampliación de la demanda que en forma textual dice:

XIII. El convenio celebrado entre el Departamento el Distrito Federal hoy Gobierno del Distrito Federal e Inmuebles Tlalpan, S. A., relativo a la autorización del fraccionamiento "PRADO COAPA SEGUNDA SECCIÓN", en Villa Coapa, Delegación de Tlalpan, Distrito Federal, de fecha 20 de mayo de 1972, en virtud de que con el mismo se afecta una fracción de las poligonales de los terrenos con que fue beneficiado el ejido quejoso, ubicado en San Nicolás Tolentino, con una superficie de 18,586.91 metros cuadrados, y en el que se instaló el Centro Deportivo "San Nicolás Tolentino", Pozo, Biblioteca, Casa de Salud T-1 y Cibertlalpan, ya que en dicho convenio se pretendió donar al entonces Departamento del Distrito Federal hoy Gobierno del Distrito Federal una superficie que no pertenece a Inmuebles Tlalpan, S. A., sino al impetrante de garantías tal y como se especifica en los antecedentes de esta demanda.

Este acto se lo imputamos en cuanto a su emisión al entonces Jefe del Departamento del Distrito Federal Licenciado Octavio Senties Gómez hoy Jefe del Gobierno del Distrito Federal y al Director General de Planeación de la Oficina Planeación y Fraccionamientos del Gobierno del Distrito Federal.

Por lo que hace a su ejecución se le atribuye a todas y cada una de las autoridades responsables en su doble aspecto de ordenadoras y ejecutoras, en virtud de que se desconoce el carácter con el que están actuando.

n).- Por lo que hace al acto reclamado marcado con el número "XIV" del escrito de ampliación de la demanda que en forma textual dice:

XIV. El Plano aprobado por el entonces Departamento del Distrito Federal de abril de 1972 escala 1:1 000 en el que se pretende señalar la superficie de 56,591.15 metros cuadrados que supuestamente dona Inmuebles Tlalpan, S. A., al Departamento para Servicios Públicos del Fraccionamiento Prado Coapa Segunda Sección, mismo que se especifica en el convenio de fecha 20 de mayo de 1972 mismo que quedó especificado en el acto reclamado inmediato anterior y con el que se pretende justificar que el Centro Deportivo "San Nicolás Tolentino", Pozo, Biblioteca, Casa de Salud T-1 y Cibertlalpan, se encuentra dentro de la donación que hace el fraccionador, siendo que dicho deportivo se encuentra dentro de las poligonales con las que fue beneficiado el ejido quejoso.

Este acto se lo imputamos en cuanto a su emisión al entonces Jefe del Departamento del Distrito Federal Licenciado Octavio Senties Gómez hoy Jefe del Gobierno del Distrito Federal y al Director General de Planeación de la Oficina Planeación y Fraccionamientos del Gobierno del Distrito Federal.

Por lo que hace a su ejecución se le atribuye a todas y cada una de las autoridades responsables en su doble aspecto de ordenadoras y ejecutoras, en virtud de que se desconoce el carácter con el que están actuando.

ejecutoras, en virtud de que se desconoce el carácter con el que están actuando.

O).- Por lo que hace al acto reclamado marcado con el número "XV del escrito de ampliación de la demanda que en forma textual dice:

XV. Los permisos, autorizaciones, licencias de construcción y funcionamiento, la aprobación de planos, las autorizaciones para construcciones y urbanización que están otorgando las autoridades responsables y que afectan la superficie de terreno con que fue beneficiado el ejido quejoso, a pesar de que los impetrantes de garantías han hecho de su conocimiento la afectación de sus tierras, como se acredita con las quejas y escritos que se adjuntan a esta demanda.

Este acto se lo imputamos al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; al Secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Director General del Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal; al Director de Administración Inmobiliaria de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, al Director de Inspección e Investigación Inmobiliaria de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, al Subdirector de Inspección e Investigación Inmobiliaria de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, a la Subdirectora de Apoyo Jurídico Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal, al Director de Investigación Inmobiliaria de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, al Jefe de la Unidad Departamental de Análisis y Proyectos Inmobiliarios de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, al Director General de Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V. (SERVIMET), al Director de Comercialización y Administración Inmobiliaria de Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V. (SERVIMET), al Director de Administración y Finanzas Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V. (SERVIMET), al Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, al Jefe Delegacional de la Delegación del Distrito Federal en Tlalpan, al Subdelegado de Desarrollo Social de la Delegación del Distrito Federal en Tlalpan, al Subdelegado Jurídico y de Gobierno de la Delegación del Distrito Federal en Tlalpan, al Subdelegado de Administración de la Delegación del Distrito Federal en Tlalpan, al Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Delegación Tlalpan, al Tesorero de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, al Director de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, al Director de Regularización Territorial y Tenencia de la Tierra del Gobierno del Distrito Federal, al Jefe de la Unidad Departamental de Padrón Inmobiliario y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, al Jefe de la Unidad Departamental de Padrón Inmobiliario y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, Jefatura Delegación en Tlalpan y a la Jefa Delegacional del Gobierno del Distrito Federal en Tlalpan, lo anterior se acredita con las copias simples que se adjuntaron al escrito de ampliación de la demanda de amparo de las cuales se advierte su participación.

Así mismo, manifestamos bajo protesta de decir verdad que (sic) desconocerse por los suscritos el carácter con que están actuando

que, dicha imputación se les hace en un doble aspecto de ordenadoras y ejecutoras.

P).- Por lo que hace al acto reclamado marcado con el número "XVI" del escrito de ampliación de la demanda que en forma textual dice:

XVI. Del Juez Quincuagésimo de lo Civil del Tribunal Superior Distrito Federal se reclama la sentencia definitiva dictada en el juicio promovido por Flavio Jiménez Aguilar en contra de la Comisión para la regularización de la Tenencia de la Tierra y otro pendiente 193/98, Secretaría "A", en la que condenó a la Comisión regularización de la Tenencia de la Tierra a escriturar favor del señor Flavio Jiménez Aguilar, el lote diez, manzana seiscientos cincuenta y cinco, zona setenta y tres, ubicado en la calle forestal número seis, colonia Ex - Ejidos de Huipulco, Delegación de Tlalpan, código postal 14370, en el Distrito Federal en cumplimiento del Decreto Presidencial de expropiación de fecha 4 de enero de 1982, publicado en Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 1982, y toda vez que dicho decreto es violatorio de las garantías sociales de las que es titular el ejido que representamos fue reclamado en el escrito inicial de demanda, es por lo que se reclama la ejecución ordenada por el Juez A Quo, así como los actos procesales consistentes en los acuerdos admisivos, los que tienen por perdido el derecho para contestar la demanda, el auto que abre el periodo de pruebas, el auto que admite las pruebas ofrecidas por las partes, la audiencia de desahogo de pruebas, la citación para sentencia, el acuerdo que declara ejecutoriada la sentencia, el acuerdo que ordena la ejecución de la sentencia, el acuerdo que ordena la toma de posesión del bien inmueble propiedad del ejido quejoso, "derivados de la falta de emplazamiento al impetrante de garantías, por encontrarse viciados de origen, las sentencias de segunda instancia y las demás actuaciones que de ellos se deriven en virtud de que la quejosa nunca fue parte en los mismos, los cuales se especifican en los antecedentes de esta demanda.

Este acto se le imputa en su carácter de autoridad ordenadora al C. Juez Quincuagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y por lo que hace a la calidad de autoridad ejecutora a la Comisión para la regularización de la Tenencia de la Tierra.

Por lo que hace a su ejecución se le atribuye a todas y cada una de las autoridades responsables en su doble aspecto de ordenadoras y ejecutoras, en virtud de que se desconoce el carácter con el que están actuando.

Q).- Por lo que hace al acto reclamado marcado con el número "XVII" del escrito de ampliación de la demanda que en forma textual dice:

XVII. Las consecuencias lógico-jurídicas que se deriven de los anteriores actos reclamados que pueden consistir en la emisión de escrituras públicas su protocolización e inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Distrito Federal; la cancelación en el Registro Agrario Nacional de la inscripción de los documentos y derechos agrarios con que cuenta la impetrante de

garantías; la toma de posesión de las tierras y aguas de la quejosa; la orden u órdenes que emitan las autoridades responsables para desposeer y privar al impetrante de garantías de sus derechos agrarios; las demandas, juicios, procedimientos de tipo civil o administrativo, así como de cualquier otro que sin intervención de la impetrante de garantías o sin su emplazamiento se hayan realizado con el solo propósito de llevar a cabo los actos reclamados; la transmisión de la propiedad a terceros; la enajenación de las tierras y aguas propiedad de la impetrante de garantías a favor de terceros; la conformación de fideicomisos; la inscripción de escrituras públicas o privadas, sentencias civiles o resoluciones administrativas tendientes a privar al quejoso de sus derechos agrarios; la elaboración de planos de subdivisión; convenios o de cualquier otra índole; los planes programas o decretos de expropiación para la regularización o de cualquier otra índole que tengan como propósito llevar a cabo los actos que se reclaman; la expedición de licencias, permisos, constancias de uso de suelo, alineamiento y número oficial; boletas prediales; planos de lotificación; autorizaciones de lotificaciones, la demolición de las casas que se encuentran en la superficie de terreno afectados, su ocupación, la sustracción del régimen ejidal o de cualquier otra índole que tiendan a ejecutar los actos reclamados; la imposición de sanciones, arrestos administrativos o de cualquier otra índole emitidos en contra del quejoso o sus representantes tendientes a realizar los actos que se reclaman.

Este acto se lo imputamos al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; al Secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Director General del Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal; al Director de Administración Inmobiliaria de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, al Director de Inspección e Investigación Inmobiliaria de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, al Subdirector de Inspección e Investigación Inmobiliaria de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, a la Subdirectora de Apoyo Jurídico Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal, al Director de Investigación Inmobiliaria de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, al Jefe de la Unidad Departamental de Análisis y Proyectos Inmobiliarios de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, al Director General de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET), al Director de Comercialización y Administración Inmobiliaria de Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V. (SERVIMET), al Director de Administración y Finanzas Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V. (SERVIMET), al Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, al Jefe Delegacional de la Delegación del Distrito Federal en Tlalpan, al Subdelegado de Desarrollo Social de la Delegación del Distrito Federal en Tlalpan, al Subdelegado Jurídico y de Gobierno de la Delegación del Distrito Federal en Tlalpan, al Subdelegado de Administración de la Delegación del Distrito Federal en Tlalpan, al Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Delegación Tlalpan, al Tesorero de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, al Director de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, al Director de Regularización Territorial y Tenencia de la Tierra del Gobierno del Distrito Federal, al Jefe de la Unidad Departamental de Padrón Inmobiliario y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, al Jefe de la

del Distrito Federal, Jefatura Delegación en Tlalpan y al Jefe Delegación del Gobierno del Distrito Federal en Tlalpan, lo anterior se acredita con las copias simples que se adjuntaron al escrito de ampliación de la demanda de amparo de las cuales se advierte su participación.

Así mismo, manifestamos bajo protesta de decir verdad que a desconocerse por los suscritos el carácter con que están actuando dichas autoridades en la emisión del acto que se les imputa, es por lo que, dicha imputación se les hace en su doble aspecto de ordenadoras y ejecutoras."

Por acuerdo de trece de marzo de dos mil ocho, el Juzgado de distrito tuvo por ampliada la demanda de amparo, con excepción de la autoridad denominada Juez Quincuagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de la Ciudad de México, respecto del acto consistente en la emisión de la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil 193/98, por considerar que no era competente para conocer dicho acto, dejando a salvo los derechos de la parte quejosa, por lo que solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe con justificación, dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y ordenó emplazar con el carácter de tercero perjudicado a Flavio Jiménez Aguilar.

NOVENO. Por acuerdo de veintidós de abril de dos mil ocho, se tuvieron por desahogados los requerimientos realizados a la parte quejosa respecto de las denominaciones actuales y correctas de diversas autoridades señaladas como responsables.

DÉCIMO. Por escrito presentado en el Juzgado del conocimiento el diez de junio de dos mil diez, la parte quejosa pretendió promover una nueva ampliación a su demanda de amparo; sin embargo, fue desechada en la audiencia constitucional celebrada el once de junio de dos mil diez.

DÉCIMO PRIMERO. Por medio de acta de entrega de veintitrés de junio de dos mil diez, signada por el Juez de Distrito, se remitieron los autos al Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, el que dictó la **sentencia** respectiva el **diecinueve de agosto de dos mil diez**, en la que resolvió, por una parte, sobreseer en el juicio en contra de los actos y autoridades precisados en los considerandos tercero y quinto y, por otra, otorgar el amparo a la parte quejosa en contra de los actos de las autoridades precisadas en el último considerando.

DÉCIMO SEGUNDO. Inconformes con tal determinación, la parte quejosa, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, autoridades responsables de la Delegación Tlalpan de la ciudad, Presidente de la República y Secretario de la Reforma Agraria, interpusieron **recursos de revisión**, de los que, por cuestión de turno, conoció este Tribunal Colegiado, con el número de toca R.A. 363/2010; que en sesión de diez de marzo de dos mil once, resolvió al tenor de los puntos resolutivos siguientes:

“PRIMERO. Se confirma el desechamiento de la ampliación de demanda presentada el diez de junio de dos mil diez.

SEGUNDO. Se revoca la sentencia reclamada.

TERCERO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de garantías a que este toca se refiere, en los términos precisados en los considerandos tercero, cuarto y quinto de la

DÉCIMO TERCERO. En cumplimiento a lo anterior, por acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil once, el juez de Distrito, por una parte, ordenó emplazar a juicio a la Asamblea Legislativa y al Comité de Patrimonio Inmobiliaria, ambos de la Ciudad de México, y por otra parte, solicitó diversas constancias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los recursos de revisión 1078/41 y 5326/56, radicados en la Segunda Sala de ese Tribunal, del incidente de inejecución 4/1955 de su índice y de las quejas relacionadas con el cumplimiento, las que en su momento fueron remitidas al juzgado.

DÉCIMO CUARTO. Por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil doce, el Juzgado de Distrito abrió de oficio el incidente de separación de juicios, en virtud de que del escrito de demanda se advirtió que la parte quejosa señaló los siguientes actos reclamados:

"... XVIII. Las sentencias dictadas en los juicios civiles, tramitados en los juzgados que se indican en los antecedentes de esta demanda, así como los actos procesales consistentes en los acuerdos admisorios los que tienen por perdido el derecho para contestar la demanda, el auto que abre el periodo de pruebas, el auto que admite las pruebas ofrecidas por las partes, la audiencia de desahogo de pruebas, la citación para sentencia, el acuerdo que declara ejecutoriada la sentencia, el acuerdo que ordena la ejecución de la sentencias, el acuerdo que ordena la toma de posesión del bien inmueble propiedad del ejido quejoso, derivados de la falta de emplazamiento al impetrante de garantías, por encontrarse viciados de origen, las sentencias de segunda instancia y las demás actuaciones que de ellos se deriven en virtud de que la quejosa nunca fue parte en los mismos, las cuales se especifican en los antecedentes de esta demanda."

Actos respecto de los cuales, al celebrarse la audiencia a que refiere el artículo 60 de la Ley de Amparo, el juez **decretó la separación de los juicios en cuanto a los actos reclamados de naturaleza civil**; y determinó remitir copia de la demanda de amparo y sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con copia certificada de la resolución y demanda de amparo, para que previos los trámites correspondientes fuera returnada a ese juzgado a fin de proveer lo que en derecho correspondiera.

Una vez returnada la demanda de amparo, por auto de veintiuno de diciembre de dos mil doce, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa formó el expediente de **amparo 1524/2012**; y **se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto por tratarse de actos de naturaleza civil**, por lo que ordenó su remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esa materia en la Ciudad de México.

Por auto de veintiséis de diciembre de dos mil doce, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, al que correspondió conocer de la demanda por razón de turno, la tuvo por recibida; la radicó con el número de amparo **1161/2012** y, previo a pronunciarse sobre su legal competencia, decretó la separación de los juicios civiles del identificado con el número 1489/2001, del índice del Juzgado Décimo Octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, promovido por Juan Ríos Hernández su sucesión. Hecho lo anterior, el Juez Segundo de Distrito



del asunto únicamente respecto de los actos derivados del juicio civil 1489/2001.

DÉCIMO QUINTO. Seguidos los trámites de ley, el veintiuno de diciembre de dos mil doce, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa llevó a cabo la audiencia constitucional, que concluyó con la sentencia que se terminó de engrosar el ocho de marzo de dos mil trece, en la que se resolvió lo siguiente:

"(...) PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de garantías número 579/2005, promovido por el EJIDO DE HUIPULCO, en el Distrito Federal, a través de su respectivo comisariado ejidal, en contra de los actos de las autoridades precisadas en el considerando tercero y quinto de este fallo.

SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A el EJIDO DE HUIPULCO, a través de su respectivo comisariado ejidal, en contra de los actos de las autoridades precisadas y para los efectos precisados en la parte final del último considerando del propio fallo. (...)."

DÉCIMO SEXTO. Inconformes con dicha sentencia, la parte quejosa, el Presidente de la República, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y uno de los terceros perjudicados interpusieron recursos de revisión, de los que conoció este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo Presidente, en auto de tres de abril del mismo año los admitió a trámite con número de toca **R.A. 120/2013**, que en sesión de ocho de noviembre de dos mil trece, se resolvió al tenor de los puntos resolutivos siguientes:

"(...) PRIMERO. Se revoca la sentencia reclamada.

SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de garantías a que este toca se refiere, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. (...)."

DÉCIMO SÉPTIMO. En cumplimiento a lo ordenado por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Juzgado de Distrito del conocimiento, mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil trece, determinó la realización de diversas actuaciones que constan en autos.

DÉCIMO OCTAVO. Mediante sentencia de diez de febrero de dos mil quince, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, determinó en el recurso de revisión R.C. **298/2014**, derivado del juicio de amparo indirecto **1161/2012**, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, que ese juez civil **carecía de competencia por razón de materia para conocer del asunto y que el legalmente competente para conocer del juicio era el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México**; razón por la cual revocó la citada sentencia y ordenó la remisión del asunto al juzgado mencionado, para su conocimiento y resolución.



PRIMERO TRIBUNAL
EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCULO

DÉCIMO NOVENO. En ese contexto, mediante auto de veinticinco de febrero de dos mil quince, **el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México se avocó al conocimiento del asunto, el cual quedó registrado con el número de amparo 259/2015, respecto del**

Por auto de veintiséis de febrero de dos mil quince, el juez hizo la precisión de que **los actos reclamados vinculados al juicio de amparo 259/2015 únicamente eran los derivados del juicio ordinario civil 1489/2001**, del índice del Juez Décimo Octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, promovido por Juan Ríos Hernández su sucesión en contra de Juana y Concepción, ambas de apellidos Lagarde Vásquez, en estricto cumplimiento a la ejecutoria de diez de febrero de dos mil quince dictada en el amparo en revisión **298/2014**, del índice de Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

VIGÉSIMO. Por auto de cuatro de marzo de dos mil quince, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa tuvo por recibida la resolución dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, engrosada el veintisiete de febrero de dos mil quince, dentro del juicio de amparo indirecto **1175/2012-I**, a través de la cual declinó competencia a su favor, para conocer de la demanda de amparo tramitada, por cuanto hace a los atribuidos al Juzgado Vigésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, deducidos del juicio ordinario civil **145/1975**, por considerar que subyace un asunto de naturaleza agraria; sin embargo, el Juzgado Octavo **no aceptó la legal competencia declinada** y sostuvo la incompetencia planteada en auto de veintiuno de diciembre de dos mil doce dictado en el juicio de amparo **1524/2012** (que derivó de la separación de juicios).

De lo anterior surgió el conflicto competencial civil **2/2015**, del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del

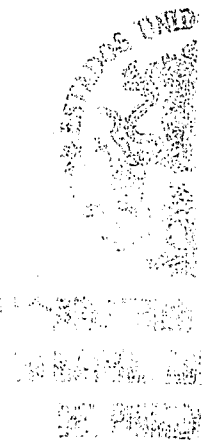
Primer Circuito, que concluyó mediante ejecutoria dictada el dieciocho de junio de dos mil quince, por medio de la cual **declaró la legal competencia de aquél asunto en favor del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.**

Seguidos los trámites de ley, se llevó a cabo la **audiencia constitucional** el dos de diciembre de dos mil dieciséis, en la que el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa dictó la sentencia respectiva, que concluyó con los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de garantías número 579/2005 y su acumulado 259/2015, promovidos por el EJIDO DE HUIPULCO, en la ciudad de México, a través de su respectivo comisariado ejidal, en contra de los actos y las autoridades precisados en los considerandos quinto y séptimo de este fallo.

SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE AL EJIDO DE HUIPULCO, a través de su respectivo comisariado ejidal, en contra de los actos de las autoridades precisadas y para los efectos precisados en la parte final del último considerando del propio fallo."

Dicha sentencia, se ordenó notificar personalmente a la quejosa, pero debido a que el actuario no logró practicarla por los motivos asentados en la razón actuarial respectiva, se practicó por lista del veintisiete de julio de dos mil diecisiete (foja 21536); mientras que al Jefe de Gobierno se notificó por oficio el veintiuno de julio del año citado (21541), así como al



Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano el uno de agosto de la anualidad mencionada (foja 21632 y 21634).

VIGÉSIMO PRIMERO. Inconformes con la sentencia anterior, respectivamente, el siete, once y quince, todos de agosto de dos mil diecisiete, el Director General de Servicios Legales, en representación del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la parte quejosa, así como el Director de Amparos en la Unidad de Asuntos Jurídicos, en representación de las autoridades pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, interpusieron recursos de revisión, de los que correspondió conocer a este tribunal por cuestión de turno, cuya Presidencia por acuerdo de cinco de enero de dos mil dieciocho, los admitió con número de toca **R.A. 467/2017**; y ordenó notificar al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, quien no formuló pedimento.

Por su parte, mediante escrito presentado el quince de enero de dos mil dieciocho, la Directora Jurídica del Sistema de Aguas, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, se adhirió al recurso de revisión, que la Presidencia de este tribunal admitió el veinticinco de enero del año mencionado.

VIGÉSIMO SEGUNDO. El dos de febrero de dos mil dieciocho, se turnaron los autos al Magistrado ponente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

VIGÉSIMO TERCERO. Por acuerdo de seis de septiembre de dos mil dieciocho, se informó a las partes que a

través del oficio CCJ/ST/4089/2018, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal y del oficio SEPLE./CJD/004/5291/2018, firmado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo citado, se autorizó al licenciado Ulises Oswaldo Rivera González, para que desempeñe las funciones de Magistrado de Circuito, en sustitución de la Magistrada María Antonieta Azuela Guitrón, a partir del dieciséis de septiembre del año en curso y hasta en tanto la Comisión citada lo determine o el Pleno del Consejo mencionado adscriba magistrado para integrar este órgano colegiado.

VIGÉSIMO CUARTO. Por acuerdo de once de diciembre de dos mil dieciocho, la Presidencia de este tribunal colegiado informó a las partes que por medio del oficio SEADS/1350/2018, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó que se adscribió al Magistrado Óscar Palomo Carrasco, en sustitución de la Magistrada María Antonieta Azuela Guitrón, para integrar este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis del mes y año mencionados.

VIGÉSIMO QUINTO. El asunto se listó el siete de enero de dos mil diecinueve, para ser visto en la sesión pública de once siguiente, en la que los integrantes de este tribunal colegiado determinaron aplazarlo, a petición del Magistrado Rolando González Liconá, ya que con motivo de su voluminosidad no contó con el tiempo suficiente para estudiarlo.



CONSIDERANDO:

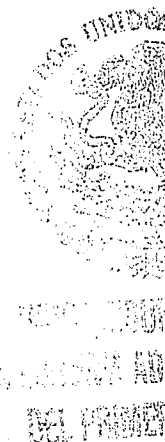
PRIMERO. Este tribunal colegiado es competente para conocer del recurso de revisión, de conformidad con los artículos 82, 83, fracción IV, 85, fracción II, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, vigente a la presentación de la demanda de protección constitucional, por disposición del numeral tercero transitorio de la Ley reglamentaria de la materia que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece; así como en el artículo 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Punto Quinto del Acuerdo General Plenario 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se impugna una sentencia dictada en la audiencia constitucional por un Juzgado de Distrito en materia administrativa que reside en la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción este órgano colegiado.

SEGUNDO. Este tribunal colegiado advierte que la sentencia recurrida presenta una incongruencia que debe ser reparada oficiosamente, acorde con lo previsto por el artículo 79 de la Ley de Amparo aplicable, en relación con la jurisprudencia P./J. 133/99, del Pleno del Máximo Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, noviembre de 1999, página 36, de rubro y texto siguientes:

**"SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA
ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA"**

EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO.

Siendo el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación una cuestión de orden público, al constituir la base del cumplimiento correcto que eventualmente pudiera darse a la ejecutoria de amparo, evitando ejecutorias forzadas e incongruentes que lleven a un imposible cumplimiento, además de que en las incongruencias puedan verse involucradas causales de improcedencia que son también de orden público y de estudio oficioso, y en atención a que el artículo 79 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad de corregir los errores en la cita de garantías violadas, para amparar por las realmente transgredidas dicha facultad debe ser aplicada, por igualdad de razón, al tribunal revisor para corregir de oficio las incongruencias que advierta en las sentencias, ajustando los puntos resolutivos a las consideraciones de la misma, pues son éstas las que rigen el fallo y no los resolutivos, contemplándose la posibilidad de que, en el supuesto de que una incongruencia fuese de tal modo grave que su corrección dejara a alguna de las partes en estado de indefensión, el órgano revisor revocará la sentencia y ordenará la reposición del procedimiento para que el Juez de Distrito emita otra resolución, toda vez que es un error no imputable a ninguna de las partes y que puede depararles un perjuicio no previsto en su defensa. Lo anterior no debe confundirse con la suplencia de la queja, en virtud de que la coherencia en las sentencias de amparo al igual que la improcedencia del juicio es de orden público y por ello de estudio oficioso, y la suplencia de la queja presupone la interposición del medio de defensa por la parte perjudicada y sólo se lleva a cabo en los supuestos previstos por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, para beneficio o por interés del



sociedad que deposita su orden jurídico, entre otros, en los órganos judiciales. Por las razones expuestas se abandona el criterio sostenido en la tesis visible en las páginas mil doscientos cuarenta y siete y mil doscientos cuarenta y ocho de la Primera Parte, Sección Segunda del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, cuyo rubro dice: "SENTENCIA DE AMPARO CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA. CUÁNDO NO PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.", en virtud de que éste se supera con lo mencionado, toda vez que, como se explicó el dictado de la sentencia y su congruencia son de orden público, y por ende, de estudio oficioso, existiendo la posibilidad de revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que se dicte otra, cuando la corrección de la incongruencia sea de tal manera grave que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes, pero de no ser así, el órgano revisor de oficio debe corregir la incongruencia que advierta en la sentencia recurrida, máxime que se encuentra sub júdice y constituirá la base del cumplimiento que eventualmente pudiera dársele."

La incongruencia advertida radica en que la parte resolutive de la sentencia no refleja la negativa de amparo a que se refiere el considerando décimo, en relación con los decretos expropiatorios reclamados, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro y trece de agosto de mil novecientos sesenta y cinco, pues únicamente refleja la concesión de amparo respecto a la omisión de pagar la indemnización respecto de las

expropiaciones mencionadas a que se refiere el considerando décimo primero, como se advierte de los resolutivos siguientes:

"PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de garantías número 579/2005 y su acumulado 259/2015, promovidos por el EJIDO DE HUIPULCO, en la ciudad de México, a través de su respectivo comisariado ejidal, en contra de los actos y las autoridades precisados en los considerandos quinto y séptimo de este fallo.

SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE AL EJIDO DE HUIPULCO, a través de su respectivo comisariado ejidal, en contra de los actos de las autoridades precisadas y para los efectos precisados en la parte final del último considerando del propio fallo."

Así las cosas, este órgano jurisdiccional estima que, para privilegiar la congruencia que debe existir en la sentencia de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de la ley de la materia, la parte resolutive de la sentencia recurrida debe entenderse formulada en los siguientes términos:

"PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de garantías número 579/2005 y su acumulado 259/2015, promovidos por el EJIDO DE HUIPULCO, en la ciudad de México, a través de su respectivo comisariado ejidal, en contra de los actos y las autoridades precisados en los considerandos quinto y séptimo de este fallo.

SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA



respectivo comisariado ejidal, en contra de los decretos expropiatorios publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro y trece de agosto de mil novecientos sesenta y cinco.

TERCERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE AL EJIDO DE HUIPULCO, a través de su respectivo comisariado ejidal, en contra de la omisión de pago de la indemnización derivada de las expropiaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro y trece de agosto de mil novecientos sesenta y cinco, para los efectos precisados en la parte final del último considerando del propio fallo."

TERCERO. Para una mejor comprensión de esta resolución, resulta pertinente tener presentes algunos hechos relevantes de los que dio cuenta el juez de Distrito en la sentencia recurrida, a saber:

"(...) 1. **Por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1922, se dotó al pueblo de Huipulco, de la municipalidad de Tlalpan, en el entonces Distrito Federal, de treinta y seis hectáreas de tierra** que se tomaron de la hacienda colindante de dicho poblado denominado "San Juan de Dios", por lo que se ordenó emitir el decreto expropiatorio respectivo y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad la modificación sufrida en la citada finca (foja 28 tomo I).

2. **Por resolución presidencial publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de mil**

novecientos treinta y ocho, se determinó dotar por concepto de ampliación del ejido definitivo al poblado de Huipulco, delegación de Tlalpan, en la hoy Ciudad de México, **con una superficie de 133-16-57 hectáreas**, tomadas de la Hacienda San Juan de Dios, propiedad de Soledad Torriello viuda de Arenas, en las fracciones que aparecen a nombre de Alberto P. Pellandini 8-54-91 hectáreas; Manuel Appendini 23-70-03 hectáreas; Juan B. Massetto, 1-42-78 hectáreas; Juana A. de Figaredo, 1-68-87 hectáreas, Serafín Sierra, 13-40-99 hectáreas; Joel Morales Estrada, 3-38-56 hectáreas; Casimiro Martínez y hermanos 6-22-43 hectáreas; Augusto Rodríguez 20-45-29 Hectáreas, Salvador Pintuelas 10-90-94 Hectáreas, S. Romano y A. Sordo 34-00-20 hectáreas, todas estas superficies de humedad y la fracción a nombre de José Roldán Venegas, 9-33-57 hectáreas de monte, pasando a poder del Poblado beneficiado (foja 21 tomo I).

3. El cuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto expropiatorio emitido por el Presidente de la República **en el cual se expropió al ejido quejoso una superficie de 00-33-31.47 hectáreas a favor del entonces Departamento del Distrito Federal** (hoy Gobierno de la Ciudad de México) **para la construcción de la calzada de Tlalpan**, en dicha ciudad (foja 25 tomo I).

4. Mediante decreto expropiatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación de siete de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve, se expropió del ejido quejoso la superficie de 00-97-73 hectáreas a favor de la

Compañía Hidroeléctrica de Amacuzac, S.A. para la construcción de una planta eléctrica (foja 26 tomo I).

(...)

5. El trece de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco, se publicó en el diario Oficial de la Federación el decreto expropiatorio, por medio del cual se expropió del ejido quejoso una superficie de 5-69-00 hectáreas, a favor del entonces Departamento del Distrito Federal (hoy Gobierno de la Ciudad de México), para la construcción del viaducto Tlalpan (foja 26 tomo I).

6. El siete de marzo de mil novecientos ochenta se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto expropiatorio, por medio del cual se desincorporan del dominio público del Departamento del Distrito Federal 165^s predios ubicados en las zonas ahí indicadas, en el cual con el número 119, y se autorizó al citado departamento para su venta fuera de subasta pública, a través del cual se afectó el predio ubicado en calle Juan Bosco, calle San Lorenzo y cerrada San Lorenzo, colonia Huipulco, delegación Tlalpan, en la hoy ciudad de México (foja 4947 tomo V).

Respecto del citado decreto expropiatorio se determinó la afectación de predios en propiedad del entonces Departamento del Distrito Federal hoy Ciudad de México, razón por la cual **no se ordenó indemnización alguna, al ser titular de dichos bienes el propio departamento de la ciudad en cita.**

7. El ocho de abril de mil novecientos ochenta y dos se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto expropiatorio por medio del cual se expropió del ejido quejoso una superficie de 59-65-44.11 hectáreas de terreno a favor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, para su lotificación y regularización mediante su venta (foja 26 tomo I).

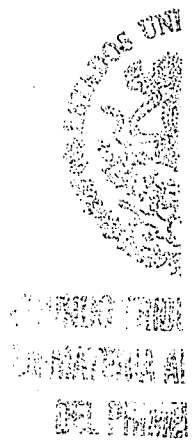
(...)

CUARTO. Por cuestión de método, se procede al análisis de los agravios en un orden distinto al planteado por los recurrentes.

El **ejido recurrente** señala que el Juez de Distrito tramitó y resolvió el **juicio** de protección constitucional que da lugar al recurso de revisión conforme a lo dispuesto por la nueva Ley de Amparo, siendo que **debió sustanciarse y resolverse atendiendo a lo previsto por la abrogada ley reglamentaria** de la materia, en particular, tomando en cuenta los derechos que prevé en beneficio de la clase campesina, con lo cual se le dejó en estado de indefensión y, por ende, procede la reposición del procedimiento.

El agravio es infundado.

De la simple lectura a las constancias de autos, este tribunal colegiado advierte que el juez del conocimiento tramitó y resolvió el juicio de protección constitucional y su acumulado en términos de lo previsto por la normativa aplicable a la fecha de presentación de la demanda inicial, esto es, al veintiséis de



Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, como se corrobora en particular con la lectura del auto admisorio de catorce de junio de dos mil cinco (foja 207 y 208) y sentencia recurrida de veinte de julio de dos mil diecisiete (foja 21427 a 21508), que en lo conducente, respectivamente, señalan:

"(...) con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 36, 114, 116, 212, 217, 218, 222 y 225, de la Ley de Amparo SE ADMITE la demanda de garantías (...)"

CONSIDERANDO:

(...)

SEGUNDO. *Legislación aplicable.* El tres de abril de dos mil trece entró en vigor la nueva Ley de Amparo, la cual, en su artículo tercero transitorio establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes en su inicio, salvo lo que se refiere a las disposiciones relativas al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, de modo que si el presente juicio 579/2005 se promovió el veintiséis de abril de dos mil cinco, es decir, antes de que entrara en vigor la nueva Ley de Amparo, es evidente que su resolución debe dictarse conforme a la Ley de Amparo abrogada publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, así como a los criterios jurisdiccionales y aislados que la interpreten a fin de dar cumplimiento a los postulados del artículo 17 de la Constitución General de la República.

Lo que igualmente ocurre con el juicio de amparo acumulado 259/2015, respecto al cual este juzgado se avocó a su conocimiento mediante auto de veinticinco de febrero de dos mil quince (fojas 19842 Tomo III), ya que dicho juicio inició con la presentación de la demanda que dio origen al amparo 579/2005, respecto del cual se ordenó su separación el nueve de abril de dos mil doce, como quedó precisado en los resultandos vigésimo tercero y vigésimo cuarto de este fallo, de los cuales se evidencia que el trámite del juicio de amparo acumulado inició con anterioridad Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, por lo que también se rige por la Ley de Amparo anterior. (...)"

De ahí que, contrario a lo solicitado por el recurrente, no procede la reposición del procedimiento por el motivo que aduce.

QUINTO. El **ejido recurrente** señala que al emitir la sentencia recurrida, el juez de Distrito no atendió a las normas que rigen el procedimiento, ya que **no emplazó a los jueces y secretarios** de los Juzgados Décimo Primero, Vigésimo Séptimo hoy Vigésimo Séptimo, Trigésimo Octavo, Quincuagésimo, Décimo Octavo, Vigésimo, todos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en su carácter de autoridades responsables, con motivo de las sentencias dictadas en los juicios civiles 1489/2001, 613/2002, 698/2000, 4093/1981, 145/1975 y 203/1992, a pesar de que los señaló en su demanda de amparo, con lo cual se le dejó en estado de indefensión.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA
FOLIO 100
E. 100

De la lectura integral a la demanda de protección constitucional (foja 7 a 51), se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables a las aquí mencionadas, haciendo referencia al número de expediente de los juicios civiles respectivos; y en ese tenor, se admitió a trámite la demanda (foja 207 y 208); sin embargo, una vez sustanciado el procedimiento, por proveído de nueve de noviembre de dos mil doce (foja 13951 a 13955), se abrió de oficio el incidente de separación de juicios, en el cual el veintinueve del mes y año mencionados, el juez de Distrito determinó la separación de los juicios civiles siguientes:

i. Juicio Ordinario Civil número 1489/2001, del índice del Juez Décimo Octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, promovido por Juan Ríos Hernández su sucesión en contra de Juana Lagarde Vázquez y Concepción Lagarde Vázquez.

ii. Juicio Ordinario Civil número 613/2002, del índice del Juez Quincuagésimo, promovido por Ferriño Elías Luis en contra de Ada Lagarde Vázquez y Hugo Tello Fuentes.

iii. Juicio Ordinario Civil número 698/2000, del índice del Juzgado Vigésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, promovido por Luis Ferriño Elías en contra de Margarita Flores Meneses.

iv. Juicio Ordinario Civil número 4093/1981, del índice del Juez Décimo Primero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, promovido por David Sadi Cazorla y otros en contra del Banco del Ahorro Nacional, sociedad anónima.

v. Juicio Ordinario Civil número 145/1975, del índice del Juez Séptimo hoy Vigésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, promovido por...

vi. Juicio Ordinario Civil reivindicatorio número 203/1992, del índice del Juzgado Trigésimo Octavo de los Civil del Tribunal Superior de Justicia, seguido por Juan Ríos Hernández su sucesión, en contra de Adela Carranco Burgos y Virginia Carranco Burgos."

Lo anterior, bajo la consideración de que los actos relacionados con los juicios civiles citados, se encontraban desvinculados de los restantes actos reclamados en el juicio de amparo; además de que derivaban de juicios civiles y no de procedimientos de naturaleza administrativa, pues no guardaban conexidad entre sí; y se ordenó remitir copia de la demanda de protección constitucional y sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con copia certificada de la resolución y demanda, para que previos los trámites correspondientes fuera returnada a ese juzgado a fin de proveer lo que en derecho correspondiera.

Una vez returnada la demanda de amparo, por auto de veintiuno de diciembre de dos mil doce, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa formó el expediente del juicio de **amparo 1524/2012**; y se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto por tratarse de actos de naturaleza civil, por lo que ordenó su remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esa materia en la Ciudad de México.

Por auto de veintiséis de diciembre de dos mil doce, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, al que correspondió conocer de la demanda por razón



de amparo 1161/2012 y, previó a pronunciarse sobre su legal competencia, decretó la separación de los juicios identificados con los numerales ii a vi recién precisados, del identificado con el número i (1489/2001, del índice del Juzgado Décimo Octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, promovido por Juan Ríos Hernández su sucesión en contra de Juana Lagarde Vásquez y Concepción Lagarde Vásquez); y ordenó la remisión de la copia certificada de la demanda a la Oficina de Corresponden Común de los Juzgados de Distrito en su Materia en esta ciudad, para que las turnara a ese juzgado; hecho lo anterior, aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del asunto únicamente respecto de los actos derivados del juicio civil 1489/2001.

Ahora, cabe señalar que posteriormente, mediante sentencia de diez de febrero de dos mil quince, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, determinó en el recurso de revisión R.C. 298/2014, derivado del juicio de amparo indirecto 1161/2012, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, que el juez civil en cita **carecía de legal competencia por razón de materia para conocer del asunto y que el legalmente competente para conocer del juicio era el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México**; razón por la cual revocó la citada sentencia y ordenó la remisión del asunto al juzgado mencionado, para su conocimiento y resolución.

En ese tenor, mediante auto de veinticinco de febrero de dos mil quince, **el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México**

conocimiento del asunto, el cual quedó registrado con el número de amparo 259/2015, respecto del cual ordenó su acumulación al juicio de amparo 579/2005.

Por auto de veintiséis de febrero de dos mil quince, el juez hizo la precisión de que **los actos reclamados vinculados al juicio de amparo 259/2015 únicamente eran los derivados del juicio ordinario civil 1489/2001**, del índice del Juez Décimo Octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en estricto cumplimiento a la ejecutoria de diez de febrero de dos mil quince dictada en el amparo en revisión **298/2014**, del índice de Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Como se aprecia de los antecedentes relatados, en relación con los actos reclamados vinculados con los juicios civiles antes precisados, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México decretó la separación de juicios, porque consideró que corresponden a la materia civil; de ahí que, contrario a lo aducido por el ejido recurrente, no debía emplazarse al juicio de amparo a los jueces y secretarios multicitados.

En cuanto al juicio ordinario civil 1489/2001, que en su momento dio lugar al juicio de amparo 259/2015, acumulado al 579/2005, que dan lugar al presente recurso de revisión, cabe señalar que no se incurre en la violación procesal que aduce el ejido recurrente, en atención a lo siguiente:

Con motivo de la separación de juicios antes mencionada,

México, por auto de veintiséis de diciembre de dos mil doce, entre otros aspectos, señaló que se avocaba a conocer de *“la falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio ordinario civil 2489/91 (sic) —el número correcto es 1489/2001—*; en esa tesitura, mediante proveído de ocho de marzo de dos mil trece, admitió a trámite la demanda con número de registro 1161/2012; dio vista a las partes; tuvo a Juan Ríos Hernández en contra de Ada Juana Lagarde Vásquez y Concepción Lagarde Vásquez, como terceros perjudicados; dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación, **remitió a las autoridades responsables copia de la demanda y solicitó que rindieran su informe justificado**, lo que así hicieron (foja 19065, 19066, 19078, 19080, 19363 a 19366); todo lo cual fue convalidado por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México cuando se le remitió el juicio de amparo 1161/2012, para que se avocara a su conocimiento, pues el juez únicamente dejó insubsistente la audiencia constitucional celebrada en ese juicio de amparo y no el resto de las actuaciones, al decretar su acumulación al juicio de amparo 579/2006.

En tal virtud, este tribunal colegiado considera que está cumplida la formalidad de emplazar al juicio del que deriva el presente recurso a las autoridades señaladas en el juicio ordinario civil 1489/2001; y en cuanto a las autoridades y actos derivados de los demás juicios civiles, de acuerdo con lo antes sustentado, se advierte que era innecesario su emplazamiento al juicio de protección constitucional.

Por otra parte, el **ejido recurrente** aduce que la sentencia recurrida es ilegal porque el juez de Distrito no a

normas que rigen el procedimiento, al **no emplazar a juicio a las autoridades expresamente señaladas como responsables en su demanda o ampliación de demanda**, que se precisan enseguida; **ni emplazó a las autoridades que se desprenden de los informes justificados**, conforme a lo previsto por los artículos 78, 212 al 234 de la Ley de Amparo aplicable, que se mencionan a continuación:

a) Director de Comercialización y Administración Inmobiliaria y Director de Administración y Finanzas de Servicios Metropolitanos, sociedad anónima de capital variable (SERVIMET);

b) Notarios públicos que emitieron los actos reclamados;

c) Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT).

d) Director de Construcción de Obras de Infraestructura Vial, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, en su calidad de autoridad sustituta de la Dirección de Obras de Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de México.

e) Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y autoridades de la delegación Tlalpan en relación con los programas y planes en materia de Desarrollo Urbano.



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

El agravio es ineficaz, porque de la revisión a las constancias de autos, este órgano colegiado advierte lo siguiente:

➤ En cuanto a los **directores mencionados de Servicios Metropolitanos**, a ningún fin práctico conduce su emplazamiento, dado que, como lo sostuvo el juez de Distrito en el considerando séptimo de la sentencia recurrida, no constituyen una autoridad para efectos del juicio de protección constitucional, al tratarse de integrantes de una empresa mercantil que no cuenta con facultades de decisión para afectar al ejido quejoso, en términos de lo previsto por los artículos 1º, fracción I y 11, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo.

➤ El once de junio de dos mil diez, se celebró la audiencia constitucional, en la que el Juez de Distrito determinó desechar de plano la ampliación de demanda promovida en contra de los actos reclamados a los **Notarios Públicos** número 29 y 154 de la Ciudad de México, por no tratarse de autoridades para efectos del amparo, ya que no se les incluyó en el apartado relativo a autoridades de la Ley de Amparo, lo que, este tribunal colegiado confirmó por medio de la sentencia dictada el diez de marzo de dos mil once, en el recurso de revisión R.A. 363/2010, como se corrobora con el resolutivo primero:

"PRIMERO. Se confirma el desechamiento de la ampliación de demanda presentada el diez de junio de dos mil diez."

En función de lo anterior, resulta intrascendente revisar si en algún momento de la sustanciación del procedimiento se emplazó o no a juicio a los notarios citados.

➤ En cuanto a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra **CORETT**, cabe señalar que acudió en su representación su Director General, en función del acto que se le reclamó, ante lo cual, este órgano colegiado advierte que no asiste la razón al ejido recurrente, en virtud de que sí se le emplazó a juicio e incluso presentó su informe justificado (5423 a 5424).

➤ En relación con el Director de Construcción de Obras de Infraestructura Vial, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, en su calidad de autoridad sustituta de la Dirección de Obras de Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de México, este órgano colegiado advierte que, en atención al desahogo del requerimiento que realizó la parte quejosa, sí se emplazó al citado director en su denominación actual, el cual incluso presentó su informe justificado (fojas 649 y 5232).

➤ Respecto a la Asamblea Legislativa de la hoy Ciudad de México, este tribunal colegiado advierte que, mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil once (fojas 11517 a 11530), el juez de Distrito sí ordenó emplazar a juicio a la autoridad mencionada, la que incluso presentó su informe justificado (foja 11619 y 11620); mientras que respecto a las autoridades de la Delegación Tlalpan, también se observa que



FECHA DE RECEPCIÓN
17 MAR 2011
HORA DE RECEPCIÓN
12:00 PM

Por otra parte, el recurrente Jefe de Gobierno de la Ciudad de México aduce que el juez de Distrito no cumplió con las normas que rigen el procedimiento, porque **no emplazó al Banco Nacional de Crédito Ejidal, sociedad anónima de capital variable, actualmente Sistema Banrural**, con la finalidad de que realizara una búsqueda exhaustiva en sus archivos respecto del pago de la indemnización respecto de los decretos de expropiación de cuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro y trece de agosto de mil novecientos sesenta y cinco.

Tal agravio es ineficaz, porque de la revisión a las constancias de autos, se advierte que el juez de Distrito realizó las indagaciones con todos aquellos que pudieran tener información sobre la temática aquí planteada y recabó las pruebas suficientes a petición de parte o de oficio, para emitir su decisión en cuanto al pago de las indemnizaciones, a saber:

- Requirió al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal copia certificada de toda la documentación que obre en sus archivos de la que pudiera advertirse el consentimiento del quejoso Ejido de Huipulco, Delegación Tlalpan, Distrito Federal (hoy Ciudad de México), de los decretos expropiatorios de cuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro (ampliación Calzada de Tlalpan) y de trece de agosto de mil novecientos sesenta y cinco (apertura de Viaducto), lo que debía incluir cualquier constancia de liquidación de las cantidades que se encontraban depositadas en ese fondo, así como de los recibos de fecha veintiséis de junio de mil novecientos noventa y dos, veintiuno de junio de mil

novecientos noventa y cinco, catorce de marzo de dos mil, diecisiete de mayo de dos mil uno y treinta y uno de julio de dos mil dos; en desahogo a ese requerimiento, mediante oficio recibido en el juzgado el once de abril de dos mil once (fojas 11735 a 11736), cabe precisar que la apoderada legal del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal manifestó que no contaba con información alguna en ese sentido.

- Requirió al Presidente de la República, al Secretario de la Reforma Agraria; al entonces **Jefe de Gobierno del Distrito Federal** (hoy Ciudad de México), al Director para la Regularización para la Tenencia de la Tierra, al Encargado del Archivo General Agrario, al Titular y Director de lo Contencioso del Registro Agrario Nacional, al Director General de Servicios Legales en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal (hoy Gobierno de la Ciudad de México), sin que hubieran remitido al juzgado las constancias de las que se advierta el consentimiento del quejoso Ejido de Huipulco, Delegación Tlalpan, de los decretos expropiatorios de cuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro (ampliación Calzada de Tlalpan) y de trece de agosto de mil novecientos sesenta y cinco (apertura de Viaducto), ni constancia de que se hubiera realizado pago alguno.

Como se ve, de las actuaciones mencionadas, no se advierte que las autoridades a quienes se solicitó información respecto del pago de las indemnizaciones, entre las que se encuentra el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, hayan realizados manifestaciones ante el juez de Distrito que hayan aportado algún dato, prueba o indicio de que era



Crédito Ejidal, sociedad anónima de capital variable, sustituido por el Sistema Banrural, por lo que, se estima que el juzgado del conocimiento ya efectuó las diligencias necesarias para el fin ordenado por este tribunal colegiado en la sentencia del recurso de revisión R.A. 363/2010; y, por tanto, resulta innecesario emplazar al banco aquí referido.

SEXTO. De la lectura integral al escrito de agravios, se advierte que el **recurrente** aduce que la sentencia recurrida es ilegal, porque en la demanda de amparo **el ejido quejoso se "autoadscribió" como comunidad indígena**, ante lo cual, el juez de Distrito debió tomar las medidas necesarias para el pleno acceso a la jurisdicción del Estado, tales como: tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, así como su derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores con conocimiento de su lengua y cultura; derechos de los pueblos y personas indígenas a no ser discriminados, a tener una nacionalidad, a la dignidad y diversidad cultural, a acceder a los medios de información; derechos laborales, a la igualdad, al mejoramiento de sus condiciones de vida; derechos de los ancianos; derecho a las tierras, territorios y recursos, a no ser desplazados de sus tierras y territorios; derecho a mantener y fortalecer su relación espiritual con sus tierras y territorios; derecho a determinar estrategias de desarrollo en sus tierras y territorios; derecho a la reparación; derecho a que sus tierras no sean usados para actividades militares, previstos por diversos artículos de la Constitución y tratados internacionales que refieren en su recurso, lo cual no hizo.

El agravio es ineficaz.

De la revisión a las constancias de autos, este tribunal colegiado advierte que, contrariamente a lo aducido por el recurrente, el ejido no se "autoadscribió" como comunidad indígena en su demanda de amparo (foja 1 a 57), ampliación de demanda (foja 4932 a 4961), escrito aclaratorio (foja 5025 a 5045) o en algún otro momento de la sustanciación del juicio de protección constitucional, ni se advierten indicios en ese sentido, por lo que no era factible que el juez de Distrito advirtiera esa situación.

En efecto, de las constancias de autos, se observa que el comisariado ejidal promovió demanda de protección constitucional, por propio derecho, en idioma español, manifestando bajo protesta de decir verdad los antecedentes de los actos reclamados; formuló los conceptos de violación en el idioma indicado (sin mencionar los derechos indígenas que refiere en sus agravios), signó sus escritos y realizó diversas manifestaciones durante la sustanciación del procedimiento, sin que surgiera problema alguno derivado del idioma utilizado, lo cual, pone de manifiesto que el quejoso comprendió y estuvo en posibilidad de hacerse comprender durante toda la sustanciación del juicio de amparo, así como al interponer el presente recurso y, por ende, no procede la reposición del procedimiento, ni el análisis de temáticas en materia indígena que no integran la litis constitucional.

SÉPTIMO. El **ejido recurrente** aduce que la sentencia recurrida es ilegal, porque a efecto de emitir el pronunciamiento correspondiente respecto a los decretos expropiatorios e indemnización, el juez de Distrito debió recabar y desahogar la

realizara la reconstrucción de las poligonales que conforman la dotación y ampliación del ejido de Huipulco, plasmándola en planos actualizados, precisando su superficie y si los inmuebles precisados en la demanda y ampliación están afectados por algún decreto, acuerdo, acta administrativa, convenio u oficio.

El agravio es infundado, porque de la simple revisión a las constancias de autos, se advierte que los dictámenes periciales en materia de topografía y geodesia sí se realizaron, respectivamente, por el perito oficial (fojas 9390 a 9449), perito designado por el Jefe de Gobierno de la hoy Ciudad de México (fojas 7269 a 7298), perito designado por el Oficial Mayor de la hoy Ciudad de México (7453 a 7466) y por el perito designado por el ejido quejoso (fojas 8015 a 8033), en el que, entre otros aspectos constan los planos y precisiones respecto de los inmuebles o terrenos que pertenecen al ejido, así como si tienen alguna afectación derivada de actos de autoridades.

OCTAVO. De la lectura integral del escrito de agravios, se advierte que el **ejido recurrente** aduce que la sentencia recurrida es ilegal, porque a efecto de fijar los actos reclamados, el juez de Distrito realizó un **análisis fraccionado de su demanda y ampliaciones y no como un todo**, lo que tuvo como consecuencia que **no precisó la totalidad de los actos que integran la litis constitucional**.

En particular, estima que no tuvo como actos reclamados los siguientes (página 178 a 179 del escrito de agravios):

- a) La afectación que sufre el Ejido de Huipulco, Delegación de Tlalpan, Distrito Federal, con la ampliación de la avenida Acoxpa, la cual se acredita con los dictámenes periciales que obran en los autos del Juez de Distrito Instructor, donde claramente se aprecia que el ejido fue afectado en las tierras con que fue dotado y de su ampliación, pues al marcar las poligonales con fue beneficiado el impetrante de garantías y que se denominaron "humeral 1", "humeral 3" y "humeral 4", se observa que los peritos los refieren hasta el camellón de la avenida Acoxpa, como se demuestra con los planos marcados por el perito oficial como anexos 1, 2, 3 y 3B, y que exista mandamiento escrito que funde y motive el acto de afectación de las tierras del ejido.
- b) El tirado de las escrituras que realizaron los notarios públicos en cumplimiento de las órdenes dictadas por las autoridades ordenadoras que quedaron demostradas en los autos del Juez Instructor.
- c) La inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal en las cuales se realizan las anotaciones de los decretos expropiatorios, del decreto de desincorporación de bienes del dominio del Distrito Federal y que se demostró pertenecer al ejido quejos.
- d) Los oficios, actas de entrega y recibidos que se exhibieron por el impetrante de garantías en copias fotostáticas en su ampliación de demanda y que se perfeccionaron con los informes rendidos por las autoridades responsables al haber aceptado su existencia y confesado haberlos realizado al estar presentes.
- e) El inmueble denominado "centro de barrio Huipulco" y que se especificó en los antecedentes de la demanda y su ampliación, afecta la tierra con que fue dotado el Ejido quejoso, de una superficie de 552.92 metros cuadrados y no de 300 metros cuadrada.
- f) La restitución o devolución y entrega física y jurídica y material de los terrenos afectados al ejido quejo con todos sus frutos y accesiones, por los decretos de expropiación y desincorporación

emitidos por las autoridades responsables, así como de los que se hayan realizado sin orden alguna y que quedaron acreditados en autos.

- g) La urbanización de las tierras con que fue beneficiado el ejido quejoso derivado del plan de desarrollo urbano de la delegación de Tlalpan, y que el propio Jefe Delegación en Tlalpan reconoce como cierto y exhibe fotografía aérea en la que se aprecia la urbanización de los terrenos de la dotación y ampliación del ejido y que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal acepta haberlo sancionado al estampar su firma y que por ende de acuerdo al criterio jurisprudencial de la Novena Época, Registro: 191452, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XII, Agosto de 2000, Materia(s): Común, Tesis: 2a./I. 63/2000, Página: 260 y que lleva como rubro el siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan arguir desconocerlo". Contradicción de tesis 23/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 16 de junio del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Cebalán. Secretario: José Francisco Cilia López. Tesis de jurisprudencia 65/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del dieciséis de junio del año dos mil. Por ende el plan quedó demostrado plenamente.

- h) Al igual que los actos reclamados del Secretario de la Reforma Agraria (foja 2364), Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural en su correcta denominación (foja 2364), Director General de Ordenamiento y Regularización en su correcta denominación (foja 2364), Director General de Política y Planeación Agraria en su correcta denominación (foja 2364), Director General de Asuntos Jurídicos (foja 2364), Secretario de Medio Ambiente y Recursos denominación correcta (foja 5163) Secretario de Seguridad Pública (foja 683), Secretario de Gobierno (foja 1037), Presidente del Consejo Protección Civil del Gobierno (foja 1864) Secretario de Protección Civil en su actual y correcta denominación (foja 739 y 5256), Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (fojas 856 y 5230) Director General de Sistema de Aguas (foja 1384) Director de Construcción de Obras de Infraestructura Vial en su actual y correcta denominación (fojas 649 y 5232), Jefe Delegacional en Tlalpan (foja 667 y 5256), Director General de Obras y Desarrollo Urbano en Tlalpan en su correcta denominación (foja 667), Director de Verificación y Reglamentos en Tlalpan (foja 667), Jefe de Unidad Departamental de Licencias de Construcción en Tlalpan (foja 667), Director General de Administración en Tlalpan (foja 5256) Director General de Desarrollo Social en Tlalpan (foja 5256), Director General de Administración Urbana del Gobierno (foja 737) Director General de Obras Públicas del Gobierno (foja 658 y 5234), Director General de Desarrollo Urbano del Gobierno (fojas 497 y 5230), Director General Jurídico y de Gobierno en Coyoacán (fojas 1356 y 5167), Director de Comercialización y Administración Inmobiliaria de Servicios Metropolitanos, sociedad anónima de capital variable (foja 7228), Apoderada de Servicios Metropolitanos, sociedad anónima de capital variable (foja 7228) Director General de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno (foja 5234), Tesorero del Gobierno (foja 5307); todos ellos de la hoy Ciudad de México; Director General de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra CORETT (foja 5423), Director de Inventario Inmobiliario y Sistemas de Información de México, hizo la aclaración que el número correcto de expediente civil de origen es el 1489/1191 (foja 19023 tomo XIII). Amparo 379/2005 y acumulado 259/2015 48 la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario adscrito a la Oficialía Mayor de la hoy Ciudad de México (foja 5492) Subdirector de Análisis, Investigación e Integración del Inventario Inmobiliario de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, NO SON Ciertos ya que así lo manifestaron al rendir sus correspondientes informes justificados, sin que se haya desvirtuado tal negativa.



COLEGIO
JUDICIAL
CIRCUITO

El agravio es infundado.

Del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo aplicable y jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "*DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.*", invocada por el juez del conocimiento, se colige que las sentencias que se emitan en los juicios de protección constitucional deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, lo que se realiza a partir de la lectura armónica e integral de la demanda de protección constitucional. El numeral mencionado es del tenor siguiente:

"Artículo 77. Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener:

I. La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados;

(...)"

Adicionalmente, tratándose del amparo en materia agraria, el juez debe realizar dicha precisión atendiendo a lo expresado por las autoridades responsables en sus informes justificados y a las constancias que éstas adjunten, como se desprende de los numerales 223, 224 y 225 de la ley de la materia:

"Artículo 223. En los amparos en materia agraria, los informes justificados deberán expresar:



II. La declaración precisa respecto a si son o no ciertos los actos reclamados en la demanda o si han realizado otros similares o distintos de aquellos, que tengan o puedan tener por consecuencia negar o menoscabar los derechos agrarios del quejoso;

(...)

IV. Si las responsables son autoridades agrarias, expresarán, además, la fecha en que se hayan dictado las resoluciones agrarias que amparen los derechos del quejoso y del tercero, en su caso, y la forma y términos en que las mismas hayan sido ejecutadas; así como los actos por virtud de los cuales hayan adquirido sus derechos los quejosos y los terceros."

"Artículo 224. Las autoridades responsables deberán acompañar a sus informes copias certificadas de las resoluciones agrarias a que se refiera el juicio, de las actas de posesión y de los planos de ejecución de esas diligencias, de los censos agrarios, de los certificados de derechos agrarios, de los títulos de parcela y de las demás constancias necesarias para determinar con precisión los derechos agrarios del quejoso y del tercero perjudicado, en su caso, así como los actos reclamados.

La autoridad que no remita las copias certificadas a que se refiere este artículo, será sancionada con multa de veinte a ciento veinte días de salario. En caso de que subsista la omisión no obstante el requerimiento del juez, la multa se irá duplicando en cada nuevo requerimiento, hasta obtener el cumplimiento de esta obligación."

*“Artículo 225. En los amparos en materia agraria, además de tomarse en cuenta las pruebas que se aporten, la autoridad judicial deberá recabar de oficio todas aquellas que puedan beneficiar a las entidades o individuos que menciona el artículo 212. **La autoridad que conozca del amparo resolverá sobre la inconstitucionalidad de los actos reclamados, tal y como se hayan probado, aun cuando sean distintos de los invocados en la demanda, si en éste último caso es en beneficio de los núcleos de población o de los ejidatarios o comuneros en lo individual.**”*

Precisión que cabe mencionar resulta necesaria, pues sirve de base para que el juez de Distrito se pronuncie sobre la certeza o inexistencia de los actos o, en su caso, respecto de las causales de improcedencia y conceptos de violación formulados por la parte quejosa, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.

En esa tesitura, este tribunal colegiado advierte que contrastando los actos plasmados en la demanda inicial de amparo (foja 7 a 51), ampliación de demanda (fojas 4932 a 4961) y escrito aclaratorio (foja 5025 a 5035), transcritos en los resultandos primero y octavo de esta sentencia, así como el contenido de los informes de las autoridades responsables que constan en el expediente, con lo sustentado en el considerando cuarto de la sentencia recurrida, se advierte que el juez sí consideró todos los actos señalados por la quejosa, como se corrobora con la siguiente transcripción:

“CONSIDERANDO:

CUARTO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por el quejoso, de conformidad con lo expresado en la tesis de jurisprudencia número P./J.40/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, Novena Época, visible en la página treinta y dos, cuyo rubro indica: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".

4.1. Actos reclamados en el juicio de amparo 579/2005. En ese orden de ideas, se precisa que los actos que se reclaman de las autoridades responsables, en la presente litis, se hacen consistir, en los siguientes:

1. El desconocimiento, que hacen las autoridades responsables de los acuerdos presidenciales de fechas veintiocho de octubre y veinte de diciembre de mil novecientos cuarenta, que tratan sobre las compensaciones a todos aquellos gobernados que se vieron afectados por las dotaciones y ampliación de tierras de los pueblos, núcleos de población y ejidos, en el reparto agrario como garantía social que debe cumplir el Estado Mexicano y su ejecución.

2. Las resoluciones administrativas dictadas en los expedientes O.P.P.A./200(23)6, de veintiuno de noviembre de mil novecientos treinta y nueve y del doce de junio de mil novecientos cuarenta, emitidas por la entonces Oficina de la Pequeña Propiedad Agrícola dependiente de la Presidencia de la República, actualmente substituida por la Secretaría de la Reforma Agraria y su confirmación por el Presidente de la República y sus respectivos actos de ejecución.

3. La resolución emitida por el Presidente de la República de fecha quince de febrero de mil novecientos cincuenta y seis, publicada en el Diario Oficial de la

Federación el día dieciocho de marzo de mil novecientos cincuenta y seis, y su inexacta ejecución en la que se resuelve en definitiva las quejas presentadas en la entonces Oficina de la Pequeña Propiedad Agrícola hoy Secretaría de la Reforma Agraria, en los expedientes O.P.P.A/200(23)6, promovidas por Aurelio Cabello y coagraviados, en contra de la resolución Presidencial que beneficia a los impetrantes de garantías con la ampliación de tierras solicitada, de fecha nueve de marzo de mil novecientos treinta y ocho y sus respectivos actos de ejecución.

4. La resolución administrativa de fecha veinte de marzo de mil novecientos cincuenta y siete, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día diez de mayo de mil novecientos cincuenta y siete y su inexacta ejecución, emitida por el Presidente de la República en la que se resuelve en definitiva las quejas presentadas en la entonces Oficina de la Pequeña Propiedad Agrícola hoy Secretaría de la Reforma Agraria, en los expedientes O.P.P.A/200(23)6, promovidas por Aurelio Cabello y coagraviados, en contra de la resolución Presidencial que beneficia a los impetrantes de garantías con la ampliación de tierras solicitada y sus respectivos actos de ejecución.

5. La resolución administrativa de fecha once de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día seis de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho, y su inexacta ejecución, emitida por el Presidente de la República en la que se resuelve en definitiva las quejas presentadas en la entonces Oficina de la Pequeña Propiedad Agrícola hoy Secretaría de la Reforma Agraria, en los expedientes O.P.P.A/200(23)6, promovidas por Aurelio Cabello y coagraviados, en contra de la resolución Presidencial que beneficia a los impetrantes de garantías con la ampliación de tierras solicitada y su ejecución.

6. El decreto expropiatorio de once de agosto de mil novecientos cincuenta y cuatro, por medio del cual se expropia al impetrante de garantías de una superficie de 00-33-31.47, hectáreas.

7. El decreto expropiatorio de veinticuatro de marzo de mil novecientos cincuenta y nueve por el cual se expropia al ejido quejoso una superficie de 00-97-73 hectáreas.

8. El decreto expropiatorio de once de agosto de mil novecientos sesenta y cinco, por el cual se expropia al ejido quejoso una superficie de 5 69 00 hectáreas.

9. El decreto expropiatorio de cuatro de enero de mil novecientos ochenta y dos, por el cual se expropia al ejido quejoso una superficie de 59-65-44.11 hectáreas.

10. Expropiación o libramiento de paso que en forma unilateral emiten las autoridades para construcción y ensanchamiento de la Avenida Acoxta.

11. Ley Agraria de veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y dos, concretamente su capítulo cuarto que se refiere a la expropiación de bienes comunales y ejidales.

12. Los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la Delegación Tlalpan, hasta su última versión a partir de los cuales se prive al quejoso de sus tierras agrarias, a través del cabio de uso de suelo, fraccionamiento y venta de tierras ejidales.

13. La privación en forma total y definitiva de las propiedades, posesiones y disfrute de los derechos agrarios, respecto de la superficie de 8-50-00 hectáreas, ubicadas en el predio denominado "El Trébol", ubicada en el Ejido de Huipulco, así como la negativa de inscribir la sentencia de fecha trece de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, en la cual se concedió el amparo respecto de la citada superficie.

14. Respecto del predio ubicado en calle Juan Bosco, calle San Lorenzo, y cerrada San Lorenzo Colonia Huipulco, delegación Tlalpan, clasificación catastral 53-002-02, que se encuentra dentro de las poligonales de dotación y ampliación con que fue beneficiado el ejido quejoso, lo siguiente:

- El decreto por el que se desincorpora del dominio público del Departamento del Distrito Federal los predios ubicados en las zonas que se indican, y se autoriza al mismo departamento para venderlos fuera de subasta pública (registrado con el número 3340), de fecha siete de marzo de mil novecientos ochenta, publicado en el Diario Oficial de la Federación en catorce de marzo de mil novecientos ochenta, por medio del cual se afecta con el número ciento diecinueve de la lista de inmuebles desincorporados del Departamento del Distrito Federal, hoy Gobierno de la Ciudad de México, referente al predio citado.

- Los acuerdos, actas administrativas o de

autoridades responsables para la afectación del inmueble antes citado.

- El acta de entrega recepción de la administración de inmuebles que integra el Programa de Centros de Barrio y Servicio de fecha treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y ocho, realizada en el inmueble denominado "Centro de Barrio Huipulco", ubicado en el predio.

- El oficio número 2485 DIIYSI de fecha cuatro de agosto de mil novecientos noventa y nueve, mediante el cual se informa al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, que al predio le corresponde la cuenta catastral anterior y actual 053-002-01 y 053-002-02.

- La inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del predio.

- El oficio número 3097 DIIYSI de fecha veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, mediante el cual se le informa al Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Delegación Tlalpan, que el predio, quedó inscrito a favor del Gobierno de la Ciudad de México con el folio real número 1155292.

- El oficio número C21-UDAI-43299 de fecha siete de mayo de mil novecientos noventa y nueve, por medio del cual el Subdelegado Jurídico y de Gobierno en Tlalpan remite el acta de entrega recepción del inmueble, para la instalación de la Oficina de Licencias y Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México.

- La sesión ordinaria 66/97 de fecha veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y siete, en la cual se acordó que el predio, marcado con el número progresivo veintiséis, se destinó para un Centro de Barrio y Servicio.

15. Respecto del inmueble denominado "Deportivo San Nicolás Tolentino", ubicado en calle Ex Hacienda de San Nicolás Tolentino y Ejido de Huipulco, Colonia Prados Coapa, Delegación Tlalpan, con superficie de 14387.908 metros cuadrados, toda vez que dicho predio se encuentra dentro de las poligonales con las que fue beneficiado el ejido quejoso.

- El acta administrativa de entrega-recepción física del inmueble, con motivo de la asignación a favor de la Delegación Tlalpan, derivado del acuerdo emitido por el Comité del Patrimonio Inmobiliario en su Novena Sesión Ordinaria (9/2005) de fecha doce de mayo de dos mil cinco.

- El acta de sesión ordinaria 9/2005 de fecha doce de mayo de dos mil cinco, que contiene el acuerdo emitido por el Comité del Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México, por medio del cual asigna a favor de la Delegación de Tlalpan el inmueble.

16. Los acuerdos, actas, decretos o de cualquier otra índole por medio de los cuales se ordena la afectación de la propiedad de los inmuebles propiedad del quejoso a favor del Departamento, del Distrito Federal hoy Gobierno de la Ciudad de México, así como los decretos, acuerdos, oficios y actas administrativas con las que pretenden desincorporarlos del dominio público del Departamento del Distrito Federal hoy Gobierno de la Ciudad de México ubicados en:

- 1) El ubicado en Calzada México Xochimilco, esquina Viaducto Tlalpan y Periférico, servicio Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y Módulo Deportivo, con una superficie de 6500 metros cuadrados;
- 2) El ubicado en Calzada de Tlalpan s/n casi esquina Acoxta, unidad Médica Militar Familiar número 7, con una superficie de 4000 metros cuadrados.
- 3) El ubicado en Viaducto Tlalpan esquina San Juan Bosco denominado Centro Deportivo "Don Bosco", con una superficie de 2,301 metros cuadrados;
- 4) El ubicado en Calzada Acueducto esquina Calzada de Tlalpan "Parque Recreativo", con una superficie de 3500 metros cuadrados;
- 5) El ubicado en Calzada de Tlalpan, esquina calzada Acoxta y Viaducto Tlalpan, paradero "Estadio Azteca", Campamento de Desazolve y Mercado de Comidas, con una superficie de 15000 metros cuadrados.
- 6) El ubicada en Calzada de Tlalpan número 4379, "Oficinas de la Dirección General de Administración en Tlalpan", con una superficie de 450 metros cuadrados;



AL GOBIERNO
ADMINISTRATIVO
A CIRCUITO

- 7) El ubicado en calzada Acueducto entre San Juan de Dios y San Juan Bosco "Campamento de Limpia" con una superficie de 900 metros cuadrados;
- 8) El ubicado en calle San Lorenzo entre San Juan Bosco y Cerrada de San Lorenzo "Oficina de Tesorería, Oficina de Licencias y Control Vehicular y Consultorio Huipulco" con una superficie de 300 metros cuadrados.
- 9) El ubicado en calle San Juan Bosco número uno entre Calzada de Tlalpan y Calzada Acueducto "Jardín de Niños Cámara Junior", con una superficie de 2500 metros cuadrados;
- 10) El ubicado en Calzada Acueducto esquina San Juan Bosco y San Lorenzo "Primaria Estado de San Luis Potosí", con una superficie de 2800 metros cuadrados;
- 11) El ubicado en Calzada Acueducto casi esquina San Juan de Dios "Rebombeo Abastecimiento de Pipas", con una superficie de 480 metros cuadrados;
- 12) El ubicado en Viaducto Tlalpan entre calle Capirote y Arenal "Pozo Xochimilco 28", con una superficie de 120 metros cuadrados;
- 13) El ubicado en Periférico casi esquina Viaducto Tlalpan "Pozo 6", con una superficie de 250 metros cuadrados;
- 14) El ubicado en Viaducto Tlalpan entre San Juan de Dios y San Juan Bosco "Pozo 29", con una superficie de 240 metros cuadrados;
- 15) El ubicado en Viaducto Tlalpan, esquina Calzada Acoxta "Pozo Xochi 30", con una superficie de 250 metros cuadrados;
- 16) El ubicado en Calzada de Tlalpan junto a la estación de mantenimiento del Tren Ligero "Pozo Periférico 4", con una superficie de 300 metros cuadrados;
- 17) El ubicado en Calzada de Tlalpan entre San Juan de Dios y San Juan Bosco "remanente con giro comercial", con una superficie de 79.244 metros cuadrados;
- 18) El ubicado en calle Huipulco con número 20 entre Calzada de Tlalpan y Calzada México Xochimilco, "terreno con construcción" con una especie de 575.66 metros cuadrados.

- 19) El ubicado en calle San Lorenzo entre La Paz y Cerrada San Juan Lorenzo "Iglesia San Lorenzo Mártir" con una superficie de 1000 metros cuadrados.
- 20) El ubicado en Calzada Acueducto esquina San Juan de Dios "estacionamiento Compañía Luz y Fuerza" con una superficie de 150 metros cuadrados.
- 21) El ubicado en Calzada de Tlalpan número 3652 esquina Calzada Acueducto "Subestación Eléctrica Tren Ligero", con una superficie de 200 metros cuadrados.
- 22) El ubicado en Hacienda de San Nicolás Tolentino entre Hacienda de Xilotepec y Hacienda de Jalaltengo "Centro Deportivo San Nicolás Tolentino, Pozo, Biblioteca, Casa de Salud T-1 Y Cibertlalpan", con una superficie de 18586.91 metros cuadrados.

17. El convenio celebrado entre el Departamento del Distrito Federal hoy Gobierno del Distrito Federal e Inmuebles Tlalpan, Sociedad Anónima, relativo a la autorización del fraccionamiento "PRADO COAPA SEGUNDA SECCIÓN", en Villa Coapa, Delegación de Tlalpan, Distrito Federal, de fecha veinte de mayo de mil novecientos setenta y dos, en virtud de que con el mismo se afecta una fracción de las poligonales de los terrenos con que fue beneficiado el ejido quejoso y el plano.

18. El procedimiento de inmatriculación que se contiene en el decreto presidencial de fecha catorce de marzo de mil novecientos ochenta, emitido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el entonces Jefe de Departamento del Distrito Federal, hoy Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Sin que haya lugar a tener como actos reclamados destacados los que se citan a continuación por ser consecuencias lógicas jurídicas que se derivan de los anteriores actos reclamados:

- a) La cancelación, revocación, desconocimiento, suspensión, que aducen hicieron las responsables, de los acuerdos presidenciales de fechas veintiocho de octubre y veinte de diciembre de mil novecientos cuarenta.
- b) La privación en forma total y definitiva de las propiedades, posesiones y disfrute de los derechos agrarios del ejido denominado "Ejido de Huipulco", delegación Tlalpan, en la Ciudad de México, correspondiente a la dotación contenida en la resolución presidencial de fecha diecinueve de octubre de mil novecientos cuarenta.

- c) La cancelación, revocación, desconocimiento o suspensión de cualquier otra índole de la resolución presidencial de dotación y ampliación de tierras con las que se vio beneficiado el ejido quejoso.
- d) La cancelación, revocación o suspensión de cualquier otra índole, que tenga como consecuencia el desconocimiento de los derechos agrarios que haya adquirido el quejoso.
- e) La cancelación, revocación, desconocimiento o suspensión de cualquier otra índole en forma unilateral por las responsables de la toma de posesión, planos provisionales y definitivos de ejecución de las diligencias, censos, certificados y resoluciones agrarias que desconozcan los derechos del quejoso.
- f) La prohibición e impedimento para que la impetrante de garantías realice los fines sociales con las tierras con que fue beneficiada.
- g) La orden de desalojo de las tierras, aguas, posesiones y derechos agrarios de la quejosa.
- h) Los permisos, autorizaciones, licencias de construcción y funcionamiento, la aprobación de planos, las autorizaciones para construcciones y urbanización que están otorgando las autoridades responsables y que afectan la superficie de terreno con que fue beneficiado el ejido quejoso.
- i) El fraccionamiento de los terrenos de propiedad del impetrante de garantías, lotificación, ventas, enajenaciones, planos de notificación, planos de urbanización, resoluciones o sentencias por autoridades judiciales o administrativas, inscripción de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de escrituras, fideicomisos, convenios, acuerdos, resoluciones, sentencias, que tengan como propósito lotificar la superficie citada.

(...)

4.2. Actos reclamados en el juicio de amparo
259/2015 acumulado al 579/2015.

19. La falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio ordinario civil 1489/1991, del índice del Juzgado Décimo Octavo de lo Civil en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México,

promovido por la sucesión de Juan Ríos Hernández contra Ada Juana y Concepción ambas de apellidos Lagarde Vásquez."

En efecto, a partir de los elementos recién mencionados, contrariamente a lo aducido por el recurrente, se corrobora que el juez sí realizó el análisis integral de la demanda, ampliación y aclaración respectivos y no de manera fragmentada, pues consideró todos los actos señalados por la parte quejosa, al precisarlos.

Concretamente, respecto de los actos identificados en el agravio con los **incisos a) a g)** (foja 178 a 179 del recurso de revisión y contenidos en la imagen recién escaneada), este tribunal observa que quedaron comprendidos en la fijación realizada en la sentencia recurrida, salvo los actos atribuidos a los Notarios Públicos, pues de acuerdo con lo antes sustentado páginas atrás, el juez desechó la ampliación de demanda, mediante la cual el ejido los señaló como actos reclamados.

En cuanto a los actos identificados con el **inciso h)** del agravio (apreciable en la imagen escaneada), este órgano colegiado advierte que el juez de Distrito sí los tuvo como actos reclamados, al admitir a trámite la demanda (foja 207 y 208) y ampliación de demanda (foja 5089 a 5090).

En tal virtud, al no asistírle la razón al recurrente en cuanto a lo aquí señalado, el agravio es infundado.

En un diverso agravio, el **ejido recurrente** aduce que la sentencia recurrida es ilegal, porque el juez de Distrito **no tuvo como actos reclamados destacados** los que a continuación

se mencionan, a pesar de que se trata de actos que afectan o pueden afectar sus derechos agrario, al tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la propiedad, posesión o disfrute de las tierras sujetas al régimen ejidal o comunal, a saber:

"a) La cancelación, revocación, desconocimiento, suspensión, que aducen hicieron las responsables, de los acuerdos presidenciales de fechas veintiocho de octubre y veinte de diciembre de mil novecientos cuarenta.

b) La privación en forma total y definitiva de las propiedades, posesiones y disfrute de los derechos agrarios del ejido denominado "Ejido de Huipulco", delegación Tlalpan, en la Ciudad de México, correspondiente a la dotación contenida en la resolución presidencial de fecha diecinueve de octubre de mil novecientos veintidós.

c) La cancelación, revocación, desconocimiento o suspensión de cualquier otra índole de la resolución presidencial de dotación y ampliación de tierras con las que se vio beneficiado el ejido quejoso.

d) La cancelación, revocación o suspensión de cualquier otra índole, que tenga como consecuencia el desconocimiento de los derechos agrarios que haya adquirido el quejoso.

e) La cancelación, revocación, desconocimiento o suspensión de cualquier otra índole en forma unilateral por las responsables de la toma de posesión, planos provisionales y



y resoluciones agrarias que desconozcan los derechos del quejoso.

f) La prohibición e impedimento para que la impetrante de garantías realice los fines sociales con las tierras con que fue beneficiada.

g) La orden de desalojo de las tierras, aguas, posesiones y derechos agrarios de la quejosa.

h) Los permisos, autorizaciones, licencias de construcción y funcionamiento, la aprobación de planos, las autorizaciones para construcciones y urbanización que están otorgando las autoridades responsables y que afectan la superficie de terreno con que fue beneficiado el ejido quejoso.

i) El fraccionamiento de los terrenos de propiedad del impetrante de garantías, lotificación, ventas, enajenaciones, planos de notificación, planos de urbanización, resoluciones o sentencias por autoridades judiciales o administrativas, inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de escrituras, fideicomisos, convenios, acuerdos, resoluciones, sentencias, que tengan como propósito lotificar la superficie citada."

El agravio es sustancialmente fundado.

Del artículo 77, fracción I, en relación con los numerales 223, 224, 225 de la Ley de Amparo antes transcritos, se desprende que el juez de Distrito debe tener como actos reclamados en materia agraria los señalados por la parte

quejosa en su demanda, cuando se ubiquen en los supuestos del ordinal 212 del ordenamiento legal citado, cuyo texto es del tenor literal siguiente:

“Artículo 212. Con la finalidad de tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, así como, en su pretensión de derechos, a quienes pertenezcan a la clase campesina, se observarán las disposiciones del presente Libro Segundo en los siguientes juicios de amparo:

I. Aquéllos en que se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos, o a los núcleos de población que de hecho y por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, lo mismo si las entidades o individuos mencionados figuran como quejosos que como terceros perjudicados.

II. Cuando los actos reclamados afecten o puedan afectar otros derechos agrarios de las entidades o individuos a que se refiere la fracción anterior, sea que figuren como quejosos o como terceros perjudicados.

III. Aquéllos en que la consecuencia sea no reconocerles o afectarles en cualquier forma derechos que hayan demandado ante las autoridades, quienes los hayan hecho valer como aspirantes a ejidatarios o comuneros.”

Sobre esas bases, se procede a revisar la demanda de protección constitucional, el auto que recayó a la demanda y la sentencia recurrida, con la finalidad de advertir si el juez de Distrito debía tener como actos reclamados destacados los

Entre otros, en su demanda inicial de amparo, la parte quejosa señaló como actos reclamados los referidos en el agravio en estudio (foja 7 a 51).

Por su parte, mediante acuerdo de catorce de junio de dos mil cinco (foja 207 y 208), el Juez de Distrito admitió a trámite la demanda respecto de todos los actos; y solicitó a las autoridades responsables que rindieran su informe justificado dentro del término de diez días, con la precisión de que sus informes debían contener las formalidades que exigen los artículos 222, 223 y 224 de la Ley de Amparo y las constancias necesarias para determinar con precisión los derechos agrarios de la parte quejosa y de los terceros perjudicados, apercibidas que de ser omisas sobre el particular, se proveería de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo, del numeral 224 citado.

Seguidos los trámites de ley, el juez dictó la sentencia recurrida, en la cual en relación con los actos aquí mencionados, señaló lo siguiente: ***"Sin que haya lugar a tener como actos reclamados destacados los que se citan a continuación —los referidos en el agravio— por ser consecuencias lógicas jurídicas que se derivan de los anteriores actos reclamados"*** (considerando cuarto).

Como se ve, en la sentencia recurrida, los actos referidos por el ejido recurrente no se consideraron ***"actos reclamados destacados"***, sino que se consideraron ***"consecuencias lógico jurídicas que se derivan"*** de los demás actos reclamados.

Lo anterior, a consideración de este tribunal colegiado, es incorrecto, porque, por una parte, los actos identificados con los incisos a) a i), precisados en el agravio, se tuvieron como actos reclamados destacados en el acuerdo admisorio y, por otra parte, como lo aduce el ejido recurrente, se trata de actos que sí son susceptibles de afectar derechos agrarios del ejido, en términos de lo previsto por el artículo 212 de la Ley de Amparo.

No obstante lo precedente, dado que de la lectura integral a la demanda de protección constitucional, se observa que el ejido recurrente planteó la inconstitucionalidad de los **actos identificados** en los agravios **con los incisos a) a i)**, en vía de consecuencia de la inconstitucionalidad de los decretos expropiatorios reclamados y no por vicios propios, su análisis queda reservado a la decisión que se adopte con respecto a los decretos mencionados.

Lo anterior, partiendo de la base de que los actos precisados son ciertos, pues así se desprende de los informes justificados que constan en autos, en el ámbito de su competencia, respecto del Presidente de la República (foja 2364 y 7301), Director Jurídico del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México (foja 3830 y 5294), Delegado del Registro Agrario Nacional en la ciudad (foja 1038), Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, Oficial Mayor (foja 1347), Oficial Mayor y Director General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Distrito Federal (foja 5506 y 5519), Subdirectora de Apoyo Jurídico, Directora de Administración Inmobiliaria, Jefe de la Unidad Departamental de Análisis y Proyectos Inmobiliarios y

de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario Adscrita de la Oficialía Mayor del Distrito Federal (fojas 5309, 5470, 5477 y 5485), Subdirectora de Inspección e Investigación Inmobiliaria de la Dirección de Patrimonio Inmobiliario adscrita a la Oficialía Mayor del Distrito Federal (foja 5477), Director Jurídico y de Gobierno en la Delegación de Tlalpan, de la Ciudad de México (foja 5256), al hoy Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (fojas 5496 a 5502).

En ese contexto, lo procedente es modificar la sentencia recurrida y tener como actos reclamados destacados los mencionados por el ejido recurrente, identificados con los incisos a) a i) recién precisados.

NOVENO. El **ejido recurrente** aduce que la sentencia recurrida es ilegal, porque, contrariamente a lo determinado en los considerandos quinto y séptimo de la sentencia recurrida, no procedía decretar el sobreseimiento en el juicio por inexistencia de actos o por actualización de las causales de improcedencia a que se refiere el juez de Distrito, por lo siguiente:

A. La negativa de los actos mencionada en los informes justificados de diversas autoridades que se precisan enseguida, **quedó desvirtuada con las constancias que obran en autos**, presentadas por las partes o recabadas de oficio conforme a lo previsto por los artículos 78, 212 al 234 de la Ley de Amparo, las cuales constituyen un hecho notorio en términos de lo previsto por el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.

B. En materia agraria, los informes deben rendirse no únicamente respecto de los actos señalados por el ejido, sino por todos aquellos que traten de ejecutar o que afecten las tierras y aguas del ente agrario, con lo cual no cumplieron las autoridades, a pesar de que les atribuyó el carácter de **ordenadoras y/o ejecutoras**, ante lo cual, en el expediente constan diversos **informes irregulares**.

C. En algunos casos, **las autoridades emiten pronunciamientos contradictorios respecto a la certeza o inexistencia de los actos**, en sus informes justificados.

D. En otros casos, las autoridades **no remitieron las constancias certificadas que justifiquen su negativa**, lo cual era relevante, al advertirse indicios de su existencia en autos, en copia simple.

E. No se actualizan las **causales de improcedencia** a que se refiere el juez de Distrito, porque no recabó de oficio **las pruebas que las acreditaran de manera fehaciente**.

Todo lo cual, a decir del recurrente, el juez de Distrito debió solventar por medio de las actuaciones que estimara pertinentes, por ejemplo, previniendo a las autoridades para que realizaran las precisiones conducentes; recabando las pruebas certificadas con las que se corroborara la existencia de los actos o las causales de improcedencia, pero no hizo.

El recurrente señala que, contrariamente a lo determinado en la sentencia recurrida, la sola negativa de los actos que realicen las autoridades responsables en sus informes

justificados; o la manifestación de que se actualiza alguna causal de improcedencia, no traslada la carga de la prueba al ejido quejoso, respectivamente, de acreditar la existencia del acto o de que no se surte la improcedencia, ya que, conforme a lo previsto por los artículos 2°, 212 al 234 de la Ley reglamentaria aplicable, en el apartado relativo al amparo en materia agraria, corresponde al juez recabar en forma oficiosa todas las pruebas necesarias para la defensa de los derechos agrarios del ejido, en suplencia de la deficiencia.

En concreto, cabe señalar que los agravios tienen relación con los informes justificados y pruebas, a que alude el recurrente en su escrito de agravios, cuyo contenido se escanea en lo conducente:

Páginas 60 a 64:

3.- Por lo que hace al oficio número DGIJG/0826/2008, (fojas 5167 a 5170 de autos) por medio del cual rinde su informe justificado sobre la ampliación de la demanda de garantías la Directora General Jurídico y de Gobierno, en el que manifiesta que de los actos reclamados que señala la parte quejosa en su ampliación no le imputa ninguno a dicha autoridad, es de manifestarse que del escrito de ampliación de demanda y su aclaración, la imputante de garantías hizo imputación en forma indistinta de los actos reclamados a todos y cada uno de las autoridades señaladas como responsables en su doble aspecto de ordenadoras y ejecutoras por lo que al ser un hecho notorio de conformidad al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de constancias de autos hacen prueba plena y desvirtúan dicha breveración.

Ahora bien, a mayor profusión y toda vez que dicha autoridad niega categóricamente los actos reclamados, en virtud de que no ha ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar acto alguno de los que declara la quejosa, lo procedente es se lo requiera en términos del

capítulo que regula el Amparo Agrario de la Ley de Amparo para que precise a cuales otros actos se refiere que haya ejecutado, pues no debe perderse de vista que los informes justificados en materia agraria deben ser rendidos no únicamente en los que señala el ejido, sino como con todos aquellos que se traten de ejecutar o que afecten las tierras y aguas del ente agrario. A mayor profusión y toda vez que con el acervo probatorio exhibido por las partes se acredita la participación de la Directora que rinde su informe, es por lo que se desvirtúa dicha negativa para los efectos legales conducentes.

4.- Por lo que hace al informe justificado rendido por el Director General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal (fojas 5179) por el que devuelve el oficio dirigido al Director de Inspección e Investigación Inmobiliaria de la Oficialía del Gobierno del Distrito Federal y del Director de Administración Inmobiliaria de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, es de manifestarse que de los documentos que obran a fojas 4964 a 5619 de autos, se desprende la participación de dichas autoridades como se desprende del acta administrativa de entrega recepción física del inmueble denominado "San Nicolás Tolentino" que obra a fojas 4973 a 4974 de autos, por lo que si la denominación de dichas autoridades cambio corresponde a las autoridades responsables informar a su Señoría sobre las autoridades substitutas, y no únicamente regresar los oficios, por lo que al haberse desvirtuado la inexistencia de las autoridades responsables, lo procedente es que al no haber rendido su informe justificado se le y tenga como presuntivamente cierto ara los efectos legales conducentes.

5.- Por lo que hace al informe justificado rendido por ausencia de la Directora Jurídica de la Secretaría de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal, que obra a fojas 5182, mediante el cual manifiesta que no existe el Director General de Planeación y Proyectos (SETRAVI) del Gobierno del Distrito Federal en el Organigrama de la Secretaría de Transporte y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal, es de manifestarse que la quejosa señala como autoridad responsable al Director de Comercialización y Administración de Inmobiliaria de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. y Director de Administración y Finanzas de Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. (SERVIMET), y no como lo refiere la autoridad que se trate de SETRAVI, y toda vez que la demanda es un todo incluyendo los documentos que en las misma se adjuntan, de acuerdo al criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es por lo que la supuesta inexistencia que argumenta la autoridad se ve desvirtuada con las constancias de autos y al no haber rendido su informe justificado deberá de tenerse como presuntivamente cierto.

6.- Por lo que refiere al informe justificado rendido por el Delegado Agrario en el Distrito Federal, que obra a fojas 5198 a 5201, oficio número R.A.-E.J.-007-523 de fecha 12 de julio de 2005 y de 8 de abril de 2006, en el que reitera su informe justificado, de que se trata de actos consentidos plenamente, asimismo señala como nueva autoridad responsable a la Comisión Para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), y que manifiesta que son ciertos los actos reclamados al Coordinador Agrario en el Distrito Federal, por tal motivo deberá de tenerse por rendido su informe en forma afirmativa.

Ahora bien y visto la existencia de una nueva autoridad responsable, como lo es la Comisión Para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), lo procedente es se tenga como autoridad responsable a dicho órgano administrativo y se le emplaze para que rinda su informe justificado, ya que al existir intervención en la ejecución de los actos que se reclaman tiene el carácter de autoridad responsable y no de tercero perjudicado como lo señala la autoridad informante; ahora bien toda vez que el acuerdo que recayó al oficio de referencia, es omiso en llamar a dicha autoridad, solicito y así procede se le llame para los efectos legales conducentes.

7.- Por lo que hace el informe justificado rendido por el Director de Construcción de Obras de Infraestructura Vial dependiente de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, en su denominación correcta y que substituyo a la Dirección de Obras de Infraestructura del Gobierno del Distrito Federal, el cual obra a fojas 5232 a 5235 de autos, es de manifestarse que dada la aclaración hecha por la autoridad informante, deberá de tenerse como autoridad substituta para todos los efectos legales conducentes.

Por lo que hace a la negativa de los actos reclamados que hace la autoridad responsable, debe decirse que del acervo probatorio exhibido por el impetrante de garantías se desvirtúa dicha negativa.

8.- Por lo que hace al informe justificado rendido por la Jefe Delegacional, Director General Jurídico y de Gobierno, Director General de Administración y Director General de Desarrollo Social, a fojas 5236 a 5241 de autos, por medio del cual rinden sus informes justificados y señalan que la denominación correcta del Subdelegado de Desarrollo Social de la Delegación de Tlalpan es la de Director General de Desarrollo Social, y por lo que hace al Subdelegado Jurídico y de Gobierno de la Delegación de Tlalpan, su denominación correcta es la de Director General Jurídico y de Gobierno y Subdelegado de la Administración de la Delegación de Tlalpan, cuya denominación correcta es Director General de Administración; en virtud de lo anterior solicito y así procede se tenga como denominación correcta la que indican las autoridades responsables para todos los efectos legales conducentes.

Ahora bien por lo que hace a la inexistencia que argumentan las autoridades responsables del Jefe de la Unidad Departamental Padrón Inmobiliario y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, Jefatura Delegación en Tlalpan, y Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, es de manifestarse que a fojas 4962 a 5620 de los autos, aparece una relación de inmuebles en los que se ubican los servicios públicos de los cuales se desprenden la existencia de la Unidad Departamental Padrón Inmobiliario y Vivienda con las siglas U.D. PADRON INMOBILIARIO Y VIVIENDA, y a fojas 4983 de autos en el oficio número C21-UDAI-432.99, de fecha 7 de mayo de 1999, firma el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales en Tlalpan, el entonces Lic. RAFAEL BARBERENA HURTADO, por consiguiente la supuesta inexistencia que argumentan las autoridades responsables se ve desvirtuada con los documentos públicos que obran en autos, por lo tanto al no haber rendido sus informes justificados, lo procedente es tenerlos como presuntivamente ciertos para los efectos legales conducentes.

Por lo que hace a la negativa de los actos reclamados es de señalarse que dicha negativa se ve desvirtuada con el acervo probatorio que obra agregado en los autos, ahora bien cada vez que en su informe manifiestan las autoridades responsables que mediante oficio C21-UDAI-432.99 de fecha 7 de mayo de 1999, por medio del cual el Subdelegado Jurídico y de Gobierno en Tlalpan, remite el acta entrega recepción del inmueble ubicado en San Juan Boscos, Calle San Lorenzo y Carrada San Lorenzo, Colonia Huipulco, es cierto el acta administrativa de entrega-recepción física del inmueble denominado DEPORTIVO SAN NICOLAS TOLENTINO, ubicado en la calle de Ex Hacienda de San Nicolás Tolentino y Ejido de Huipulco, Colonia Prado Coapa, Delegación Tlalpan, con una superficie de 14,387.908 metros cuadrados, con motivo de la asignación a favor de la Delegación Tlalpan, derivado del acuerdo emitido por el Comité del Patrimonio Inmobiliario en su Novena Sesión (sic) Ordinaria (9/2005) de fecha 12 de Mayo de 2005, por medio del cual el Director General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, por medio del cual realiza la diligencia administrativa de entrega recepción del inmueble antes descrito al Jefe Delegacional en Tlalpan y otras autoridades y que se especifican en el plano topográfico clave CT058-C2/2005, de fecha 4 de mayo de 2005, elaborado por la Subdirección de Investigación Inmobiliaria de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, sin que hubiese exhibido las copias certificadas de los mismos, lo procedente es que se requiera a las autoridades responsables para que en apoyo a su informe justificado, remitan las copias certificadas de los documentos que indican, por tratarse de un amparo agrario, ahora bien en el supuesto sin conceder de que no existan en sus archivos, solicito y así proceda se requiera a las autoridades que indican la informante para que expidan y remitan a este juzgado dichas documentales y obren como prueba en el presente asunto.

Por lo que hace a la negativa de los actos reclamados, debe decirse que dicha negativa se ve desvirtuada con el acervo probatorio que obra agregado en autos.

9.- Por lo que hace al informe justificado rendido por Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, Director General de Desarrollo Urbano, Director General de Administración Urbana, así como el Director del Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano todos ellos de la misma Secretaría que obra agregado en autos a fojas 5250 a 5255, por medio del cual niegan los actos reclamados.

Es de manifestarse que respecto a la falta de imputación de los actos que se reclaman, debe decirse que en el escrito de ampliación de demanda y su aclaratorio el quejoso imputo a todos y cada una de las autoridades responsables en su doble aspecto de ordenadores y ejecutores por lo que al ser un hecho notorio de conformidad al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de constancia de autos hacen prueba plena y desvirtúan dicha objeción.

Ahora bien, a mayor profusión y toda vez que dicha autoridad niega categóricamente los actos reclamados, en virtud de que no ha ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar acto alguno de los que declara la quejosa, lo procedente es se le requiera en términos del capítulo que regula el Amparo Agrario de la Ley de Amparo para que precise a cuáles otros actos se refiere que haya ejecutado, pues no debe perderse de vista que los informes justificados en materia agraria deben ser rendidos no únicamente en los que señala el ejido, sino como con todos aquellos que se traten de ejecutar o que afecten las tierras y aguas del ente agrario. A mayor profusión y toda vez que con el acervo probatorio exhibido por las partes se acredita la participación de la autoridad que rinde su informe, es por lo que se desvirtúa dicha negativa para los efectos legales conducentes.

10.- Por lo que hace al informe rendido por el Secretario de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal, fojas 5256 a 5259 de autos por virtud del cual niega los actos reclamados, debe decirse que en el escrito de ampliación de demanda y su aclaratorio el quejoso imputó a todos y cada una de las autoridades responsables en su doble aspecto de ordenadoras y ejecutoras por lo que al ser un hecho notorio de conformidad al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de constancias de autos hacen prueba plena y desvirtúan dicha aseveración.

Ahora bien, a mayor profusión y toda vez que dicha autoridad niega categóricamente los actos reclamados, en virtud de que no ha ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar acto alguno de los que declara la quejosa, lo procedente es se le requiera en términos del capítulo que regula el Amparo Agrario de la Ley de Amparo para que precise a cuáles otros actos se refiere que haya ejecutado, pues no debe perderse de vista que los informes justificados en materia agraria deben ser rendidos no únicamente en los que señala el ejido, sino como con todos aquellos que se traten de ejecutar o que afecten las tierras y aguas del ente agrario. A mayor profusión y toda vez que con el acervo probatorio exhibido por las partes se acredita la participación de la autoridad que rinde su informe, es por lo que se desvirtúa dicha negativa para los efectos legales conducentes.

11.- Por lo que hace al Director Jurídico del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Distrito Federal, en virtud de que admite el acto reclamado es por lo que queda fuera de toda discusión y exhibe copia certificada del folio real en donde aparece la inscripción realizada, toda vez que no manifiesta nada en relación a los demás actos reclamados lo procedente es tener por presuntivamente ciertos los demás actos reclamados.

12.- Por lo que hace al Tesorero del Gobierno del Distrito Federal, fojas 5397 a 5398, de autos, por medio del cual niega los actos, debe decirse que toda vez que de constancias de autos se desprende su participación, con ella se ve desvirtuada su negativa, debiendo de tener por ciertos los actos reclamados al desprenderse de las documentales ofrecidas por el imponente de garantías.

13.- Por lo que hace al informe justificado signado por la Subdirectora de Apoyo Jurídico de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal que obra a fojas 5309 a 5315 por el que niega los actos reclamados y acepta haber estado presente en la entrega recepción de fecha 31 de Julio de 1998, debe decirse que dicha negativa se ve desvirtuada con el informe justificado rendido por la Jefe Delegacional, Director General Jurídico y de Gobierno, Director General de Administración y Director General de Desarrollo Social, a fojas 5236 a 5241 de autos, por medio del cual rinden sus informes justificados y señalan que la denominación correcta del Subdelegado de Desarrollo Social de la Delegación de Tlalpan es la de Director General de Desarrollo Social, y por lo que hace al Subdelegado Jurídico y de Gobierno de la Delegación de Tlalpan, su denominación correcta es la de Director General Jurídico y de Gobierno y Subdelegado de la Administración de la Delegación de Tlalpan, cuya denominación correcta es 'Director General de Administración; en virtud de lo anterior solicito y así procede se tenga como denominación correcta la que indican las autoridades responsables para todos los efectos legales conducentes.

Ahora bien por lo que hace a la inexistencia que argumentan las autoridades responsables del Jefe de la Unidad Departamental Padrón Inmobiliario y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, Jefatura Delegación en Tlalpan, y Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, es de manifestarse que a fojas 4962 a 5620 de los autos, aparece una relación de inmuebles en los que se ubican los servicios

publicos de los cuales se desprenden la existencia de la Unidad Departamental Padrón Inmobiliario y Vivienda con las siglas U.D. PADRON INMOBILIARIO Y VIVIENDA, y a fojas 4983 de autos en el oficio número C21-UDAJ-432.99 de fecha 7 de mayo de 1999, firma el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales en Tlalpan, el entonces Lic. RAFAEL BARBERENA HURTADO, por consiguiente la supuesta inexistencia que argumentan las autoridades responsables se ve desvirtuada con los documentos publicos que obran en autos, por lo tanto al no haber rendido sus informes justificados, lo procedente es tenerlos como presuntivamente ciertos para los efectos legales conducentes.

Por lo que hace a la negativa de los actos reclamados es de señalarse que dicha negativa se ve desvirtuada con el acervo probatorio que obra agregado en los autos, ahora bien toda vez que en su informe manifiestan las autoridades responsables que mediante oficio C21-UDAJ-432.99 de fecha 7 de mayo de 1999, por medio del cual el Subdelegado Jurídico y de Gobierno en Tlalpan, remite el acta entrega recepción del inmueble ubicado en San Juan Bosco, Calle San Lorenzo y Cerrada San Lorenzo, Colonia Huipuleco, es cierto el acta administrativa de entrega-recepción física del inmueble denominado DEPORTIVO SAN NICOLAS TOLENTINO, ubicado en la calle de Ex hacienda de San Nicolás Tolentino y Ejido de Huipuleco, Colonia Prado Coapa, Delegación Tlalpan, con una superficie de 14,387,908 metros cuadrados, con motivo de la asignación a favor de la Delegación Tlalpan, derivado del acuerdo emitido por el Comité del Patrimonio Inmobiliario en su Novena Sección (sic) Ordinaria (9/2005) de fecha 12 de Mayo de 2005, por medio del cual el Director General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, por medio del cual realiza la diligencia administrativa de entrega recepción del inmueble antes descrito al Jefe Delegacional en Tlalpan y otras autoridades y que se especifica en el plano topográfico clave CT058-C2/2005, de fecha 4 de mayo de 2005, elaborado por la Subdirección de Investigación Inmobiliaria de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, sin que hubiere exhibido las copias certificadas de los mismos, lo procedente es que se requiera a las autoridades responsables para que en apoyo a su informe justificando, remitan las copias certificadas de los documentos que indican, por tratarse de un amparo agrario, ahora bien en el supuesto sin conceder de que no existan en sus archivos, solicito y así procede se requiera a las autoridades que indica la informante para que expidan y remitan a este juzgado dichas documentales y obren como prueba en el presente asunto.

Por lo que hace a la negativa de los actos reclamados, debe decirse que dicha negativa se ve desvirtuada con el acervo probatorio que obra agregado en autos.

14.- Por lo que hace al informe rendido por el Director General de la Comisión de la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) que obra a fojas 5423 a 5424, es de manifestarse que la negativa que dice de los actos reclamados se ve desvirtuada con el acervo probatorio que obra en autos, ahora bien por lo que hace al juicio de amparo que menciona es de señalarse que del mismo se desprende sólo un decreto expropiatorio que afecta una parte de la ampliación de dotación del ejido quejoso y no así su totalidad por lo que los demás actos reclamados no fueran desvirtuados se deben de tener por presuntivamente ciertos.

Páginas 65 a 68 de los agravios:

"...1.- Por lo que respecta al Informe Justificado rendido por la Lic. Aracida Berenice Rabago Dueñas, quien es **DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO**, adjunto a la Oficialía Mayor del Distrito Federal, mediante oficio ingresado en la Oficialía de Partes Común, el día 17 de Julio del presente año, mediante el cual manifiesta:

"...No son ciertos los actos que se reclaman, en virtud de que estos son ajenos al ámbito de competencia de esta autoridad señalada como responsable..."

Sin embargo, más adelante manifiesta lo que a continuación se cita:

"...No obstante lo anterior se declara que la intervención que esta autoridad tuvo conjuntamente con el resto de la diligencia administrativa de la **ENTREGA-RECEPCIÓN** el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y ocho, respecto del inmueble denominado "Centro Barrio Huipulco" ubicado en la calle San Juan Bosco, s/n, esquina San Lorenzo Colonia Huipulco, Delegación Tlalpan, en esta Ciudad Capital.

...Igualmente el treinta de mayo de dos mil cinco asistió a la **ENTREGA-RECEPCIÓN** del mismo inmueble, a través de la cual la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario dependiente de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, efectuó la preservación y salvaguarda del inmueble multicitado..."

En virtud de lo anterior y toda vez que el informe rendido por la autoridad responsable por una parte niega los actos porque a su parecer no forman parte de su ámbito de competencia, mientras que por otra parte reconoce su intervención al momento de la realización del acto reclamado que en todo caso vulnera la esfera jurídica del gobernado al intervenir en actos administrativos para los cuales carece de competencia; por lo tanto viola los principios constitucionales de fundamentación y motivación, ya que recordemos que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite hacer. Bajo este orden de ideas el informe rendido por la autoridad responsable también deviene en irregular, por lo que se deberá de tener como rendido en sentido afirmativo, aunado a que carece de los elementos de fundamentación y motivación que como consecuencia de ser emitido por autoridad competente debe observar.

2.- Por lo que hace al oficio signado por el Ing. Antonio García González, quien es **Subdirector de Inspección e Investigación Inmobiliaria de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario Adscrita a la Oficialía Mayor del Distrito Federal**, por virtud del cual manifiesta:

"No son ciertos los actos que se reclaman en virtud de que estos son ajenos al ámbito de competencia de esta autoridad señalada como responsable, sin embargo se declara que la única intervención que tuvo la autoridad a la que representa en el presente asunto, fue asistir a la diligencia Administrativa de **ENTREGA-RECEPCIÓN** del inmueble ubicado en calle Juan Bosco, calle San Lorenzo y Carretera de San Lorenzo, Colonia Huipulco, Delegación Tlalpan, en esta Ciudad del treinta de mayo de dos mil cinco en la que la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario dependiente de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, realizó la entrega física del inmueble antes referido a la Delegación Tlalpan, para su custodia, preservación y a efecto de salvaguardar el inmueble multicitado, actos que en la actualidad revisten el carácter de actos consumados..."

De igual forma se intervino en la realización del levantamiento topográfico clave CT014-CU2003 del curso de mayo de dos mil cinco, mismo que fue realizada por el entonces Subdirector de Inspección e Investigación Inmobiliaria, respecto del inmueble denominado "Departamento San Nicolás Tototmito" ubicado en calle Es



RECEBIDO
EN LA OFICINA
DEL

hacienda de San Nicolás, Colonia y Ejidos de Huipulco, Colonia Prados Chapa, Delegación Tlalpan en esta Ciudad, el cual no constituye un acto impugnado en el presente juicio...

De lo transcrito anteriormente se desprende que el informe rendido por la autoridad responsable por una parte niega los actos porque a su parecer no forman parte de su ámbito de competencia, mientras que por otra parte reconoce su intervención al momento de la realización del acto reclamado que en todo caso vulnera la esfera jurídica del gobernado al intervenir en actos administrativos para los cuales carece de competencia; por lo tanto viola los principios constitucionales de fundamentación y motivación, ya que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permita hacer. En virtud de lo anterior debe decirse que el informe rendido por la autoridad responsable también deviene en irregular, por lo que se deberá de tener como rendido en sentido afirmativo, aunado a que carece de los elementos de fundamentación y motivación que como consecuencia de ser emitido por autoridad competente debe observar.

3.- En relación al oficio signado por el Arquitecto Jorge García Martínez, *Jefe de la Unidad Departamental de Análisis, Proyectos Inmobiliarios de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario*, por virtud del cual rinde su informe justificado y manifiesta:

"...No son ciertos los actos que se reclaman, en virtud de que estos son ajenos al ámbito de competencia de esta autoridad señalada como responsable..."

No obstante lo anterior se aclara que la única intervención que tuvo en el presente asunto, fue la de asistir a la diligencia Administrativa de la ENTREGA-RECEPCIÓN del terreno de mayor de dos mil cinco, con respecto del inmueble denominado "Centro Barrio Huipulco" ubicado en la calle San Juan Bosco S/N, esquina San Lorenzo Colonia Huipulco", Delegación Tlalpan, en esta Ciudad Capital, actos que en la actualidad revisten el carácter de actos consumados.

De lo anterior puede observarse que el informe rendido por la autoridad responsable en principio niega los actos reclamados manifestando que no forman parte de su ámbito de competencia, siendo que líneas más adelante reconoce su intervención al momento de la realización del acto reclamado, el cual en todo caso vulnera la esfera jurídica del gobernado al intervenir en actos administrativos para los cuales carece de competencia; por lo tanto vulnera las garantías de fundamentación y motivación del ejido quejoso, ya que recordamos que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permita hacer.

En este contexto el informe rendido por la autoridad responsable es irregular, por lo que se deberá de tener como rendido en sentido afirmativo.

4.- En relación al informe justificado rendido por el Ing. Alfredo Rosas Labastida en su carácter de *Director de Inventario Inmobiliario y Sistemas de Información de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario adscrita a la Oficialía Mayor del Distrito Federal* en el cual manifiesta:

"...Esta autoridad **NIEGA** los actos reclamados que se imputan sobre el inmueble ubicado en la calle de Juan Bosco, Calle San Lorenzo y Cerrada de San Lorenzo, Colonia Huipulco, Delegación Tlalpan... Asimismo, esta autoridad no viola en perjuicio del **EJIDO DEL POBLADO DE HUIPULCO, DELEGACIÓN TLALPAN, DISTRITO FEDERAL**, precepto Constitucional alguno en virtud de que no existe acto reclamado demostrado en contra de esta autoridad señalada como responsable..."

Por lo que hace a la negativa de los actos reclamados que hace la autoridad responsable, debe decirse que del acervo probatorio exhibido por el imputante de garantías se desvirtúa dicha negativa.

5.- Por lo que hace al informe justificado rendido por el Lic. Miguel Hernández Toledo, *Subdirector de Análisis, Investigación e Integración del Inventario Inmobiliario de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario* quien manifiesta:

"...Esta autoridad **NIEGA** los actos reclamados que se imputan sobre el inmueble ubicado en la calle de Juan Bosco, Calle San Lorenzo y Cerrada de San Lorenzo, Colonia Huipulco, Delegación Tlalpan... Asimismo, esta autoridad no viola en perjuicio del **EJIDO DEL POBLADO DE HUIPULCO, DELEGACIÓN TLALPAN, DISTRITO FEDERAL**, precepto Constitucional alguno en virtud de que no existe acto reclamado demostrado en contra de esta autoridad señalada como responsable..."

Por lo que hace a la negativa de los actos reclamados que hace la autoridad responsable, debe decirse que del acervo probatorio exhibido por el impetrante de garantías se desvirtúa dicha negativa.

6.- Con relación al oficio de fecha 17 de Julio de 2008, suscrito por Ángel Avila Pérez, quien es Secretario de Gobierno del Distrito Federal, por ausencia del Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, *Jefe de Gobierno del Distrito Federal*, por virtud del cual informa lo siguiente:

"...**ACEPTO** que el entonces Jefe del Departamento del Distrito Federal, actualmente Jefe de Gobierno del Distrito Federal, rubricó el Decreto por el que se desincorpora del dominio Público del Departamento del Distrito Federal con 165 predios ubicados en las zonas que se indican y se autoriza al mismo Departamento, para venderlos fuera de subasta pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 1980...

NEGÓ LOS DEMÁS ACTOS QUE SE ME RECLAMAN, toda vez que a excepción de lo que se ha dejado dispuesto, no he dictado ningún acuerdo, orden o resolución, ni ejecutado u omitido acto alguno en el sentido que se indica en la demanda de garantías.

Por lo que hace al informe justificado rendido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, toda vez que acepta la existencia del acto reclamado consistente en el Decreto por el que se desincorpora del dominio Público del Departamento del Distrito Federal con 165 predios ubicados en las zonas que se indican y se autoriza al mismo Departamento, para venderlos fuera de subasta pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 1980, sin embargo no acredita la propiedad a favor del Gobierno Federal.

En este orden de ideas, es de hacerse notar a su Señoría la importancia que tiene en el presente asunto el que se desahogue la prueba pericial en Topografía y Geodesia, misma que fue ofrecida como medio de prueba por los impetrantes de garantías en el antecedente 14 del escrito de ampliación de la demanda de amparo de fecha 7 de febrero de 2008, con la finalidad de que el perito realizara la reconstrucción de las poligonales que conforman la dotación y ampliación del Ejido de Huipulco, Delegación de Tlalpam, Distrito Federal, para plasmarlo en planos actualizados (cartografías del Distrito Federal) y una vez que realizarán los mismos, debía de precisar cuál es la superficie que abarca el ejido quejoso, señalando con toda precisión las diversas poligonales y límites del ejido teniendo en consideración todos y cada uno de los documentos que obran en el expediente en que se actúa, realizando los planos correspondientes, e indicar si dentro de dicha superficie se encuentran los inmuebles que se precisan en el escrito de demanda y ampliación de la demanda, determinando si los mismos se encuentran afectados por decretos, acuerdos, actos administrativos, convenios u oficios.

En virtud de lo anterior y toda vez que hasta este momento no se ha proveído respecto a la probanza ofrecida, solicito y así procede se tenga por ofrecida la misma a cargo de la Arquitecta Ivonne Guadalupe Mucías Bifano, con cédula profesional número 339715, con especialidad en Valuación Inmobiliaria AE-06046, expedida por la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, quien tiene su domicilio en Las Flores 31, Departamento 2, Colonia La Candelaria, Delegación Coyoacán.

Ahora bien, a mayor profusión y toda vez que dicha autoridad niega categóricamente los actos reclamados, en virtud de que no ha ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar acto alguno de los que declara la quejosa, lo procedente es se le requiera en términos del capítulo que regula el Amparo Agrario de la Ley de Amparo para que precise a cuales otros actos se refiere que haya ejecutado; de igual forma no debe perderse de vista que los informes justificados en materia agraria deben ser rendidos no únicamente en relación a los actos que señala el ejido, sino con todos aquellos actos que se traten de ejecutar o que afecten las tierras y aguas del ente agrario. A mayor profusión y toda vez que con el acervo probatorio exhibido por las partes se acredita la participación del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, es por lo que se desvirtúa dicha negativa para los efectos legales conducentes.

7.- Por lo que refiere a los informes justificados rendidos tanto por el Lic. Kantón Montaña Cuadra, *Oficial Mayor del Distrito Federal*, como por el Ing. Cesar David Hernández Pérez, *Director General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Distrito Federal* por virtud de los cuales reconocen como ciertos los siguientes actos:

Que es cierto el acto que se reclama ya que efectivamente se celebró un acto administrativo de ENTREGA-RECEPCIÓN de fecha 30 de Julio de 1998 respecto del inmueble denominado "Centro de Barrio Huipulco" ubicado en calle San Juan Bosco, s/n. esquina San Lorenzo Colonia Huipulco, Delegación Tlalpan, en esta Ciudad Capital.

Que es cierto que dentro de la sesión ordinaria 66/97 del 23 de Octubre de 1997, se determinó por el Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, de ejercicio de sus atribuciones y facultades, en el ordenamiento de los artículos 14 y 15 de la Ley del Régimen Patrimonial y Servicio Público, concluyendo que el predio en cuestión se destinó en arrendamiento por ser un inmueble propiedad del Departamento del Distrito Federal, a favor de Servicios Metropolitanos S. A. de C. V., para construir, operar y administrar los centros de comercio y de servicios.

Que es cierto el acto por lo que respecta a la ENTREGA-RECEPCIÓN del inmueble ubicado en calle San Juan Bosco, calle San Lorenzo y Carretera de San Lorenzo, Colonia Huipulco, Delegación Tlalpan, en esta ciudad, de 30 de Mayo de 2005 en la cual el Director General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, asignó el inmueble antes referido a la Delegación Tlalpan surtiendo en ese momento la obligación de dicha Delegación en relación al malhecho predio, la custodia, preservación y salvaguarda del mismo.

Que es cierto el acto consistente en la Celebración de la Novena Sesión Ordinaria 9/2005 de fecha 12 de Mayo de 2005, en la que se acordó "El Comité del Patrimonio Inmobiliario con fundamento en los artículos 14 y 15 de la Ley del Régimen Patrimonial del Servicio Público dictamina procedente la resignación del inmueble antes citado y seguir siendo utilizado como deportivo, biblioteca y casa de salud en beneficio de la comunidad, para su uso, administración y aprovechamiento".

Que de igual forma el 30 de mayo de 2005 la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal realizó la entrega física del inmueble antes referido a la Delegación Tlalpan para la custodia, preservación, salvaguarda del inmueble malhecho.

En virtud de lo anterior se deberá de tener el informe rendido en sentido afirmativo al reconocer la autoridad responsable como ciertos los actos reclamados. Ahora bien, de igual forma la autoridad responsable manifiesta expresamente que sus actos causan agravio a los impetrantes de garantías, más lo intenta desestimar al mismo tiempo al cuestionar el interés jurídico que los quejosos poseen en el presente asunto, lo anterior lo manifestaron de la siguiente forma:

"...Es decir que si bien es cierto que esta autoridad pudiera causar agravio alguno al Ejido quejosos, también es cierto que la parte quejosa por conducto de quienes la representan, no poseían interés jurídico alguno máxime que del propio decreto de fecha 14 de marzo de 1980, se advierte claramente que el legítimo propietario de los inmuebles que se reclaman es el Distrito Federal..."

La manifestación realizada por la autoridad responsable se ve desvirtuada con las constancias que obran en autos, de donde se desprende el interés jurídico de los impetrantes de garantías, de igual forma, debe decirse que en ningún momento manifiesta la manera en que el Gobierno del Distrito Federal adquirió la propiedad sobre los terrenos que habían sido dotados al ejido quejoso..."

Páginas 117 a 132 del escrito de agravios:

Expuesto lo anterior es menester señalar el por qué en el presente caso el Juez A Quo viola los artículos en comento, como se puede constatar de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables las mismas manifiestan que son ciertos algunos de los actos reclamados, sin que exhibieran las copias certificadas que apoyaran sus informes justificados, y en cuanto a los informes irregulares no señalan quien o quienes emitieron los actos que se reclaman, como se demuestra en la relación que se realiza en la forma siguiente:

TOMO I.- EN EL TOMO I DEL JUICIO DE AMPARO DONDE SE ACTÚA EXISTEN LOS SIGUIENTES:

- Foja 496, informe de la Cámara de Diputados de fecha 17 de junio de 2005, reconoce como cierto el acto reclamado consistente en Discusión y aprobación de la Ley Agraria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de Julio de 1993.
- Foja 497 Director General de Desarrollo Urbano rinde su informe justificado, presentado el 23 de Junio de 2005 y niega los actos reclamados.
- Foja 498 la Cámara de Senadores rinde su informe justificado y manifiesto que es Parcialmente Cierto el acto reclamado.
- Foja 643 obra el informe rendido por el Director del Registro de los Planes de Desarrollo Urbano, de fecha 22 de Junio de 2005, por el cual niega los actos reclamados.
- Foja 647, por oficio de fecha 29 de Junio de 2005, el Coordinador General Jurídico de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales niega los actos reclamados.
- Foja 649, Director de Obras e Infraestructura de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, niega los actos.
- Foja 658 el Director General de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, niega los actos.
- Foja 667 el Jefe Delegacional, Director General Jurídico y Gobierno y Director General de Obras y Desarrollo Urbano, Subdirector de Verificación de Reglamentos y Jefe de la Entidad Departamental de Licencias de conducción, manifiestan que es incierto el acto.
- Foja 683 oficio de fecha 29 de Junio de 2005 de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, niega los actos.

- Foja 737 oficio del 4 de Julio de 2005, Directora General de Administración Urbana, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda niega los actos
- Foja 739 Director General de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal, niega los actos.
- Foja 742 apoderado de Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. niega los actos por no ser autoridad para el juicio de amparo.
- Foja 837, obra informe rendido por el Representante Agrario en el Distrito Federal, referente al decreto expropiatorio del 4 de Enero de 1982, Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 8 de Abril de 1982, y exhibe el decreto en copia certificada dentro de un sobre.
- Foja 856, oficio DESJ/AC/1851/2005, de fecha 12 de Julio de 2005, Secretario de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Niega los actos.

TOMO II.- EN EL TOMO II DEL JUICIO DE AMPARO DONDE SE ACTÚA EXISTEN LOS SIGUIENTES:

- Foja 1038 por escrito de fecha 19 de julio de 2005. Signado por el Licenciado Víctor Joaquín Tamargo Jordi, Delegado del Registro Agrario Nacional del Distrito Federal, remitió las siguientes constancias:

- Oficio número 353 de fecha 21 de octubre de 1940, relativo a la devolución de superficies afectadas en el poblado de Huipulco Tlalpan Distrito Federal
- Oficio número 368138 de fecha 13 de mayo de 1940, referente a la orden de cumplimiento de acuerdo presidencial dictado en el expediente O.P.P.A./206(23)16.
- Oficio de fecha 12 de septiembre de 1940 y Oficio de fecha 11 de octubre de 1940, de Encargo de Ejecución de Resoluciones Presidenciales Correspondientes a los poblados de Huipulco y Tepepan en el Distrito Federal.
- Resolución Presidencial de fecha 9 de marzo de 1938, en el expediente número 36-111, de ampliación de ejidos, promovido por los vecinos del poblado de Huipulco, Delegación Tlalpan, Distrito Federal.
- Diario Oficial de la Federación de fecha 8 julio 1938, donde se publica la Resolución de Ampliación de Ejidos al Poblado de Huipulco Delegación Tlalpan, Distrito Federal.
- Resolución que confirma los Derechos Agrarios en los poblados de Huipulco y Tepepan, Distrito Federal, de fecha 10 de diciembre de 1947.
- Diario Oficial de fecha 19 de marzo de 1956, en donde se publica la Resolución de fecha 15 de febrero de 1956, correspondiente a la ejecutoria dictada al expediente de amparo número 80/941, relativo a la devolución de pequeñas propiedades afectadas en los poblados de Huipulco y Tepepan, Distrito Federal.
- Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de mayo de 1957, en el que se publica la Resolución complementaria que ratifica la del quince de febrero de 1956. Publicada el 1 de marzo del mismo año, sobre la ampliación del ejido en los poblados de Huipulco y Tepepan en Tlalpan y Xochimilco Distrito Federal
- Diario Oficial de fecha 6 de marzo de 1958, en el que se publica la resolución de fecha 11 de diciembre de 1957, referente al cumplimiento de la ejecutoria relativa a la revisión del amparo promovido por el Señor Augustin Rodríguez Rodríguez, respecto de las afectaciones decretadas en su contra en los poblados de Huipulco y Tepepan en Tlalpan y Xochimilco Distrito Federal.
- Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de octubre de 1954, en el que se publica el decreto expropiatorio al ejido de Huipulco, delegación Tlalpan, para la ampliación de la calzada de este último nombre de fecha 18 de agosto de 1954.
- Diario Oficial de la Federación de fecha 7 de noviembre de 1959, por el cual se expropia al ejido de Huipulco en Tlalpan, una superficie a

favor de la compañía AMACUZAC, S. A., para la instalación de líneas de transmisión eléctrica telegráfica y telefónica.

- Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de agosto de 1965, en el que se publica el decreto expropiatorio a favor del Departamento del Distrito Federal a fin de destinarse a la apertura de un viaducto que llegara a la calzada de Tlalpan con las carreteras de Cuernavaca, dos fracciones del ejido de Huipulco.
- Oficio número RAN-DF/2816 de fecha 14 de junio de 2004 dirigido al Comisariado Ejidal de Huipulco Delegación Tlalpan.

- A fojas 1200 a 1216, la Secretaría del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, remite copias certificadas de constancias del juicio de amparo 42/84 (auto admisorio, audiencia, sentencia, auto que declara firme la sentencia por no recurrirla) tramitado ante el entonces Juzgado de Distrito en Materia Agraria hoy Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, por virtud del cual se concede el amparo en contra del Subdirector Jurídico y de Gobierno, Subdelegado de Obras y Servicios de la Delegación Tlalpan; respecto de una privación de 8-50-00 Hectáreas, ubicadas en el predio denominado "el Trébol" conocido también como Villa Lázaro Cárdenas. *En acuerdo de fecha 3 de Agosto de 2005 se forma legajo de pruebas con dichas pruebas.*
- Foja 1346, oficio del 15 de agosto de 2005, el Director General Jurídico del Registro Agrario Nacional, rinde informe justificado y manifiesta que *són ciertos* los actos números III, IV, V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, y remite copia certificada de las resoluciones de 9 de marzo de 1938, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1938, resolución de fecha 10 de diciembre de 1947 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 1947; resolución de 15 de febrero de 1956 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 1956; resolución de fecha 20 de marzo de 1957 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo de 1957; resolución de fecha 18 de agosto de 1954 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 1954, resolución de fecha 19 de octubre de 1922 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de Noviembre de 1922; resolución de fecha 24 de marzo de 1959 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 1959; resolución de fecha 11 de agosto de 1965 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 1965; resolución de fecha 4 de enero de 1982 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 1982. Así como once actas y 5 planos.
- Foja 1354 oficio UDCA/1772/2005 suscrito por el Director General Jurídico de Coyoacán, niega los actos.
- Foja 1384, oficio del Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, niega los actos remite copia certificada del Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de abril de 1982, acta de posesión y deslinde, copia certificada de avalúo por \$715, 853,000, copia certificada de convenio, copia certificada de sentencia del juicio de amparo 954/88 dictada por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y de la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado en el recurso de revisión R.A. 482/90, avalúo de "CABIN" de fecha 13 de Octubre de 1990.
- Foja 1636 informe del Secretario de Gobierno del Distrito Federal, solicita la regularización del procedimiento a efecto de que se emplace al Secretario de Gobernación, acordándose favorable.
- Foja 1796, oficio RAN-DF/5317/2005 de fecha 20 de Octubre de 2005, el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Distrito Federal, remite resolución 36-XXIII-e, de fecha 25 de Junio de 1985, en el cual manifiesta que resulta improcedente en materia agraria la expropiación solicitada por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en virtud de que la superficie de 8-55-0.44 hectáreas señaladas para tal efecto, ha dejado de pertenecer al régimen ejidal, apareciendo en la actualidad como propiedad particular, a nombre de Alberto P. Pellandini ahora su causahabiente Villa Lázaro Cárdenas.

ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE LABORES
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA
SECRETARÍA DE CULTURA

ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE LABORES
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA
SECRETARÍA DE CULTURA

- Mediante escrito de fecha 3 de Noviembre de 2005, se exhibe carpeta básica del ejido. Creándose legajo de pruebas por acuerdo de fecha 4 de noviembre de 2005.
- Foja 1864 obra e informe justificado del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en su calidad de Presidente del Consejo de Protección Civil del Distrito Federal, en el cual niega los actos. "Secretario de Gobierno, en ausencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal; en su calidad de Presidente del Consejo de Protección Civil del Distrito Federal; en donde niega los actos reclamados, toda vez que ese H. Órgano Colegiado no ha dictado ningún acuerdo, orden o resolución, ni ejecutado o cometido acto alguno en el sentido que se indica en el escrito de demanda, manifestando no tener las atribuciones y facultades."
- A foja 1865, obra oficio del Director de lo Contencioso del Registro Agrario Nacional; por el cual remite copia certificada de los expedientes 21/908 referente a la dotación del Ejido, el 25/908 respecto a la ampliación del Ejido y el 276.2/53 correspondiente a todas expropiaciones y afectaciones al Ejido lo que conforma todas las acciones agrarias del ejido de Huipulco. Creándose legajo de pruebas por acuerdo de 25 de noviembre de 2005.
- El Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa remite a foja 2036 obra copia certificada de la sentencia dictada en el juicio de amparo 954/88 dictada por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a foja 2028 obra el escrito de demanda del amparo antes referido, y a foja 2052 obra copia certificada del recurso de revisión R.A. 842/90.
- Por acuerdo de fecha 10 de febrero de 2006, se requiere al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, remita copia certificada de todo lo actuado en el expediente de amparo 954/88.

TOMO III.- EN EL TOMO III DEL JUICIO DE AMPARO DONDE SE ACTÚA EXISTEN LOS SIGUIENTES:

- Foja 2348, informe (Secretario de Gobierno del Distrito Federal en ausencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal) del Jefe del Gobierno del Distrito Federal, se *acepta el acto reclamado, se acepta el contenido del decreto expropiatorio para ampliar Calzada de Tlalpan, de fecha 18 de Agosto de 1954*, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Octubre de 1954. *Se acepta el acto reclamado de expropiación para realizar el viaducto que comunicará Calzada de Tlalpan y las Carreteras de Cuernavaca de fecha 11 de agosto de 1965*, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 1965 *por lo que hace a su refrendo. Acepta que se rubricó el decreto que aprueban los programas delegacionales y de desarrollo urbano el cual incluye el de Tlalpan. Niega los demás actos reclamados.*
- Foja 2364 oficio del 1 de Marzo de 2006, informe del Director General Adjunto en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos, actuando en sí y en representación del Presidente de la República, Secretario de la Reforma Agraria, Subdirector de asuntos Agrarios cuya denominación correcta es Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, del Director General de Procedimientos Agrarios cuya denominación correcta es Director General de Ordenamiento y Regularización, del Director General de Planeación Agraria, cuya denominación correcta es Director General de Política y Planeación Agraria) Presidente de la República, Secretario de la Reforma Agraria, Subsecretario de Asuntos Agrarios, Director General de Procedimientos Agrarios, Dirección General de Planeación Agraria, Jefe de Oficina de la Pequeña Propiedad Agrícola, Jefe de Oficina de Registro de Titulación de la Secretaría de la Reforma Agraria y Director General de Asuntos Jurídicos manifiestan: *Es cierto el acto del Presidente de la República, que a través de la Oficina de la Pequeña Propiedad, pronunció los dictámenes de fechas 21 de Noviembre de 1939 y 12 de Junio de 1940, en el expediente agrario OPPA/200 (23) 6, respecto de las quejas de los propietarios afectados derivada de la ampliación del Ejido de Huipulco, las resoluciones presidenciales de fechas 10 de Diciembre de 1947, 15 de*

Febrero de 1956, 20 de marzo de 1957, 11 de diciembre de 1957, así como los decretos de fechas 18 de Agosto de 1954, 24 de Marzo de 1959, 11 de Agosto de 1965 y 4 de Enero de 1982 son ciertas, niega los demás actos reclamados al Presidente de la República.

- Las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria niegan los actos reclamados y anexan copia certificada de:

FOJA	D.O.F.	RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
2424 n 2426	17 diciembre 1947	10 de diciembre de 1947 resolución que confirma los derechos agrarios en los poblados de Huipulco y Tepepan, Distrito Federal, declarando improcedentes las quejas formuladas ante la Oficina de la Pequeña Propiedad Agrícola
2427 n 2430	19 de marzo de 1956	15 de febrero de 1956 resolución respecto de las quejas presentadas ante la Oficina de la Pequeña Propiedad Agrícola por Aurelio Cabello y congravindos
2431 n 2433	10 de mayo de 1957	10 de marzo de 1957, resolución complementaria a la del 15 quince de febrero de 1956
2434 n 2437	6 de marzo de 1958	11 de diciembre de 1957 cumplimiento a la ejecutoria de AUGUSTO RODRIGUEZ
2438 n 2439	4 de octubre de 1954	18 de Agosto de 1954 expropiación para ampliar Ciénaga de Tlalpan.
2440 n 2449	7 de noviembre de 1959	24 de Marzo de 1959 Expropiación Hidroeléctrica Amacozac
2442 n 2443	13 de Agosto de 1965	11 de Agosto de 1965 Se expropia a favor del Distrito Federal apertura que signa Viaducto Tlalpan a Carreteras a Cuernavaca
2444 n 2447	8 de Abril de 1982	Expropiación Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra de 4 de enero de 1982.

- Remite copia certificada del pago de indemnización que realizó la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra.
- Foja 2555 oficio signado por José Jesús García Cuevas, delegado en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, por parte del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, exhibe fotografía aérea del Ejido de Huipulco, con delimitación de poligonales y nomenclatura manifestando que el Ejido de Huipulco se encuentra totalmente urbanizado (foja 2558), por lo que ofrece inspección judicial y se le desecha por extemporánea.
- Promoción de fecha 8 de Mayo de 2006, la quejosa exhibe minuta sellada en original al Registro Agrario Nacional, para que expida copia certificada de diversas actas de asamblea, por acuerdo de 23 de mayo de 2006 el Juez de Distrito requiere al Registro Agrario Nacional para que remita los documentos solicitados (el Registro Agrario Nacional los remite el 18 de Julio de 2006 y por acuerdo de fecha 20 de Julio de 2006 se crea legajo de pruebas)
- Foja 2619, José Jesús García Cuevas, Delegado en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo por parte del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ofrece como pruebas: copia certificada de:
- *Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de Diciembre de 1951* (resolución de permuta del club de golf foja 2621 a 2622).
 - *Del acta de posesión y deslinde del Club de Golf foja 2623 a 2626, Plano de Permuta de Poblado de Huipulco con el Club de Golf foja 2627.*
- Foja 2696 el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ofrece como prueba copia certificada de la resolución de fecha 1 de Octubre de 2003, (de la carátula, fojas 2 y 9) dictado en el expediente agrario 123/TUA24/2000 referente a una Jurisdicción Voluntaria promovida por el Ejido Huipulco.

- Foja 2775, el Delegado del Registro Agrario Nacional remite copia certificada del Registro General de Ejidatarios en donde constan 214 ejidatarios en el ejido de Huipulco.
- Foja 2791, el Tribunal Unitario Agrario remite Original del expediente agrario 125/TUA24/2000 referente a una Jurisdicción Voluntaria promovida por el Ejido Huipulco se forma legajo de pruebas por acuerdo de fecha 7 de Agosto de 2006.
- Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ofrece copia certificada de memorándum de fecha 11 de septiembre de 1965, referente a expropiación de la Carretera a Cuernavaca, en los términos siguientes:

- (Documental Pública consistente en copia certificada del Memorándum de fecha 11 de septiembre de 1965, firmado por el Ingeniero Eugenio Geretti Pérez, Director General de Tierras y Aguas, dirigido al Consejero por el Distrito Federal; el oficio de fecha 17 de enero de 1967 firmado por el Licenciado Eugenio Geretti Pérez, Director General de Tierras y Aguas, dirigido al Jefe del Departamento del Distrito Federal; el oficio de fecha 16 de enero de 1962 firmado por el Ingeniero Eugenio Geretti Pérez Director General de Tierras y Aguas, dirigido al Banco Nacional de Crédito Ejidal, cuyos originales obran en el expediente 272.2/53 (legajo 15), mismo que se encuentra en el Archivo General Agrario, el cual corresponde a la expropiación de tierras ejidales del Poblado Huipulco, Delegación Tlalpam, Distrito Federal)

- Foja 2868, Juan Ríos Hernández ofrece copia certificada de la escritura 22,515 de fecha 25 de Julio de 1978, tirada ante la fe del notario 154 del Distrito Federal, Otón Pérez Correa, inscrita en el Registro Público de la Propiedad el 10 de Octubre de 1978, sección Primera "a", tomo 228, fojas 201 y siguientes la cual obra a fojas 2869 a 2910, así como de la Sentencia que obra en el expediente 145/75, del Juzgado Vigésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, correspondiente al Juicio Ordinario Civil promovido por Toriz Rojas Saturnino, en contra de Colonia Villa Lázaro Cárdenas, S. C. y el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
- Foja 2958 el Ejido quejoso en promoción de fecha 9 de Octubre de 2006, exhibe copia simple de escritura número 16,767, Volumen 147, tirada ante la fe de Notario Público número 94, el Licenciado Higinio Guerra y Guerra, de fecha veinte de enero de mil novecientos ochenta y tres, para desvirtuar lo manifestado por Juan Ríos Hernández.

TOMO IV.- EN EL TOMO IV DEL JUICIO DE AMPARO DONDE SE ACTÚA EXISTEN LOS SIGUIENTES:

- Mediante oficio 4248 de fecha 30 de Noviembre de 2006, el C. Juez Vigésimo Séptimo de lo Civil en el Distrito Federal, remite en original el expediente 145/75, creándose mediante acuerdo de fecha de 7 diciembre de 2006 legajo de pruebas, con lo siguiente:
 - Tomo I, 508 fojas cuaderno principal.
 - Tomo II 95 fojas
 - Sección de ejecución con 169 fojas.
 - Cuaderno de amparo 365/76, 698 fojas.
 - Cuaderno de amparo 365/76 365 fojas.
 - Amparo 568/77, 91 fojas.
 - Amparo 246/78, 90 fojas.
 - Amparo 1100/79 con 101 fojas.
 - Amparo 43/99 con 24 fojas.

- Mediante acuerdo de fecha 19 diciembre de 2006 se requirió al Archivo General de Notarías para que exhibiera copia certificada de los folios reales 9024148 y 9024149, respectivamente; así mismo, que los lotes uno, tres y diecisiete, pasaban a folios reales números 9024150, 9024152, 9024155, respectivamente; (los cuales obran agregados en autos a fojas 904 y 906; y a fojas 1010 a 1014 exhibidas por la quejosa en copia simple)
- Por acuerdo de fecha 11 de mayo de 2007 se requirieron dichos documentos al Registro Público de la Propiedad
- Foja 3834 oficio 12888 de fecha 11 de mayo de 2007, el Director Jurídico del Registro Público de la Propiedad rinde informe justificado y dice que los actos III, IV, V, VI, son ciertos "...Por lo anterior, comunico a su Señoría que los actos reclamados SON CIERTOS en virtud de que de la lectura realizada al folio real número 341679 que ampara al Ejido Huipulco, en la Colonia Huipulco, Delegación Tlalpan, se desprende la inscripción de los decretos expropiatorios señalados en los numerales III, IV y V asimismo en el folio real número 684079 el cual ampara terrenos pertenecientes al Ejido de Huipulco en la Colonia Huipulco, Delegación Tlalpan, se desprende la inscripción del Decreto Expropiatorio señalado en el numeral VI..." y dice que los actos marcados con los números II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, no son ciertos. Remite folio 684079 referente a terrenos pertenecientes al ejido Huipulco con una superficie de 69-65-44.11 hectáreas de la cual se desprende lo siguiente:
 - Con fecha 23 de mayo de 1997 la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, solicita lotificación del lote 07 manzana 6810, zona 73, poblado Huipulco, folio real 1080123.
 - Con fecha 7 de noviembre de 2003 se inscribe lotificación del lote 10, manzana 7299 de la zona 373 folio 1208016.
 - Con fecha 17 de septiembre de 1998 se inscribe lotificación del lote 52, manzana 658, zona 73 folio 1130617.
- Otro folio real número 341679 con una superficie de: 1) 60,060; 2) 20,232.00; 3) 91,635; 4) 4,056; 5) 32,361; 6) 5,050; 7) 316.10; 8) 8,911; 9) 128,736.75; 10) 94,860; 11) 39,130; con las inscripciones siguientes:
 - 19 de octubre de 1922 (dotación del ejido Huipulco).
 - 18 de agosto de 1954 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 1954, expropiación a favor de la delegación Tlalpan por una superficie de 0-33-31 hectáreas
 - Resolución de 15 de febrero de 1956 publicado en Diario Oficial de la Federación el primero de marzo se excluyó una superficie de 48-47-81 hectáreas de la ampliación en cumplimiento a la ejecutaria 80/941.
 - Por decreto del 24 de marzo de 1959 publicado el 7 de noviembre de 1959 se expropia al ejido para la hidroeléctrica Amacuzac una superficie de 00-97-73 hectáreas.
 - Resolución de 2 de Agosto de 1960 publicada en el Diario Oficial de la Federación publicada el 31 de Agosto de 1960, permuta.
 - Por decreto de 11 de Agosto de 1965 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de Agosto de 1965, se expropia a favor del departamento del Distrito Federal una superficie de 5-69-00 hectáreas.
 - Resolución presidencial de 20 de Marzo de 1957 publicada en el Diario Oficial de la Federación, por el que se ratifica la Resolución Presidencial de 15 de Febrero de 1956.
 - Por Decreto Presidencial de 4 de Enero de 1982, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de Abril de 1982, se expropia a favor de Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra.

- Con fecha 10 de Septiembre del 1996 a petición de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra se inscribe lotificación complementaria del lote 7, manzana 678, zona 73, folio 106.

TOMO V.- EN EL TOMO V DEL JUICIO DE AMPARO DONDE SE ACTÚA EXISTEN LOS SIGUIENTES:

- Foja 5165, oficio SMA/CJ/SP/291/2008, suscrito por el Secretario del Medio Ambiente del Distrito Federal, por el que niega los actos de la ampliación de la demanda.
- Foja 5167 oficio DGJG/0826/2008, suscrito por el Director General Jurídico y de Gobierno de la Delegación Coyoacán, niega los actos de la ampliación de la demanda. **QUE OTRAS AUTORIDADES REPRESENTA O SUBSTITUYE**
- Fojas 5198 a 5201, informe justificado rendido por el Delegado Agrario en el Distrito Federal, oficio de fecha 12 de Julio de 2005 y de 8 de abril de 2008, en el que reitera su informe justificado, *de que se trata de actos consentidos plenamente*, asimismo señala como nueva autoridad responsable a la Comisión Para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), y que manifiesta que son ciertos los actos reclamados al Coordinador Agrario en el Distrito Federal.
- Foja 5212, oficio de 8 de Abril de 2008, número CJS/DGRPPC/DJ/SCA/2096/08, signado por el Director Jurídico del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, por el que manifiesta que se encuentra impedido para rendir su informe justificado en virtud de que no se desprende antecedente registral.
- Foja 5232, Director de Construcción de Obras de Infraestructura Vial dependiente de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, en su denominación correcta y que substituyó a la Dirección de Obras de Infraestructura del Gobierno del Distrito Federal niega los actos de la ampliación de la demanda.
- Foja 5236 a 5241 oficio AYC/602/2008, suscrito por el Director General Jurídico de Gobierno de la Delegación Tlalpan, rinde informe justificado por el Jefe Delegacional de Tlalpan, Director General de Desarrollo Social, Director General de Administración por el que niega los actos de la ampliación de la demanda, y manifiesta que **ES CIERTO** el oficio C21-UDAI-432 99 de fecha 7 de mayo de 1999, por el cual se les remite el acta de entrega recepción del Deportivo San Nicolás Tolentino se ha realizado la búsqueda sin encontrar antecedente alguno.
- Mediante escrito de 2 de septiembre de 2008, el quejoso manifestó en lo conducente dice lo siguiente por lo que hace a la inexistencia que argumentan las autoridades responsables del Jefe de la Unidad Departamental Padrón Inmobiliario y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, Jefatura Delegación en Tlalpan, y Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, es de manifestarse que a fojas 4962 a 5620 de los autos, aparece una relación de inmuebles en los que se ubican los servicios públicos de los cuales se desprenden la existencia de la Unidad Departamental Padrón Inmobiliario y Vivienda con las siglas U.D. PADRON INMOBILIARIO Y VIVIENDA, y a fojas 4983 de autos en el oficio número C21-UDAI-432.99, de fecha 7 de mayo de 1999, firma el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales en Tlalpan, el entonces Lic. RAFAEL BARBERENA HURTADO, por consiguiente la supuesta inexistencia que argumentan las autoridades responsables se ve desvirtuada con las documentos públicos que obran en autos, por lo tanto al no haber rendido sus informes justificados, lo procedente es tenerlos como presuntivamente ciertos para los efectos legales conducentes.
- Foja 5250, oficio del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, Director General de Desarrollo Urbano, Director General de Administración Urbana, así como el Director del Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano niega los actos de la ampliación de la demanda.
- Foja 5256, oficio 9534T la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal, niega los actos de la ampliación de la demanda.

- Foja 5293 oficio del Director jurídico del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, reconoce como cierto el acto reclamado; consistente en la inscripción a favor del Gobierno del Distrito Federal en el folio real 1155292, remite el folio antes mencionado, en el que se encuentra que con fecha 11 de junio de 1999 se inscribe el decreto de desincorporación de fecha 14 de mayo de 1980 (respecto del predio de tesorería y licencias)
- Foja 5307 oficio SF/PEDF/SC/SA/5197, suscrito por el Tesorero del Gobierno del Distrito Federal, niega los actos de la ampliación de la demanda.
- Foja 5309, oficio suscrito por la Subdirectora de Apoyo Jurídico de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, niega los actos reclamados y acepta haber estado presente en la entrega recepción de fecha 31 de julio de 1998, referente a la recepción por el que SERVIMET y el Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal entrega al entonces Departamento del Distrito Federal el inmueble denominado centro de barrio Huipulco donde se instalaron las oficinas de tesorería y licencias.
- Foja 5423 oficio 1.0/0046/2008, suscrito por el Director General de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, niega los actos de la ampliación de la demanda.
- Foja 5470, oficio de la Directora de Administración Inmobiliaria de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, niega los actos de la ampliación de la demanda, en virtud de que estos son ajenos al ámbito de competencia de esta autoridad señalada como responsable; manifestando al efecto lo siguiente:

- "...No obstante lo anterior se declara que la intervención que esta autoridad tuvo únicamente consistió asistir a la diligencia administrativa de la ENTREGA-RECEPCIÓN el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y ocho, respecto del inmueble denominado "Centro Barrio Huipulco" ubicado en la calle San Juan Bosco, s/n, esquina San Lorenzo Colonia Huipulco", Delegación Tlalpan, en esta Ciudad Capital.

- "...Igualmente el treinta de mayo de dos mil cinco asistió a la ENTREGA-RECEPCIÓN del mismo inmueble, a través de la cual la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario dependiente de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, efectuó la preservación y salvaguarda del inmueble multicitado...". Se refiere al acta administrativa de entrega recepción física del inmueble denominado "Deportivo San Nicolás Tolentino" del que el ejido quejoso exhibió copias fotostáticas simples en su escrito de ampliación de demanda por lo que de conformidad con los artículos 2, 212 al 234 de la Ley de Amparo en relación con los artículos 81, 82, 86, 88, 95, 96, 188, 190 fracción II, 191, 199, 200, 207 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con la Ley Sustantiva de la Materia, ya que la exhibición de las copias simples hace presumir la existencia de sus originales y confesado por la autoridad responsables, hace prueba plena, aunado a que los mismos obran en los autos del Juez A Quo se considera actuaciones judiciales que pueden ser invocadas de oficio por el Juzgador, por lo tanto, si se concatena una con otra se llega a la certeza de que lo que contiene la copia fotostática exhibida por el impetrante de garantías es cierto.

- Foja 5477 oficio del Subdirector de Inspección Inmobiliaria de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario niega los actos de la ampliación de la demanda, en que se manifestó lo siguiente:

- "No son ciertos los actos que se reclaman en virtud de que éstos son ajenos al ámbito de competencia de esta autoridad señalada como responsable, sin embargo se aclara que la única intervención que tuvo la autoridad a la que represento en el presente asunto, fue asistir a la diligencia Administrativa

de ENTREGA-RECEPCIÓN del inmueble ubicado en calle Juan Bosco, calle San Lorenzo y Cerrada de San Lorenzo, Colonia Huipulco, Delegación Tlalpan, en esta Ciudad del treinta de mayo de dos mil cinco en la que la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario dependiente de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, realizó la entrega física del inmueble antes referido a la Delegación Tlalpan, para su custodia, preservación y a efecto de salvaguardar el inmueble multicitado, actos que en la actualidad revisten el carácter de actos consumados...". Se refiere al acta administrativa de entrega recepción física del inmueble denominado "Deportivo San Nicolás Tolentino" del que el ejido quejoso exhibió copias fotostáticas simples en su escrito de ampliación de demanda por lo que de conformidad con los artículos 2, 212 al 234 de la Ley de Amparo en relación con los artículos 81, 82, 86, 88, 95, 96, 188, 190 fracción II, 191, 199, 200, 207 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con la Ley Sustantiva de la Materia, ya que la exhibición de las copias simples hace presumir la existencia de sus originales y confesado por la autoridad responsables, hace prueba plena, aunado a que los mismos obran en los autos del Juez A Quo se considera actuaciones judiciales que pueden ser invocadas de oficio por el Juzgador, por lo tanto, si se concatena una con otra se llega a la certeza de que lo que contiene la copia fotostática exhibida por el impletrante de garantías es cierto.

- De igual forma se intervino en la realización del levantamiento topográfico clave CT058-C2/2005 del cuatro de mayo de dos mil cinco, mismo que fue realizado por el entonces Subdirector de Inspección e Investigación Inmobiliaria, respecto del inmueble denominado "Deportivo San Nicolás Tolentino" Ubicado en calle Ex hacienda de San Nicolás, Colonia y Ejidos de Huipulco, Colonia Prados Coapa, Delegación Tlalpan en esta Ciudad, el cual no constituye un acto impugnado en el presente juicio...". Se refiere al acta administrativa de entrega recepción física del inmueble denominado "Deportivo San Nicolás Tolentino" del que el ejido quejoso exhibió copias fotostáticas simples en su escrito de ampliación de demanda por lo que de conformidad con los artículos 2, 212 al 234 de la Ley de Amparo en relación con los artículos 81, 82, 86, 88, 95, 96, 188, 190 fracción II, 191, 199, 200, 207 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con la Ley Sustantiva de la Materia, ya que la exhibición de las copias simples hace presumir la existencia de sus originales y confesado por la autoridad responsables, hace prueba plena, aunado a que los mismos obran en los autos del Juez A Quo se considera actuaciones judiciales que pueden ser invocadas de oficio por el Juzgador, por lo tanto, si se concatena una con otra se llega a la certeza de que lo que contiene la copia fotostática exhibida por el impletrante de garantías es cierto.
- Foja 5485 oficio del Jefe de la Unidad Departamental de Análisis, Proyectos Inmobiliarios de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, niega los actos de la ampliación de la demanda.
 - "...No son ciertos los actos que se reclaman, en virtud de que estos son ajenos al ámbito de competencia de esta autoridad señalada como responsable....
 - No obstante lo anterior se aclara que la única intervención que tuve en el presente asunto, fue la de asistir a la diligencia Administrativa de la ENTREGA-RECEPCIÓN del treinta de mayo de dos mil cinco, con respecto del inmueble denominado "Centro Barrio Huipulco" ubicado en la calle San Juan Bosco, S/N, esquina San Lorenzo Colonia Huipulco", Delegación Tlalpan, en esta Ciudad Capital actos que en la actualidad revisten el

carácter de actos consumados...". Se refiere al acta administrativa de entrega recepción física del inmueble denominado "Deportivo San Nicolás Tolentino" del que el ejido quejoso exhibió copias fotostáticas simples en su escrito de ampliación de demanda por lo que de conformidad con los artículos 2, 212 al 234 de la Ley de Amparo en relación con los artículos 81, 82, 86, 88, 95, 96, 188, 190 fracción II, 191, 199, 200, 207 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con la Ley Sustantiva de la Materia, ya que la exhibición de las copias simples hace presumir la existencia de sus originales y confesado por la autoridad responsables, hace prueba plena, aunado a que los mismos obran en los autos del Juez A Quo se considera actuaciones judiciales que pueden ser invocadas de oficio por el Juzgador, por lo tanto, si se concatena una con otra se llega a la certeza de que lo que contiene la copia fotostática exhibida por el imputante de garantías es cierto.

- Foja 5492, oficio del Director de Inventario Inmobiliario y Sistemas de Información de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario niega los actos de la ampliación de la demanda.

- "...Esta autoridad NIEGA los actos reclamados que se imputan sobre el inmueble ubicado en la calle de Juan Bosco, Calle San Lorenzo y Cerrada de San Lorenzo, Colonia Huipulco, Delegación Tlalpan...", pero no manifiesta nada respecto de los demás actos reclamados.

- Fojas 5494 oficio del Subdirector de Análisis Investigación e Integración del Inventario Inmobiliario de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, niega los actos de la ampliación de la demanda.

- "...Esta autoridad NIEGA los actos reclamados que se imputan sobre el inmueble ubicado en la calle de Juan Bosco, Calle San Lorenzo y Cerrada de San Lorenzo, Colonia Huipulco, Delegación Tlalpan...". Sin manifestar nada sobre los demás actos reclamados.

- Foja 5496, suscrito por Ángel Ávila Pérez, quien es Secretario de Gobierno del Distrito Federal, por ausencia del Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por virtud del cual informa lo siguiente:

- "...ACEPTO que el entonces Jefe del Departamento del Distrito Federal, actualmente Jefe de Gobierno del Distrito Federal, rubrica el Decreto por el que se desincorpora del dominio Público del Departamento del Distrito Federal con 165 predios ubicados en las zonas que se indican y se autoriza al mismo Departamento, para venderlos fuera de subasta pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 1980..."
- NIEGO LOS DEMAS ACTOS QUE SE ME RECLAMAN, toda vez que a excepción de lo que se ha dejado dispuesto, no he dictado ningún acuerdo, orden o resolución, ni ejecutado u omitido acto alguno en el sentido que se indica en la demanda de garantías..."

- Foja 5506, oficio OM/1299/2008, suscrito por el Oficial Mayor del Distrito Federal, *reconoce como cierto el acto* que se reclama con los números I, II, VIII, IX, X, XI, XII, XV, exhibe copia simple del acta administrativa de entrega y recepción del Deportivo San Nicolás Tolentino, ubicado en la Colonia Prados Coapa y Ejidos Huipulco, derivado del acuerdo emitido por el Comité del Patrimonio Inmobiliario.

- *Que es cierto el acto* que se reclama ya que efectivamente se celebró un acta administrativa de ENTREGA-RECEPCIÓN de fecha 30 de Julio de 1998

respecto del inmueble denominado "Centro de Barrio Huipulco" ubicado en calle San Juan Bosco, s/n, esquina San Lorenzo Colonia Huipulco, Delegación Tlalpan, en esta Ciudad Capital...". Se refiere al acta administrativa de entrega recepción física del inmueble denominado "Deportivo San Nicolás Tolentino" del que el ejido quejoso exhibió copias fotostáticas simples en su escrito de ampliación de demanda por lo que de conformidad con los artículos 2, 212 al 234 de la Ley de Amparo en relación con los artículos 81, 82, 86, 88, 95, 96, 188, 190 fracción II, 191, 199, 200, 207 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con la Ley Sustantiva de la Materia, ya que la exhibición de las copias simples hace presumir la existencia de sus originales y confesado por la autoridad responsables, hace prueba plena, aunado a que los mismos obran en los autos del Juez A Quo se considera actuaciones judiciales que pueden ser invocadas de oficio por el Juzgador, por lo tanto, si se concatena una con otra se llega a la certeza de que lo que contiene la copia fotostática exhibida por el imponente de garantías es cierto.

- Que es cierto acto consistente en la sesión ordinaria 66/97 del 23 de Octubre de 1997, se determinó por el Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, en ejercicio de sus atribuciones y facultades, en el ordenamiento de los artículos 14 y 15 de la Ley del Régimen Patrimonial y Servicio Público, concluyendo que el predio en comento se destinó en arrendamiento por ser un inmueble propiedad del Departamento del Distrito Federal, a favor de Servicios Metropolitanos S. A. de C. V., para construir, operar y administrar los centros de barrio y de servicios. Se refiere al acta administrativa de entrega recepción física del inmueble denominado "Deportivo San Nicolás Tolentino" del que el ejido quejoso exhibió copias fotostáticas simples en su escrito de ampliación de demanda por lo que de conformidad con los artículos 2, 212 al 234 de la Ley de Amparo en relación con los artículos 81, 82, 86, 88, 95, 96, 188, 190 fracción II, 191, 199, 200, 207 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con la Ley Sustantiva de la Materia, ya que la exhibición de las copias simples hace presumir la existencia de sus originales y confesado por la autoridad responsables, hace prueba plena, aunado a que los mismos obran en los autos del Juez A Quo se considera actuaciones judiciales que pueden ser invocadas de oficio por el Juzgador, por lo tanto, si se concatena una con otra se llega a la certeza de que lo que contiene la copia fotostática exhibida por el imponente de garantías es cierto.

- Que es cierto el acto por lo que respecta a la ENTREGA-RECEPCIÓN del inmueble ubicado en calle San Juan Bosco, calle San Lorenzo y Cerrada de San Lorenzo, Colonia Huipulco, Delegación Tlalpan, en esta ciudad, de 30 de Mayo de 2005 en la cual el Director General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, asignó el inmueble antes referido a la Delegación Tlalpan surtiendo en ese momento la obligación de dicha Delegación en relación al multicitado predio, la custodia, preservación y salvaguarda del mismo. Se refiere al acta administrativa de entrega recepción física del inmueble denominado "Deportivo San Nicolás Tolentino" del que el ejido quejoso exhibió copias fotostáticas simples en su escrito de ampliación de demanda por lo que de conformidad con los artículos 2, 212 al 234 de la Ley de Amparo en relación con los artículos 81, 82, 86, 88, 95, 96, 188, 190 fracción II, 191, 199, 200, 207 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con la Ley Sustantiva de la Materia, ya que la exhibición de las copias simples hace presumir la existencia de sus originales y confesado por la autoridad responsables, hace prueba plena, aunado a que los mismos obran en los autos del Juez A Quo se considera actuaciones judiciales que pueden ser invocadas de oficio por el Juzgador, por lo tanto, si se concatena una con otra se llega a la certeza de que lo que contiene la copia fotostática exhibida por el imponente de garantías es cierto.

ser invocadas de oficio por el Juezador, por lo tanto, si se concatena una con otra se llega a la certeza de que lo que contiene la copia fotostática exhibida por el imputante de garantías es cierto.

- Que es cierto el acto consistente en la Celebración de la Novena Sesión Ordinaria 9/2005 de fecha 12 de Mayo de 2005, en la que se acordó "El Comité del Patrimonio Inmobiliario con fundamento en los artículos 14 y 15 de la Ley del Régimen Patrimonial del Servicio Público dictamina procedente la asignación del inmueble antes citado y sigue siendo utilizado como deportivo, biblioteca y casa de salud en beneficio de la comunidad, para su uso, administración y aprovechamiento". Se refiere al acta administrativa de entrega recepción física del inmueble denominado "Deportivo San Nicolás Tolentino" del que el ejido quejoso exhibió copias fotostáticas simples en su escrito de ampliación de demanda por lo que de conformidad con los artículos 2, 212 al 234 de la Ley de Amparo en relación con los artículos 81, 82, 86, 88, 95, 96, 188, 190 fracción II, 191, 199, 200, 207 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con la Ley Sustantiva de la Materia, ya que la exhibición de las copias simples hace presumir la existencia de sus originales y confesado por la autoridad responsables, hace prueba plena, aunado a que los mismos obran en los autos del Juez A Quo se considera actuaciones judiciales que pueden ser invocadas de oficio por el Juezador, por lo tanto, si se concatena una con otra se llega a la certeza de que lo que contiene la copia fotostática exhibida por el imputante de garantías es cierto.
- Que de igual forma el 30 de mayo de 2005 la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal realizó la entrega física del inmueble antes referido a la Delegación Tlalpan para la custodia, preservación, salvaguarda del inmueble multicitado. Se refiere al acta administrativa de entrega recepción física del inmueble denominado "Deportivo San Nicolás Tolentino" del que el ejido quejoso exhibió copias fotostáticas simples en su escrito de ampliación de demanda por lo que de conformidad con los artículos 2, 212 al 234 de la Ley de Amparo en relación con los artículos 81, 82, 86, 88, 95, 96, 188, 190 fracción II, 191, 199, 200, 207 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con la Ley Sustantiva de la Materia, ya que la exhibición de las copias simples hace presumir la existencia de sus originales y confesado por la autoridad responsables, hace prueba plena, aunado a que los mismos obran en los autos del Juez A Quo se considera actuaciones judiciales que pueden ser invocadas de oficio por el Juezador, por lo tanto, si se concatena una con otra se llega a la certeza de que lo que contiene la copia fotostática exhibida por el imputante de garantías es cierto.
- Foja 5510 oficio del Director General de Patrimonio Inmobiliario, rinde informe justificado, reconoce como ciertos los actos I, III, VIII, IX, X, XI, XII y XV, y remite copia certificada de acta de entrega recepción.
- Foja 5595 obra copia certificada del Registro General de Ejidatarios de Huipulco, actualizado el 6 de Febrero de 2008, lo exhibe el Tercero Perjudicado Pedro Olvera.
- Mediante proveído de fecha 3 de Septiembre de 2008, el Juez de Distrito, provee respecto de la pericial ofrecida en el escrito de ampliación de demanda.
- Foja 7228, apoderado de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., niega los actos de la ampliación de la demanda.
- Foja 7301, oficio REF: V.105/A/A/433205/2009, mediante el cual rinde su informe justificado el Director General Adjunto en la Jefatura de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria, por el Presidente de la República, *reconoce como ciertos los actos reclamados*, remite copia certificada de la resolución de fecha 7 de

Marzo de 1980, que contiene el Decreto por el que se Desincorpora del Dominio Público del Gobierno del Distrito Federal 165 inmuebles. Por lo tanto, la copia fotostática que exhibió el Ejido quejoso con su ampliación de demanda se perfecciona de conformidad con los artículos 2, 212 al 234 de la Ley de Amparo en relación con los artículos 81, 82, 86, 88, 95, 96, 188, 190 fracción II, 191, 199, 200, 207 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con la Ley Sustantiva de la Materia, ya que la exhibición de las copias simples hace presumir la existencia de sus originales y confesado por la autoridad responsables, hace prueba plena, aunado a que los mismos obran en los autos del Juez A Quo se considera actuaciones judiciales que pueden ser invocadas de oficio por el Juzgador, por lo tanto, si se concatena una con otra se llega a la certeza de que lo que contiene la copia fotostática exhibida por el impetrante de garantías es cierto.

- "...Es cierto que el C. Presidente de la República en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73 fracción VI base 1ª de la propia constitución... emitió el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de Marzo de 1980, mediante el cual se desincorporaron del dominio público del entonces Departamento del Distrito Federal, 165 predios, ubicados en diversas zonas y se autorizó al mismo Departamento para venderlos fuera de subasta pública...."
- Foja 7351, incidente de violación a la suspensión.
- Foja 7483, obra el dictamen pericial del Ingeniero Francisco Sánchez Huerta.
- Foja 7538, se ofrece como prueba por parte de la quejosa el expediente administrativo 26/3966, referente al pago de predios e indemnizaciones, el cual le fue solicitado al Director General de la Unidad Técnico Operativo de la Secretaría de la Reforma Agraria.
- Foja 7963, el Director General Técnico Operativo, remite copia certificada de los expedientes 36-II, 36-III, 36-III BIS, 36-III y 26/3966, mediante acuerdo de fecha 28 de abril de 2009, se formó legajo de pruebas.
- Foja 8012, el Director General Técnico Operativo de la Secretaría de la Reforma Agraria, remite ejecutoria del juicio de amparo 760/2006 y opinión solicitadas en 250 fojas por acuerdo de fecha 11 de mayo de 2009, se crea legajo de pruebas. Este expediente de amparo en su totalidad fue ofrecido por el Ejido quejoso y por acuerdo de fecha el 10 de junio de 2010 se admitió por el Juez A Quo ordenando tenerlo a la vista al momento de dictarse la sentencia que en derecho correspondiera, por ser un hecho notorio para el Juzgador por haberse tramitado ante el mismo Juez de Distrito, sin que el Juez Cuarto Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región lo haya tenido a la vista, como se desprende de autos.
- Foja 8015 rinde su dictamen pericial la Arquitecta Ivonne Guadalupe Macías Bifano.
- Mediante acuerdo de fecha 5 de Noviembre de 2005, se proveyó respecto de oficio signado por la Directora de lo Contencioso por Ausencia del Director en Jefe y Director General de Asuntos Jurídicos, todos del Registro Agrario Nacional, en el que exhibe Archivo Vectorial que contiene información correspondiente a los límites del Ejido Huipalco, correspondiente al Catastro Rural Histórico de mil novecientos ochenta y dos a mil novecientos ochenta y ocho.
- Mediante promoción de fecha 7 de Junio de 2010 presentada el día 8 del mismo mes y año en la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, se ofreció como prueba copia certificada del oficio NO, IV-95, suscrito por el C. Secretario de Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el Toca Q.A. 35/2009, por virtud del cual informa a este H. Juzgado que en el diverso Juicio de Amparo 760/2006, había interpuesto recurso de queja y al efecto remite copia del

oficio REF.: V.105/A/D/437440/2009, firmado por el Director General Técnico Operativo de la Secretaría de la Reforma Agraria, y se solicito se tuviera a la vista el expediente 760/2006 del índice del propio Juez A Quo al momento de dictarse la sentencia que en derecho correspondiera. El oficio en mención señala:

- "...En efecto, primeramente cabe advertir que la propiedad de las tierras concedidas a los poblados mediante las acciones agrarias (dotación, ampliación, creación de nuevos centros de población ejidal) por ellos ejercitadas, se inicia a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de la Resolución Presidencial respectiva, acorde a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Federal de la Reforma Agraria y su correlativo en el Código Agrario vigente en 1938 (año en que se emitió el fallo presidencial que nos ocupa), por lo que en la especie, desde el 18 de marzo de 1938, el poblado denominado "Huipulco", Delegación Tlalpan, Distrito Federal debe considerarse como propietario de la superficie de 133-16-57 hectáreas, mismas que deberían entregársele dentro de las posibilidades materiales existentes.
- Ahora bien, de una revisión efectuada a los antecedentes que obran en el expediente de ampliación de ejidos del poblado "Huipulco", Delegación Tlalpan, Distrito Federal, se advierte que la citada acción agraria culminó con la emisión de la Resolución Presidencial de fecha 9 de marzo de 1938 (D.O.F. de 18 del mismo mes y año), que concedió una superficie de 133-1657 hectáreas a dicho poblado, resolución presidencial que se ejecutó el 20 de junio de 1938, de conformidad con el acta de posesión de esa misma fecha, practicándose el deslinde correspondiente el 25 de agosto del mismo año, motivo por el cual tiene el carácter de definitiva, y no ha sido declarada insubsistente, ni es posible instaurar por segunda ocasión el procedimiento de dicha acción agraria.
- Esto porque si bien es cierto en cumplimiento a diversos juicios de garantías, se realizaron devoluciones de terrenos a los propietarios afectados, también lo es que dichas devoluciones no comprendieron la totalidad de la superficie dotada, esto es, existe el ejido debidamente constituido con motivo de la ejecución de la Resolución Presidencial de ampliación de ejidos, porque además de que el fallo presidencial de referencia nunca fue dejado sin efectos legales..."

Este expediente de amparo en su totalidad fue ofrecido por el Ejido quejoso y por acuerdo de fecha 10 de junio de 2010 se admitió por el Juez A Quo ordenando tenerlo a la vista al momento de dictarse la sentencia que en derecho correspondiera, por ser un hecho notorio para el Juzgador por haberse tramitado ante el mismo Juez de Distrito, sin que el Juez Cuarto Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región lo haya tenido a la vista, como se desprende de autos.

- Como se desprende de la solicitud hecha por el quejoso y que quedó precisada con antelación, el Juez A Quo acordó el 10 de junio de 2010, que se tuvieran a la vista a la vista los expedientes que señala el impetrante de garantías al momento de dictarse la sentencia que en derecho correspondiera, y toda vez que en el expediente de amparo 760/2006 promovido por el comunero Ejidal del Ejido de Huipulco, Delegación de Tlalpan, Distrito Federal, resuelto por el mismo Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal obran una serie de pruebas con las que se demostraron los actos reclamados para la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal al ejido quejoso en ese juicio y que sirven de base para demostrar los actos reclamados en el presente juicio de amparo; situación que el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, con jurisdicción en toda la República, no tomo en

consideración al momento de dictar la sentencia definitiva de fecha 19 de agosto de 2010, materia de esta revisión, lo anterior consta en los autos del Juez de Distrito en que se actúa, y por tratarse de constancias de autos hacen prueba plena, aunado a que son hechos notorios para el Juzgador de Amparo de conformidad con los artículos 88, 129, 130, 202, 212, 215 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Amparo, por lo que los mismos deberán ser tomados en consideración por este Tribunal de Alzada, para ordenar la reposición del procedimiento en términos del artículo 91 fracción IV de la Ley de Amparo, al existir una violación grave a las reglas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo y que influyen en el dictado de la sentencia que dejó en total estado de indefensión al Ejido de Huipulco.

Páginas 178 y 179 del escrito de agravios:

En las relatadas consideraciones debe decirse que al fijar los actos reclamados el Juez A Quo dejó de tener como actos reclamados los que se precisan a continuación:

- a) La afectación que sufre el Ejido de Huipulco, Delegación de Tlalpan, Distrito Federal, con la ampliación de la avenida Acoxpa, la cual se acredita con los dictámenes periciales que obran en los autos del Juez de Distrito Instructor, donde claramente se aprecia que el ejido fue afectado en las tierras con que fue dotado y de su ampliación, pues al marcar las poligonales con las beneficiadas el imponente de garantías y que se denominaron "humeral 1", "humeral 3" y "humeral 4", se observa que los peritos los refieren hasta el camellón de la avenida Acoxpa, como se demuestra con los planos marcados por el perito oficial como anexos 1, 2, 3 y 3B, y que exista mandamiento escrito que funde y motive el acto de afectación de las tierras del ejido.
- b) El tirado de las escrituras que realizaron los notarios públicos en cumplimiento de las órdenes dictadas por las autoridades ordenadoras que quedaron demostradas en los autos del Juez Instructor.
- c) La inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal en las cuales se realizan las anotaciones de los decretos expropiatorios, del decreto de desincorporación de bienes del dominio del Distrito Federal y que se demostró pertenecer al ejido quejos.
- d) Los oficios, actas de entrega y acuerdos que se exhibieron por el imponente de garantías en copias fotostáticas en su ampliación de demanda y que se perfeccionaron con los informes rendidos por las autoridades responsables al haber aceptado su existencia y conferido haberlos realizado al estar presentes.
- e) El inmueble denominado "centro de barrio Huipulco" y que se especificó en los antecedentes de la demanda y su ampliación, afecta la tierra con que fue dotado el Ejido quejoso, de una superficie de 552.92 metros cuadrados y no de 300 metros cuadrados.
- f) La restitución o devolución y entrega física y jurídica y material de los terrenos afectados al ejido quejoso con todos sus frutos y accesorios, por los decretos de expropiación y desincorporación.

imitados por las autoridades responsables, así como de los que se hayan realizado sin orden alguno y que quedaron acreditados en autos.

g) La urbanización de las tierras con que fue beneficiado el ejido quejoso derivado del plan de desarrollo urbano de la delegación de Tlalpan, y que el propio Jefe Delegación en Tlalpan reconoce como cierto y exhibe fotografía aérea en la que se aprecia la urbanización de los terrenos de la dotación y ampliación del ejido y que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal acepta haberlo sancionado al estampar su firma y que por ende de acuerdo al criterio jurisprudencial de la Novena Época, Registro: 191452, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XII, Agosto de 2000, Materia(s): Común, Tesis: 2a/1. 65/2000, Página: 260 y que lleva como rubro el siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trata, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Contradicción de tesis 23/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 16 de junio del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Gáltrán. Secretario: José Francisco Cilia López. Tesis de jurisprudencia 65/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del dieciséis de junio del año dos mil. Por ende el plan queda demostrado plenamente.

h) Al igual que los actos reclamados del Secretario de la Reforma Agraria (foja 2364), Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural en su correcta denominación (foja 2364), Director General de Ordenamiento y Regularización en su correcta denominación (foja 2364), Director General de Política y Planeación Agraria en su correcta denominación (foja 2364), Director General de Asuntos Jurídicos (foja 2364), Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en su correcta denominación (foja 5163), Secretario de Seguridad Pública (foja 683), Secretario de Gobierno (foja 1037), Presidente del Consejo de Protección Civil del Gobierno (foja 1864), Secretario de Protección Civil en su actual y correcta denominación (foja 739 y 5256), Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (fojas 856 y 5250), Director General de Sistema de Aguas (foja 1384), Director de Construcción de Obras de Infraestructura Vial en su actual y correcta denominación (fojas 649 y 5232), Jefe Delegacional en Tlalpan (foja 667 y 5256), Director General de Obras y Desarrollo Urbano en Tlalpan en su correcta denominación (foja 667), Director de Verificación y Reglamentos en Tlalpan (foja 667), Jefe de Unidad Departamental de Licencias de Construcción en Tlalpan (foja 667), Director General de Administración en Tlalpan (foja 5256), Director General de Desarrollo Social en Tlalpan (foja 5256), Director General de Administración Urbana del Gobierno (foja 737), Director General de Obras Públicas del Gobierno (foja 658 y 5234), Director General de Desarrollo Urbano del Gobierno (fojas 497 y 5250), Director General Jurídico y de Gobierno en Coyoacán (fojas 1356 y 5167), Director de Comercialización y Administración Inmobiliaria de Servicios Metropolitanos, sociedad anónima de capital variable (foja 7228), Apoderado de Servicios Metropolitanos, sociedad anónima de capital variable (foja 7228), Director General de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno (foja 5234), Tesorero del Gobierno (foja 5307); todos ellos de la hoy Ciudad de México, Director General de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra CORETT (foja 5423), Director de Inventario Inmobiliario y Sistemas de Información de México, hizo la aclaración que el número correcto de expediente civil de origen es el 1489/1191 (foja 19023 tomo XIII). Amparo 579/2005 y acumulado 259/2015 48 la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario adscrito a la Oficialía Mayor de la hoy Ciudad de México (foja 5492) Subdirector de Análisis, Investigación e Integración del Inventario Inmobiliario de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, NO SON CIERTOS ya que así lo manifestaron al rendir sus correspondientes informes justificados, sin que se haya desvirtuado tal afirmativa.

Páginas 199 a 203 del escrito de agravios:

- *Secretario de Medio Ambiente y Recursos denominación correcta (foja 5165)*
- *Secretario de Seguridad Pública del Distrito federal (foja 683), Niega los actos por no estar dentro de sus atribuciones*
- *Secretario de Gobierno del Distrito Federal (fojas 1037),*
- *Presidente del Consejo Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal (fojas 1864)*
- *"Secretario de Gobierno, en ausencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal; en su calidad de Presidente del Consejo de Protección Civil del Distrito Federal; en donde niega los actos reclamados, toda vez que ese H. Órgano Colegiado no ha dictado ningún acuerdo, orden o resolución, ni ejecutado o cometido acto alguno en el sentido que se indica en el escrito de demanda, manifestando no tener las atribuciones y facultades."*
- *Secretario de protección Civil del Distrito Federal en su actual y correcta denominación (foja 739 y 5256),*
- *Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal (fojas 856 y 5250)*
- *Director General de Sistemas de Aguas de la Ciudad de México (foja 1384)*
- *Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, niega los actos remite copia certificada del Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de abril de 1982, acta de posesión y deslinde, copia certificada de avalúo por \$715, 853,000, copia certificada de convenio, copia certificada de sentencia del juicio 954/88 y de la sentencia R.A. 482/90, avalúo de "CABIN" de fecha 13 de Octubre de 1990.*
- *Director de Construcción de Obras de Infraestructura Vial del Gobierno del Distrito Federal en su actual y correcta denominación (fojas 649 y 5232).*
- *Foja 649 niega los actos I y II de la demanda inicial, en virtud de que no ha tenido injerencia en los mismos y estar fuera de sus atribuciones, referente a expropiación, fraccionamiento de terrenos, privación de propiedades o posesiones además de ser los mismos de materia agraria y de carácter federal.*
- *Jefe Delegacional en Tlalpan (foja 667 y 5256), Director General de Obras y Desarrollo Urbano en Tlalpan en su correcta denominación (foja 667), Director de Verificación y Reglamentos en Tlalpan (foja 667), Jefe Departamental de Licencias de Construcción en Tlalpan (foja 667), por lo que respecta al informe justificado rendido a fojas 67 y siguientes, la negativa de los*

actos reclamados por las autoridades responsables se ve desvirtuada con las constancias que obran agregadas en autos, sin que pase desapercibido que en lo referente a los Planes y Programas de Desarrollo Urbano y su ejecución, debe decirse que los mismos no están sujetos a prueba de conformidad con el criterio jurisprudencial de la Novena Época, Registro: 191452, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XII, Agosto de 2000, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 65/2000, Página: 260 y que lleva como rubro el siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Contradicción de tesis 23/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, 16 de junio del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Francisco Cilia López. Tesis de jurisprudencia 65/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del dieciséis de junio del año dos mil, de lo que infiere que dicho acto se encuentra demostrado y la negativa desvirtuada.

- Así mismo, por lo que respecta a la existencia de los primeros pues los mismos constituyen ordenamientos legales, ahora bien en relación a la ejecución y demás actos derivados de los mismos planes de desarrollo urbano, los mismos constituyen actos inminentes, sin que pase desapercibidas las manifestaciones vertidas por las responsables en el sentido de que en el supuesto sin conceder que se hubieran firmado las actas de entrega y tomo de posesión, a este respecto debe decirse que el informe justificado resulta irregular por lo que debía tomarlo el Juez A Quo como rendido en sentido afirmativo.
- **Director General de Administración en Tlalpan (foja 5256)**
- **Director General de Desarrollo Social en Tlalpan (foja 5256),**
- **Director General de Administración Urbana del Gobierno del Distrito Federal (foja 737)** Niega por no estar dentro de sus atribuciones; sin embargo de la copias simples concatenadas con las confesiones que vierten las autoridades responsables en su informes se acredita plenamente la existencia de las mismas y su participación en las actas, oficios, y acuerdos que se reclaman de conformidad con los artículos 2, 212 al 234 de la Ley de Amparo en relación con los artículos 81, 82, 86, 88, 95, 96, 188, 190 fracción II, 191, 199, 200, 207 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con la Ley Sustantiva de la Materia, ya que la exhibición de las copias simples hace presumir la existencia de sus originales y confesado por la autoridad responsables, hace prueba plena, aunado a que los mismos obran en los autos del Juez A Quo se considera actuaciones judiciales que pueden ser invocadas de oficio por el Juzgador, por lo tanto, si se concatena una con otra se llega a la certeza de que lo que contiene la copia fotostática exhibida por el imputante de garantías es cierto.
- **Director General de Obras Públicas del Gobierno del Distrito Federal (foja 658 y 5234):** niega los actos I y II de la demanda inicial, en virtud de que no ha tenido injerencia en los mismos y estar fuera de sus atribuciones, referente a expropiación, fraccionamiento de terrenos, privación de propiedades o posesiones además de ser los mismos de materia agraria y se de carácter federal.
- **Director General de Desarrollo Urbano del Gobierno del Distrito Federal (fojas 497 y 5250),**
El suscrito niega los actos reclamados en el juicio de garantías toda vez que no ha tenido intervención en los mismos.

- Director General Jurídico y de Gobierno del Distrito Federal en Coyoacán (fojas 1356 y 5167),
- Director de Comercialización y Administración Inmobiliaria de Servicios Metropolitanos, sociedad anónima de capital variable (foja 7228),
- Director de Administración y Fianzas de Servicios Metropolitanos, sociedad anónima de capital variable (foja 7228)
- Director General de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal (foja 5234),
- Tesorero del Gobierno del Distrito Federal (foja 5307)
- Director General de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra CORETT (fojas 5423),
- Director de Inventario Inmobiliario y Sistemas de Información de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario adscrito a la Oficialía Mayor del Distrito Federal (foja 5492)

"...Esta autoridad NIEGA los actos reclamados que se imputan sobre el inmueble ubicado en la calle de Juan Bosco, Calle San Lorenzo y Cerrada de San Lorenzo, Colonia Huipulco, Delegación Tlalpan...

- Subdirector de Análisis, Investigación e Integración del Inventario Inmobiliario de la Dirección General de patrimonio Inmobiliario, manifestaron que no son ciertos los actos reclamados y su ejecución precisados en el considerando que antecede, respectivamente.

"...Esta autoridad NIEGA los actos reclamados que se imputan sobre el inmueble ubicado en la calle de Juan Bosco, Calle San Lorenzo y Cerrada de San Lorenzo, Colonia Huipulco, Delegación Tlalpan... 5494

- No son ciertos los actos reclamados a la Comisión Agraria Mixta, substituida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito ocho, con Residencia en el Distrito Federal, toda vez que al rendir su Informe justificado (foja 853) manifestó en esencia que no son ciertos los actos reclamados, precisados en el considerando que antecede, respectivamente, haciendo hincapié que iba a solicitar las resoluciones supuestamente emitidas a la Delegación del Registro Agrario Nacional que resguarda las actuaciones.

Es un informe irregular en virtud de que no cumple con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, pues no versa sobre la existencia o certeza de los actos reclamados y manifiesta que son imprecisos los actos reclamados y que cuando tenga la información necesaria podrá rendir su informe, en este orden de ideas es evidente que el Juez A Quo debió tener por rendidor el informe justificado como presuntamente ciertos los actos, toda vez que el informe fue irregular.

- No son ciertos los actos reclamados al Subdirector de Recursos materiales y Servicios Generales en Tlalpan, toda vez que al rendir su informe justificado el Jefe Delegacional en Tlalpan (foja 5256) manifestó que dicha autoridad no existe en su organigrama.

Ahora bien por lo que hace a la inexistencia que argumentan las autoridades responsables del Jefe de la Unidad Departamental Padrón Inmobiliario y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, Jefatura Delegación en Tlalpan, y Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, es de manifestarse que a fojas 4962 a 5620 de los autos, aparece una relación de inmuebles en los que se ubican los servicios públicos de los cuales se desprende la existencia de la Unidad Departamental Padrón Inmobiliario y Vivienda con las siglas U.D. PADRON INMOBILIARIO Y VIVIENDA, y a fojas 4983 de autos en el oficio número C21-UDAJ-432.99, de fecha 7 de mayo de 1999, firma el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales en Tlalpan, el entonces Lic. RAFAEL

BARBERENA HURTADO, por consiguiente la supuesta inexistencia que argumentan las autoridades responsables se ve desvirtuada con las documentes públicas que obran en autos, por lo tanto al no haber rendido sus informes justificados, lo procedente es tenerlos como presuntivamente ciertos para los efectos legales conducentes.

- No es cierto el acto reclamado al Jefe y Contralor General del Gobierno del Distrito Federal, consistente en el convenio celebrado entre el Departamento el Distrito Federal hoy Gobierno del Distrito Federal e Inmuebles Tlalpan, S.A., relativo a la autorización del fraccionamiento "PRADO COAPA SEGUNDA SECCION", en Villa Coapa, delegación de Tlalpan, Distrito Federal, de fecha 20 de mayo de 1972, en virtud de que con el mismo se afectó una fracción de las poligonales de los terrenos con que fue beneficiado el ejido quejoso y el plano, ya que al rendir sus informe justificado negaron su existencia (fojas 5496 y), sin que obre prueba fehaciente en contrario, ya que resulta insuficiente la copia simple del mismo (foja 4966) que presenta la quejosa, ya que la misma carece de valor probatorio, además que el mismo no se encuentra dentro de las tierras con las cuales fue dotado el Ejido quejoso.

Por lo que hace a la negativa de los actos reclamados es de señalarse que dicha negativa se ve desvirtuada con el acervo probatorio que obra agregado en los autos, ahora bien toda vez que en su informe manifiestan las autoridades responsables que mediante oficio C21-UDAI-432.99 de fecha 7 de mayo de 1999, por medio del cual el Subdelegado Jurídico y de Gobierno en Tlalpan, remite el acta entrega recepción del inmueble ubicado en San Juan Bosco, Calle San Lorenzo y Cerrada San Lorenzo, Colonia Huipulco, es cierto el acta administrativa de entrega-recepción física del inmueble denominado DEPORTIVO SAN NICOLAS TOLENTINO, ubicado en la calle de Exhacienda de San Nicolas Tolentino y Ejido de Huipulco, Colonia Prado Coapa, Delegación Tlalpan, con una superficie de 14,387.908 metros cuadrados, con motivo de la asignación a favor de la Delegación Tlalpan, derivado del acuerdo emitido por el Comité del Patrimonio Inmobiliario en su Novena Sección (sic) Ordinaria (9/2005) de fecha 12 de Mayo de 2005, por medio del cual el Director General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, por medio del cual realiza la diligencia administrativa de entrega recepción del inmueble antes descrito al Jefe Delegacional en Tlalpan y otras autoridades y que se especifican en el plano topográfico clave CT058-C12/2005, de fecha 4 de mayo de 2005, elaborado por la Subdirección de Investigación Inmobiliaria de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, sin que hubiese exhibido las copias certificadas de los mismos, lo procedente es que se requiera a las autoridades responsables para que en apoyo a su informe justificado, remitan las copias certificadas de los documentos que indican, por tratarse de un amparo agrario, ahora bien en el supuesto sin conceder de que no existan en sus archivos, solicito y así procede se requiera a las autoridades que indica la informante para que expidan y remitan a este juzgado dichas documentales y obren como prueba en el presente asunto.

- No es cierto el acto consistente en el libramiento de paso que en forma unilateral emiten las autoridades para construcción y ensanchamiento de la Avenida Acoapa, toda vez que la parte quejosa no ofreció prueba fehaciente para acreditar que las autoridades responsables se encuentran realizando dicha construcción.
- No son ciertos los siguientes actos reclamados, consistente -falta de emplazamiento en carácter de tercero perjudicado- al no obrar dentro del expediente copia certificada alguna constante su existencia:

- Juicio Ordinario Civil número 1489/01, del índice del Juez Décimo Octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, promovido por Juan Ríos Hernández su sucesión en contra de Juana Lagarde Vázquez y Concepción Lagarde Vázquez.

- Juicio Ordinario Civil número 613/2002, del índice del Juez quincuagésimo, Promovido por Ferríño Elías Luis en contra de Ada Lagarde Vázquez y Hugo Tello Fuentes.
- Juicio Ordinario Civil número 698/2000, del índice del Juzgado Vigésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, promovido por Luis Ferríño Elías en contra de Margarita Flores Meneses.

➤ No es cierto el acto reclamado al Representante Agrario en el Distrito Federal de la Secretaría de la Reforma Agraria en su carácter de sustituto del Coordinador Agrario en el Distrito Federal, lo anterior a pesar de que aceptó la existencia del Decreto expropiatorio publicado el ocho de abril de mil novecientos ochenta y dos al rendir su informe con justificación (foja 5506), sin embargo como se verá en párrafos posteriores el mismo es atribuible a diversa autoridad. El Juez A Quo no fija la litis adecuadamente, lo anterior es así en virtud de que tal y como se desprende del capítulo respectivo de actos reclamados, en el escrito inicial de demanda, todos los actos reclamados se les atribuyeron en forma indistinta a todas y cada una de las autoridades responsables, razón por la cual el Juez A Quo, no realizó un estudio integral de la demanda de amparo, tal y como lo ordena la jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Nota informe a foja 837).

➤ No es cierto el acto reclamado, consistente en el desconocimiento, que hacen las autoridades responsables de los acuerdos presidenciales de fechas veintiocho de octubre y veinte de diciembre de mil novecientos cuarenta, que tratan sobre las compensaciones a todos aquellos gobernados que se vieron afectados por las dotaciones y ampliación de tierras de los pueblos, núcleos de población y ejidos, en el reparto agrario como garantía social que debe cumplir el Estado Mexicano y su ejecución, lo anterior toda vez que dichos actos se realizaron en cumplimiento de diversos juicios de amparo números 80/942 y 437/56 ambos del índice del Segundo Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, mediante las cuales se ordenó devolver las tierras a los pequeños propietarios que ocurrieron al amparo en contra de la ampliación del Ejido.

Página 143 a 144 del escrito de agravios:

1. "RELACIÓN DE INMUEBLES EN LOS QUE SE UBICAN LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE SE INDICAN, DETECTADOS EN LA UNIDAD DE PADRÓN INMOBILIARIO Y VIVIENDA" emitió la Dirección General Jurídica y de Gobierno Dirección de Regularización Territorial y Tenencia de la Tierra (U. D. Padrón Inmobiliario y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal Jefatura Delegación Tlalpan, constante de dos fojas.
2. "CONVENIO QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, REPRESENTADO POR SU JEFE EL C. LIC. OCTAVIO SENTINES GÓMEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL DEPARTAMENTO" Y POR LA OTRA, INMUEBLES TLALPAN, S. A., REPRESENTADO POR EL C. TOMAS BRANIFF GARAMENDI A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL FRACCIONADOR", RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO "PRADO COAPA" SEGUNDA SECCIÓN, EN COAPA DELEGACIÓN TLALPAN., D.F.", de fecha 20 de mayo de 1972, constante de ocho fojas.
3. "ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DEL INMUEBLE DENOMINADO "DEPORTIVO SAN NICOLÁS TOLENTINO" UBICADO EN CALLE ENHACIENDA DE SAN NICOLÁS TOLENTINO Y EJIDOS DE HUIPULCO, COLONIA PRADOS COAPA, DELEGACIÓN DE TLALPAN, CON SUPERFICIE DE 14,387,908 METROS CUADRADOS, CON MOTIVO DE LA ASIGNACIÓN A FAVOR DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, DERIVADA DEL ACUERDO EMITIDO POR EL COMITÉ DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO EN SU NOVENA SESIÓN ORDINARIA (9/2005) DE FECHA 12 DE MAYO DE 2005", realizada el día 30 de mayo de 2005, constante de dos fojas.
4. Diario Oficial de la Federación de fecha viernes 14 de marzo de 1980, que contiene "Decreto de fecha 7 de marzo de 1980, por el que se desincorpora del dominio público del Departamento del Distrito Federal, los predios ubicados en las zonas que se indican, y se autoriza al mismo Departamento para venderlos fuera de subasta pública", por medio del cual se afecta con el número 119 de la lista de inmuebles desincorporados del Departamento del Distrito Federal hoy Gobierno del Distrito Federal al predio ubicado en la calle Juan Bosco, calle San Lorenzo y Cerrada San Lorenzo, Colonia Huipulco, Delegación de Tlalpan, clasificación catastral 53-002-02 con superficie de 552.92 metros cuadrados, constante de trece fojas útiles.
5. "Acta de entrega-recepción de la administración de inmuebles que integra el Programa de Centros de Barrio y Servicio" de fecha 31 de julio de 1998, realizada en el inmueble denominado "Centro de Barrio Huipulco", ubicado en calle San Juan Bosco sin número, esquina San Lorenzo, Colonia Huipulco, Delegación Tlalpan, Distrito Federal, celebrada entre el Director General de Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V. (SERVIMET), el entonces Oficial Mayor del Departamento del Distrito Federal hoy del Gobierno del Distrito Federal, el Director General del Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal y por la Delegación de Tlalpan el C. Jefe Delegacional y otros por medio del cual se entrega al Departamento del Distrito Federal el inmueble ubicado en calle Juan Bosco, calle San Lorenzo y cerrada San Lorenzo Colonia Huipulco, Delegación de Tlalpan, clasificación catastral 53-002-02 con superficie de 552.92 metros cuadrados, constante de seis fojas útiles.

6. Oficio número 2852/97 DIIVSI de fecha 25 de julio de 1997, suscrito por el Director de Inventario Inmobiliario y Sistemas de Información de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, dirigido al Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Delegación del Departamento del Distrito Federal en Tlalpan por el que le informan que el predio ubicado en calle San Juan Bosco esquina San Lorenzo, Colonia Huipulco Delegación Tlalpan es propiedad del departamento del Distrito Federal en donde se encuentran unas instalaciones de la tesorería del Distrito Federal, un módulo de Licencias y Control vehicular y un Consultorio Médico, amicusando existe un decreto de fecha 7 de mayo de 1980 que autoriza su desincorporación, constante de una foja útil.
7. Oficio número 3097 DIIVSI de fecha 28 de septiembre de 1999, suscrito por el Director de Inventario Inmobiliario y Sistemas de Información dirigido al Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Delegación del Departamento del Distrito Federal en Tlalpan, mediante el cual se le informa al Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Delegación Tlalpan, que el predio ubicado en calle Juan Bosco, calle San Lorenzo y cerrada San Lorenzo Colonia Huipulco, Delegación de Tlalpan, clasificación catastral 53-002-02 con superficie de 552.92 metros cuadrados quedo inscrito a favor del Gobierno del Distrito Federal con el folio real número 1155292, se destinó para un Centro de Barrio y Servicio, constante de una foja útil.
8. Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a favor del Gobierno del Distrito Federal en el folio real 1155292, en el que se encuentra que con fecha 11 de junio de 1999 se inscribe el decreto de desincorporación de fecha 14 de mayo de 1980 relativo a el predio ubicado en calle Juan Bosco, calle San Lorenzo y cerrada San Lorenzo Colonia Huipulco, Delegación de Tlalpan, clasificación catastral 53-002-02 con superficie de 552.92 metros cuadrados, remitido en copia certificada por el Director jurídico del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, como se desprende a foja 5293.
9. Oficio número C21-UDAI-432.99 de fecha 7 de mayo de 1999, suscrito por el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales en Tlalpan dirigido al Subdelegado jurídico y de Gobierno en Tlalpan por el que remite el acta entrega recepción del inmueble ubicado en calle Juan Bosco, calle San Lorenzo y cerrada San Lorenzo Colonia Huipulco, Delegación de Tlalpan, clasificación catastral 53-002-02 con superficie de 552.92 metros para la instalación de la Oficina de Licencias y Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, constante de una foja útil.
10. Sesión 66/97 ordinaria de fecha 23 de octubre de 1997, en la cual se acordó que el predio ubicado en calle Juan Bosco, calle San Lorenzo y cerrada San Lorenzo Colonia Huipulco, Delegación de Tlalpan, clasificación catastral 53-002-02 con superficie de 552.92 metros se destinó para un Centro de Barrio y Servicio constantes de dos fojas útiles.

Los agravios antes sintetizados son ineficaces.

Para corroborar lo anterior, resulta pertinente atender al contenido de los artículos 223, 224 y 225 de la Ley de Amparo aplicable, cuyo texto es del tenor siguiente:

“Artículo 223. En los amparos en materia agraria, los informes justificados deberán expresar:

(...)

II. La declaración precisa respecto a si son o no ciertos los actos reclamados en la demanda o si han realizado otros similares o distintos de aquellos, que tengan o puedan tener por consecuencia negar o menoscabar los derechos agrarios del quejoso;

III. Los preceptos legales que justifiquen los actos que en realidad hayan ejecutado o que pretenden ejecutar;

IV. Si las responsables son autoridades agrarias, expresarán, además, la fecha en que se hayan dictado las resoluciones agrarias que amparen los derechos del quejoso y del tercero, en su caso, y la forma y términos en que las mismas hayan sido ejecutadas; así como los actos por virtud de los cuales hayan adquirido sus derechos los quejosos y los terceros.”

“Artículo 224. Las autoridades responsables deberán acompañar a sus informes copias certificadas de las resoluciones agrarias a que se refiera el juicio, de las actas de posesión y de los planos de ejecución de esas diligencias, de los censos agrarios, de los certificados de derechos agrarios, de los títulos de parcela y de las demás constancias necesarias para determinar con precisión los derechos agrarios del quejoso y del tercero perjudicado, en su caso, así como los actos reclamados.

La autoridad que no remita las copias certificadas a que se refiere este artículo, será sancionada con multa de veinte a

no obstante el requerimiento del juez, la multa se irá duplicando en cada nuevo requerimiento, hasta obtener el cumplimiento de esta obligación."

*"Artículo 225. En los amparos en materia agraria, además de tomarse en cuenta las pruebas que se aporten, la autoridad judicial deberá recabar de oficio todas aquellas que puedan beneficiar a las entidades o individuos que menciona el artículo 212. **La autoridad que conozca del amparo resolverá sobre la inconstitucionalidad de los actos reclamados, tal y como se hayan probado, aun cuando sean distintos de los invocados en la demanda, si en éste último caso es en beneficio de los núcleos de población o de los ejidatarios o comuneros en lo individual.**"*

En lo que aquí interesa, de los preceptos transcritos, se colige:

❖ Que las autoridades responsables deben precisar en sus informes justificados los actos que emiten o ejecutan, que puedan tener o tengan como consecuencia la afectación de algún derecho agrario, para efectos de que el juez esté en aptitud de emitir el pronunciamiento relativo a su certeza, inexistencia o, en su caso, de la actualización de alguna causal de improcedencia, en el entendido de que debe tratarse de actos que se encuentren en su ámbito competencial, pues de no ser así, no podrían manifestarse respecto de hechos ajenos, en términos de lo previsto por el numeral 223.

❖ Que el hecho de que las autoridades responsables ordenadoras o ejecutoras, al rendir su informe justificado,

nieguen los actos reclamados, emitan manifestaciones contradictorias entre sí respecto a su certeza o no contengan los requisitos a que se refiere el artículo 223 de la Ley de Amparo, no se traduce necesariamente en su inexistencia, pues para emitir ese pronunciamiento, sobre todo, en materia agraria, el juez debe valorar esos informes junto con las constancias de autos, para arribar a una decisión en ese sentido o realizar las prevenciones que resulten indispensables, en términos de lo previsto por el numeral 224; así como para estar en aptitud jurídica de tomar una determinación respecto de la actualización o no de alguna causal de improcedencia.

❖ Que para determinar la existencia del acto reclamado o actualización de alguna causal de improcedencia, particularmente en materia agraria, no bastan las manifestaciones que realicen las autoridades en los informes justificados, sino que éstas debe analizarse conjuntamente con los documentos que sirven de justificación o con las pruebas recabadas de oficio por el juzgador, ofrecidas por la quejosa o terceros.

En ese contexto; y a partir de las constancias de autos, este tribunal colegiado estima que, como ya se adelantó, **los agravios agrupados con los incisos A) a D), son ineficaces**, porque el juez sí realizó las actuaciones necesarias para determinar los actos atendiendo a lo expresado en la demanda, ampliación y escrito aclaratorio e informes justificados y, en función de ello, emitió el pronunciamiento correspondiente sobre su certeza o inexistencia, por lo siguiente:

i) De acuerdo con los preceptos citados, las autoridades únicamente deben pronunciarse sobre la certeza o inexistencia de los actos que estén en su ámbito competencial y no respecto de actos de otras autoridades, al no constarles los hechos y no tener pruebas a su alcance para justificar su constitucionalidad, tal como lo hicieron en términos generales las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras;

ii) En relación con los informes a los que se refiere el recurrente en su agravio, no resulta trascendente que algunos de sus anexos no obren en autos en copias certificadas o que pudieran contener algunas aseveraciones ambiguas, porque, en general, se refieren a las consecuencias de los actos reclamados destacados respecto de los que sí se encuentra acreditada su certeza;

iii) En concordancia con lo dispuesto por los numerales transcritos, el juez de Distrito recabó las pruebas necesarias para dilucidar la certeza o inexistencia de los actos reclamados, así como para pronunciarse sobre la actualización o no de causales de improcedencia, como se corrobora con la totalidad de las actuaciones que obran en los diversos tomos que integran el expediente, entre las cuales, destacan las siguientes:

✓ Solicitó diversas constancias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los recursos de revisión 1078/41 y 5326/56, radicados en la Segunda Sala de ese Tribunal, del incidente de inejecución 4/1955 de su índice y de las quejas relacionadas con el cumplimiento.

Mediante diversos oficios, el Máximo Tribunal del País remitió al Juzgado de Distrito copias certificadas del incidente de inejecución de sentencia 4/19155 y del recurso de revisión 1078/1941; y señaló que el amparo en revisión 53216 no lo tenía radicado; no obstante, la Segunda Sala del alto Tribunal remitió copia certificada del amparo en revisión 2581/1948, en el que fue recurrente Augusto Rodríguez.

✓ Por auto de uno de octubre de dos mil doce, a efecto de contar con los elementos necesarios para dictar la resolución correspondiente, de conformidad con el artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juzgado del conocimiento solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de no existir impedimento alguno, remitiera copia certificada de las constancias que integran el recurso de revisión 5236/56, radicado en la Segunda Sala de este Máximo Tribunal, las cuales fueron remitidas mediante oficio E-2386/2012 y agregadas en proveído de quince de octubre de dos mil doce.

✓ En cumplimiento de lo determinado en el recurso de revisión R.A. 363/2010, el juzgado de Distrito requirió al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, copia certificada de toda la documentación que obrara en sus archivos de la que pudiera advertirse el consentimiento del ejido quejoso, de los decretos expropiatorios de cuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro (ampliación Calzada de Tlalpan) y trece de agosto de mil novecientos sesenta y cinco (apertura de Viaducto), entre las que debía incluir cualquier constancia de liquidación de las cantidades que se encontraban depositadas en ese fondo, así como de los recibos de fecha

de junio de mil novecientos noventa y cinco, catorce de marzo de dos mil, diecisiete de mayo de dos mil uno y treinta y uno de julio de dos mil dos.

En desahogo del requerimiento mencionado, la apoderada legal del fideicomiso precisado manifestó que no contaba con información alguna.

✓ En ese contexto; y con el fin de recabar las constancias mencionadas por este tribunal colegiado, con fundamento en el artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito requirió la información antes precisada al Presidente de la República, al Secretario de la Reforma Agraria, al entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, al Director para la Regularización para la Tenencia de la Tierra, al Encargado del Archivo General Agrario, al Titular y Director de lo Contencioso del Registro Agrario Nacional, al Director General de Servicios Legales en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México.

✓ Solicitó al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que informara si en sus archivos estadísticos y libros de Gobierno tenía registro o conocimiento de si en los juicios de amparo 80/1941 y 437/1956, fue interpuesto algún recurso de queja relacionado con el cumplimiento de esas ejecutorias.

Ante lo cual, el juzgado requerido remitió el expediente citado en primer término; en tanto que respecto al segundo amparo, el juez en comento informó que dicho expediente no fue encontrado en el Archivo de Concentración del Poder

Judicial de la Federación y que presuntamente fue extraviado con motivo de los sismos ocurridos en el mes de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco; asimismo, informó que no se localizaron los libros de gobierno relativos a los años de mil novecientos cuarenta y uno (amparo 80/1941) y mil novecientos cincuenta y seis (amparo 437/1956), por lo que existía la presunción de que se extraviaron en los sismos mencionados, razón por la cual se encontraba imposibilitada para atender a la solicitud planteada.

✓ Aunado a lo anterior, el juez de Distrito solicitó al Titular del Archivo de Concentración y al Titular del Centro Archivístico Judicial, ambos del Poder Judicial de la Federación, que le informaran si dentro de sus archivos se encontraba tomo o legajo relativo al juicio de amparo 80/1941 mencionado.

El Subdirector del Archivo de Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que el expediente 80/1941, fue entregado en calidad de préstamo al juzgado de origen.

En las relatadas condiciones, como ya se adelantó, es correcto que tomando en cuenta lo expresado por el quejoso, los informes justificados, así como las constancias de autos ofrecidas por las partes y las recabadas de oficio, el juez haya decretado el sobreseimiento en el juicio respecto de actos que no quedó acreditada su existencia y por actualización de las diversas causas de improcedencia, a que se refiere el

DÉCIMO. Las autoridades recurrentes Presidente de la República, Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como las autoridades responsables de esa secretaría, plantean que el juicio de amparo es improcedente respecto del decreto de expropiación publicado el cuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro, por actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, relativa al consentimiento tácito, ya que más bien debió promoverse dentro del plazo genérico de quince días.

Tal causal se desestima, porque las recurrentes no controvierten la consideración del juez de Distrito plasmada en el considerando octavo, que sostiene que si bien la demanda de protección constitucional debía promoverse en el plazo previsto por el artículo 21, de la Ley de Amparo vigente a la fecha del decreto mencionado; lo cierto es que de las constancias de autos, no se desprende una fecha cierta en la cual los ejidatarios hayan tenido conocimiento del decreto, para así estar en aptitud de hacer el cómputo previsto por normativa aplicable.

Ni controvierten las recurrentes, la consideración del juez de que a pesar de que el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, esa publicación no puede servir como base para realizar el cómputo respectivo, en aplicación de la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Diario Oficial de la Federación, tomo LXIV, de rubro y texto siguientes:

"EXPROPIACIÓN, LA PUBLICACIÓN DE UN ACUERDO DE, EN EL DIARIO OFICIAL, NO SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN. La Suprema Corte de Justicia ha sentado jurisprudencia en el sentido de que "la publicación de resoluciones administrativas en el Diario Oficial de la Federación, no surte efectos de notificación, a menos que se trate de acuerdos de interés general, decretos o leyes". Ahora bien, con apoyo en dicha jurisprudencia, debe estimarse que la publicación de un decreto expropiatorio, dictado por el gobernador de un Estado, no surte efectos de notificación, pues tratándose tan sólo de un acuerdo administrativo, y no de leyes o de disposiciones gubernativas de interés general, no puede tener aplicación posible el principio de derecho según el cual, la ignorancia de las leyes a nadie aprovecha ni puede servir de excusa. En consecuencia, no debe tomarse como base, para computar el término de quince días en que debe interponerse la demanda de amparo, la fecha en que un decreto expropiatorio fue publicado en el Diario Oficial, sino aquella en la que el quejoso tuvo conocimiento de ese decreto."

De no prosperar lo anterior, en todo caso, las autoridades recurrentes recién mencionadas, plantean que el juicio de amparo es improcedente respecto de los decretos de expropiación reclamados, porque se trata de actos consentidos, en la medida en que los órganos de representación del ejido retiraron los fondos de la indemnización correspondiente, como se advierte de diversas actas de asamblea celebradas por el ejido.

Dicha causal se desestima, porque, como lo sostuvo el

retiros por concepto de indemnización de las expropiaciones para construir la Calzada de Tlalpan o el Viaducto Tlalpan, sino que, en todo caso, lo que obra en el expediente son algunos recibos a favor del ejido y actas de asamblea, pero por concepto de la expropiación de cuatro de enero de mil novecientos ochenta y dos (publicada el ocho de abril del mismo año), a favor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT); expropiación que, como se precisó en la sentencia recurrida, ya fue analizada en el diverso juicio de amparo 954/88 y en el recurso de revisión correspondiente; y respecto de la expropiación de veinticuatro de marzo de mil novecientos cincuenta y nueve (publicada el siete de noviembre de la misma anualidad), a favor de la Compañía Amacuzac, en relación con la cual, el juez de Distrito decretó el sobreseimiento en el juicio por actualizarse la causal de improcedencia relativa al consentimiento del acto reclamado.

Por otra parte, las recurrentes aducen que, en todo caso, la parte quejosa no agotó el principio de definitividad, porque en contra de los actos reclamados debió promover juicio ante el Tribunal Agrario competente.

Dicha causal también se desestima, porque las recurrentes no controvierten la consideración del juez de Distrito plasmada en el considerando octavo, que sostiene que la parte quejosa no estaba obligada a promover de manera previa al juicio de protección constitucional el diverso de nulidad ante un Tribunal Unitario Agrario, ya que en el caso se surte una excepción al principio de definitividad que rige al juicio de garantías, pues el artículo 166 de la Ley Agraria exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la

del acto reclamado, por lo que, independientemente de si éste es susceptible o no de suspenderse, el juicio de amparo es procedente, de acuerdo a lo establecido por la parte final de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo.

En ese tenor, este tribunal colegiado estima que es correcto que el juez de Distrito haya procedido al estudio de fondo del asunto.

DÉCIMO PRIMERO. El ejido **recurrente** señala que la sentencia recurrida es ilegal, porque el juez del conocimiento no realizó una debida valoración de los dictámenes periciales, en relación con las constancias de actos reclamados, porque de haberlo hecho habría advertido que las tierras del ejido están afectadas por: a) la ampliación de la avenida Acoxta; b) el inmueble denominado "Centro de Barrio Huipulco" ubicado en la calle Juan Bosco, calle San Lorenzo y Cerrada de San Lorenzo, colonia Huipulco, delegación Tlalpan, en la Ciudad de México, con clave catastral número 53-002-02, con una superficie de 552.92 metros cuadrados; c) Jardín de niños Cámara Junior; d) predio ubicado en Viaducto Tlalpan, entre calle Capirote y Arenal "pozo Xochimilco 28"; y e) el ubicado en Calle San Lorenzo, entre San Juan Bosco y Cerrada de San Lorenzo, "Oficina de Tesorería, Oficina de Licencias, Control Vehicular y Consultorio Huipulco"; predio identificado como "22. El ubicado en Hacienda de San Nicolás Tolentino, entre Hacienda de Xilotepec y Hacienda de Jalatlengo "Centro Deportivo San Nicolás Tolentino, Pozo, Biblioteca, Casa de Salud T-1 y Cibertlalpan, con una superficie de 18586.91 metros cuadrados".

El agravio es ineficaz.

Para explicar lo anterior, resulta pertinente tener presente el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de amparo, cuyo texto establece que: *"El valor de la prueba pericial quedará a la prudente apreciación del tribunal."*

Empero, dicha discrecionalidad no tiene el alcance de otorgar valor probatorio a dictámenes sin sustento; al respecto, debe tomarse en cuenta que el propósito de la prueba pericial es aportar al juzgador elementos auxiliares, propios de una ciencia, arte u oficio ajenos a su especialidad, que le permitan conocer la verdad en un asunto puesto a su consideración, a efecto de resolverlo en justicia.

Así pues, dado que la función del perito es ilustrar al juzgador, no subrogársele en la solución del negocio, el dictamen que emita no debe ser dogmático, sino contener explicación detallada sobre la manera como se arribó a la conclusión respectiva, para que, mediante la revisión de tales datos, el juzgador, hasta donde sea razonable, se forme una opinión propia y esté en posibilidad de otorgar credibilidad o no al peritaje.

Es aplicable la jurisprudencia 90/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, página cuarenta y cinco, que informa:

"DICTÁMENES PERICIALES NO OBJETADOS. SU VALORACIÓN. *En relación con la facultad de los Jueces para apreciar las pruebas, la legislación mexicana adopta un sistema mixto de valoración, pues si bien concede arbitrio judicial al juzgador para apreciar ciertos medios probatorios (testimoniales, periciales o presuntivos), dicho arbitrio no es absoluto, sino restringido por determinadas reglas. En tal virtud, el hecho de que no se objete algún dictamen pericial exhibido en autos, no implica que éste necesariamente tenga valor probatorio pleno, pues conforme al principio de valoración de las pruebas, el juzgador debe analizar dicha probanza para establecer si contiene los razonamientos en los cuales el perito basó su opinión, así como las operaciones, estudios o experimentos propios de su arte que lo llevaron a emitir su dictamen, apreciándolo conjuntamente con los medios de convicción aportados, admitidos y desahogados en autos, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de su valoración y de su decisión. Por tanto, la falta de impugnación de un dictamen pericial no impide al Juez de la causa estudiar los razonamientos técnicos propuestos en él, para estar en posibilidad de establecer cuál peritaje merece mayor credibilidad y pronunciarse respecto de la cuestión debatida, determinando según su particular apreciación, la eficacia probatoria del aludido dictamen."*

De ahí que si un dictamen contiene solamente una opinión sin fundamento, esto es, que carezca de señalamiento sobre los elementos, tales como datos técnicos, documentos y/o circunstancias, tomados en cuenta para arribar a la conclusión de que se trate, carece de valor probatorio; sobre lo cual es

Tribunal del país, consultable en el Semanario citado, Séptima Época, Tomo 157-162, Cuarta Parte, página ciento cuarenta y nueve, de rubro y texto siguientes:

"PRUEBA PERICIAL, APRECIACIÓN DE LA. Si al emitir un dictamen pericial el perito no da las razones debidas y fundadas que sustentan su opinión, tal dictamen no cumple con su cometido que es precisamente auxiliar al juzgador en la percepción e inteligencia de los hechos que se investigan, ya que no aporta datos fundados que permitan deducir consecuencias que conduzcan al conocimiento de la verdad que se busca, y si el tribunal responsable concede valor probatorio pleno a dicho peritaje, es inconcuso que hace un indebido uso del arbitrio que la ley le concede para apreciar la prueba de que se trata."

Sobre esas bases, se advierte que en relación con la valoración de los dictámenes periciales, el juez de Distrito debe exponer el motivo en que se apoya para tomarlos en cuenta o no al emitir la sentencia recurrida, tal como lo hizo, en el caso concreto.

En efecto, de la lectura integral a la sentencia recurrida, se aprecia que el juez valoró los dictámenes periciales ofrecidos por las partes y, en función de ello, determinó lo siguiente:

- Que el predio a que se refiere el ejido recurrente: "9. ubicado en calle San Juan Bosco número 1 entre Calzada de Tlalpan y Calzada Acueducto **"Jardín de Niños Cámara Junior"**, se encuentra localizado dentro de la superficie del ejido, expropiado en decreto de fecha cuatro de octubre de mil

novecientos cincuenta y cuatro, para la ampliación de la calzada de Tlalpan y un jardín de niños; y que el predio identificado como "12. Ubicado en Viaducto Tlalpan entre calle Capirote y Arenal **"Pozo Xochimilco 28"**", está localizado dentro de la superficie del ejido, expropiado en decreto de fecha once de agosto de mil novecientos sesenta y cinco, para la apertura del Viaducto que ligará la Calzada de Tlalpan, con la carretera Cuernavaca; de ahí que no asiste la razón al recurrente cuando señala que el juez no tomó en cuenta dicha situación, porque sí lo hizo.

▪ En relación con el inmueble denominado **"Centro de Barrio Huipulco"** ubicado en la calle Juan Bosco, calle San Lorenzo y Cerrada de San Lorenzo, colonia Huipulco, delegación Tlalpan, en la Ciudad de México, con clave catastral número 53-002-02; cabe señalar que en el dictamen complementario de la perito oficial en materia de ingeniería y arquitectura (fojas 19865 a 19869), precisó que se trata del predio también identificado como "8. ubicado en calle San Lorenzo entre San Juan Bosco y Cerrada de San Lorenzo **"Oficina de Tesorería, Oficina de Licencias y Control Vehicular y Consultorio Huipulco"**", los que deben considerarse como un mismo predio, por estar ubicados en el mismo lugar.

Una vez establecido lo anterior, el juez de Distrito consideró que del plano de fraccionamiento del ejido, escala 1:2,500, aprobado por la Comisión Nacional del Agua en sesión de veintisiete de mayo de mil novecientos treinta, en conjunto con la valoración del dictamen pericial en materia de topografía y geodesia rendido por el experto designado por el Oficial Mayor

el inmueble en cuestión está **dentro de la parcela o lote escolar del ejido**, el cual, no es propiamente propiedad del ejido, sino que se trata de un bien inmueble del dominio público federal protegido por la Ley General de Bienes Nacionales, tal como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada sin número, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, volumen XLIII, primera parte, página 231, de rubro y texto siguientes:

"PARCELAS ESCOLARES. COMPETENCIA EN CASO DE DESPOJO. Es cierto que el artículo 4o. de Reglamento de la Parcela Escolar, dice que ésta se encuentra sujeta al mismo régimen legal que las demás del ejido; es decir, que no podrá arrendarse, permutarse, traspasarse o enajenarse a ninguna persona real o moral, y que debe ser explotada mediante el trabajo obligatorio de los profesores o alumnos capacitados, auxiliados por el comité de administración de la misma parcela. Pero luego agrega: "ésta se titulará en favor de la escuela rural, representada por la Secretaría de Educación Pública.". Ahora bien, este último párrafo cambia completamente la naturaleza de la parcela escolar, por lo que hace a la propiedad de la misma, y la deja fuera de lo dispuesto en el artículo 130 del Código Agrario, pues titulándose a favor de las escuelas rurales, que son planteles destinados por la Federación a un servicio público, así como a las finalidades especificadas de las mismas, o sea la educación pública en un ramo agropecuario, esas parcelas no son propiedad del ejido sino que son bienes del dominio público, y forman parte del patrimonio nacional, quedando bajo la protección de la Ley General de Bienes Nacionales, y deben inscribirse en el Registro de la Propiedad Federal, de acuerdo con los artículos 2o. fracción III, 8, 57, 58,

fracción I y 61 de la citada ley, que establecen: el 2o. que son bienes del dominio público los inmuebles destinados por la Federación a un servicio público y los equiparados a éstos; el 8o., que los bienes del dominio público nacional, son inalienables e imprescriptibles, y no están sujetos a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o interna; el 57, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevará un registro de la propiedad federal, por medio de una dependencia con esa denominación; el 59, que se inscribirán en ese registro los títulos por los cuales se adquieran, transmitan, modifiquen, graven o extingan el dominio, la posesión y los demás derechos reales pertenecientes al Gobierno Federal, sobre los bienes inmuebles, y el 61, que esos títulos se inscribirán, además, en el Registro Público de la Propiedad que corresponda. De las anteriores consideraciones se desprende que como las parcelas escolares forman parte del patrimonio nacional, el despojo que de ellas se haga es un delito de orden federal, pues queda comprendido en el inciso e) de la fracción I del artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por lo mismo, en el caso a estudio, debe fundarse la competencia en los tribunales federales, cambiando la tesis sostenida hasta ahora por la Suprema Corte.”

Lo anterior, a consideración de este tribunal colegiado, al no quedar desvirtuado por alguno de los dictámenes periciales en materia de topografía y geodesia que obran en autos, que sostenga que el inmueble es propiedad del ejido, entonces debe subsistir la conclusión de que se localiza en la parcela o lote escolar con las consecuencias jurídicas que conlleva esa situación.

▪ En relación con la **ampliación de la avenida Acoxta**, tomando en cuenta lo expresado por la quejosa y pruebas que constan en autos, el juez decretó el sobreseimiento en el juicio, bajo la consideración de que no es cierto el acto, pues no hay algún elemento de prueba del cual se advierta de manera fehaciente de que las autoridades responsables se encuentran realizando su construcción, con lo cual este tribunal colegiado coincide a partir de la revisión de las constancias de autos; además de que tampoco se advierte, en todo caso, el predio o porción de tierra del ejido que pudiera estar afectado, pues de acuerdo con el dictamen pericial del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (foja 9430), técnicamente no hay elementos mínimos para ubicar la superficie a que se refiere el ejido recurrente.

▪ En cuanto al predio identificado como "22. El ubicado en Hacienda de San Nicolás Tolentino, entre Hacienda de Xilotepec y Hacienda de Jalatlengo **"Centro Deportivo San Nicolás Tolentino**, Pozo, Biblioteca, Casa de Salud T-1 y Cibertlalpan", con una superficie de 18586.91 metros cuadrados", el juez de Distrito refirió que, de acuerdo con los dictámenes periciales oficial, del Jefe de Gobierno y Oficial Mayor de la Ciudad de México, se advierte que se encuentra dentro de la superficie del ejido, que fue devuelta a los propietarios afectados con las ampliaciones del ejido, según resolución presidencial de quince de febrero de mil novecientos cincuenta y seis, en relación con lo cual, de la revisión a las constancias de autos, no se advierte prueba en contrario.

En las relatadas condiciones, este tribunal colegiado estima que la sentencia recurrida se encuentra ajustada a

derecho, pues encuentra sustentó en la debida valoración de los dictámenes periciales en materia de topografía y geodesia ofrecidos por las partes.

DÉCIMO SEGUNDO. El ejido recurrente aduce que la sentencia recurrida es ilegal, porque no tuvo la oportunidad de demostrar que no se actualiza la causa de utilidad pública, a que se refieren los decretos expropiatorios reclamados, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro y trece de agosto de mil novecientos sesenta y cinco.

El agravio es ineficaz, porque, contrario a lo expuesto por el ejido recurrente, durante todo el trámite del juicio tuvo la oportunidad de ofrecer medios de convicción para en su caso desvirtuar los motivos de los decretos expropiatorios reclamados, lo cual no hizo, como se advierte de las constancias de autos; sin que obste a lo anterior, que la parte quejosa se trate de un núcleo agrario, considerando que en la Constitución Federal existen causas específicas que llevaron a la expropiación que señalan la preponderancia del interés general sobre el individual del ejido, como se sostiene en la sentencia recurrida.

Tomando en cuenta que los decretos expropiatorios reclamados subsisten por las razones sustentadas por el juez de Distrito en el considerando décimo de la sentencia recurrida, al haberse acreditado la utilidad pública de las expropiaciones, lo procedente es confirmar la negativa de protección constitucional al ejido quejoso en contra de dichos decretos; y,

cuya inconstitucionalidad se hizo depender de la inconstitucionalidad de las expropiaciones, que consisten en lo siguiente:

a) La cancelación, revocación, desconocimiento, suspensión, que aducen hicieron las responsables, de los acuerdos presidenciales de fechas veintiocho de octubre y veinte de diciembre de mil novecientos cuarenta.

b) La privación en forma total y definitiva de las propiedades, posesiones y disfrute de los derechos agrarios del ejido denominado "Ejido de Huipulco", delegación Tlalpan, en la Ciudad de México, correspondiente a la dotación contenida en la resolución presidencial de fecha diecinueve de octubre de mil novecientos veintidós.

c) La cancelación, revocación, desconocimiento o suspensión de cualquier otra índole de la resolución presidencial de dotación y ampliación de tierras con las que se vio beneficiado el ejido quejoso.

d) La cancelación, revocación o suspensión de cualquier otra índole, que tenga como consecuencia el desconocimiento de los derechos agrarios que haya adquirido el quejoso.

e) La cancelación, revocación, desconocimiento o suspensión de cualquier otra índole en forma unilateral por las responsables de la toma de posesión, planos provisionales y definitivos de ejecución de las diligencias, censos, certificados y resoluciones agrarias que desconozcan los derechos del quejoso.

f) *La prohibición e impedimento para que la impetrante de garantías realice los fines sociales con las tierras con que fue beneficiada.*

g) *La orden de desalojo de las tierras, aguas, posesiones y derechos agrarios de la quejosa.*

h) *Los permisos, autorizaciones, licencias de construcción y funcionamiento, la aprobación de planos, las autorizaciones para construcciones y urbanización que están otorgando las autoridades responsables y que afectan la superficie de terreno con que fue beneficiado el ejido quejoso.*

i) *El fraccionamiento de los terrenos de propiedad del impetrante de garantías, lotificación, ventas, enajenaciones, planos de notificación, planos de urbanización, resoluciones o sentencias por autoridades judiciales o administrativas, inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de escrituras, fideicomisos, convenios, acuerdos, resoluciones, sentencias, que tengan como propósito lotificar la superficie citada."*

DÉCIMO TERCERO. La autoridad recurrente Jefe de Gobierno de la Ciudad de México aduce que la sentencia recurrida es ilegal, porque los artículos 286 y 288 del Código Agrario no prevén el derecho de audiencia en el procedimiento de expropiación y, por ende, tampoco procede para fijar la indemnización correspondiente.

Agrega que no procede el control de convencionalidad que realiza el juez de Distrito en la sentencia recurrida en relación con la temática precisada.

El agravio es ineficaz, porque, en principio, la sujeción de las autoridades a los tratados internacionales está prevista por el artículo 133 de la Constitución Federal, que desde mil novecientos diecisiete, establece que en la resolución de los asuntos, los órganos jurisdiccionales deben tomar en cuenta el contenido de los tratados internacionales, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los criterios derivados de su interpretación, como se hizo en el caso concreto, en conjunto con lo previsto por la Norma Fundamental.

En ese orden de ideas, se desestima el agravio mediante el cual la autoridad recurrente aduce que es ilegal la consideración del juez que sostiene que debe pagarse la indemnización por concepto de los bienes expropiados, a valor comercial, pues, a su decir, dicha modalidad no se encontraba vigente al momento de los decretos expropiatorios.

Esto es así, porque el juez de Distrito para sustentar su determinación no partió del contenido de las leyes agrarias secundarias, sino directamente de la Constitución Federal en relación con lo dispuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos, lo cual, como ya se indicó encuentra sustento en lo establecido por el artículo 133 constitucional.

Por otro lado, es ineficaz el agravio mediante el cual la autoridad recurrente aduce que la sentencia recurrida es ilegal

porque la naturaleza del juicio de amparo es restituir derechos violados y no otorgar derechos con los cuales la quejosa no contaba previo a la promoción del juicio de amparo.

La ineficacia del argumento deriva del hecho de que, como quedó acreditado en el juicio, la quejosa se vio afectada por diversos decretos expropiatorios por causa de utilidad pública y, en vía de consecuencia, la autoridad estaba obligada a pagarle la indemnización correspondiente; en otras palabras, la sentencia no obliga a la autoridad a algo novedoso que no surgiera de su derecho a la indemnización.

En otro agravio, el Jefe de Gobierno plantea que la sentencia recurrida es ilegal, ya que dejó sin efectos el monto de la indemnización previsto en el decreto expropiatorio de dieciocho de agosto de mil novecientos cincuenta y cuatro (publicado el cuatro de octubre del mismo año), en el que se precisó que la indemnización debía pagarse conforme al valor de \$1,665.74 (un mil seiscientos sesenta y cinco pesos 74/100 moneda nacional), siendo que lo procedente es que dicha cantidad se actualizara.

El agravio es ineficaz, porque no controvierte lo sustentado por el juez de Distrito, en el sentido de que atendiendo a la Constitución Federal y Convención Americana sobre Derechos Humanos, la indemnización por concepto de expropiación no debe tornarse ilusoria e irreal, sino que debe pagarse una indemnización que considere el transcurso del tiempo, pues debido a factores propios de la economía el valor asignado en aquél momento ya no puede servir de base;

predios o terrenos comprendidos dentro los decretos expropiatorios reclamados, lo cual, sirvió para que el juez estableciera el efecto de la concesión de la protección constitucional respecto de la omisión de pago de la indemnización, poniendo énfasis en algunos predios específicos, dada la controversia que surgió entre las partes respecto a la existencia o inexistencia de afectación con motivo de los decretos multicitados, lo cual, como se ve, no implica duplicidad en cuanto a la precisión de los bienes, sino una mera precisión; en el entendido de que será motivo de procedimiento de la valuación correspondiente.

DÉCIMO CUARTO. Las autoridades recurrentes Presidente de la República, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, señalan que la sentencia recurrida es ilegal, porque el juez de Distrito omitió pronunciarse de manera específica sobre quién es la autoridad que debe realizar el pago de la indemnización.

Agregan que, en todo caso, la indemnización debe ser a cargo de quien se benefició con los decretos expropiatorios, esto es, a cargo del Gobierno de la Ciudad de México.

El agravio es ineficaz, porque, de la lectura de la sentencia recurrida, se advierte que el juez de Distrito sí emitió el pronunciamiento correspondiente, al señalar que el Presidente de la República debe emitir la resolución que en derecho corresponda respecto a la indemnización justa que corresponda al ejido quejoso por la expropiación de sus tierras, lo cual es correcto, pues, por una parte, el Presidente fue quien

audiencia a la parte quejosa para efectos de fijar precisamente esa indemnización y tomando en cuenta que fue determinada de manera unilateral por la autoridad.

El Jefe de Gobierno aduce que en la sentencia recurrida existe un error judicial, ya que, por una parte, concede el amparo respecto de los decretos expropiatorios de dieciocho de agosto de mil novecientos cincuenta y cuatro y de once de agosto de mil novecientos sesenta y cinco y, por otra parte, hace extensiva la protección constitucional respecto de diversos predios que se encuentran ubicados en las poligonales del ejido, lo cual es incorrecto, al traducirse en una duplicidad de bienes.

El agravio es infundado, toda vez que el juez de Distrito no concedió el amparo respecto de los decretos expropiatorios mencionados, si no que, como ya se precisó en el considerando segundo de esta determinación, negó la protección constitucional en relación con dichos decretos.

Por otra parte, no asiste la razón a la autoridad recurrente, porque de la lectura integral a la sentencia recurrida, se observa que en función de las pruebas que constan en autos, el juez de Distrito ordenó las actuaciones necesarias para delimitar los predios del ejido que sufrieron afectación con motivo de los decretos expropiatorios reclamados, pues dado el transcurso del tiempo no en todos los casos había claridad respecto de tal aspecto, particularmente, como se sostiene en parte de los dictámenes periciales que obran en autos, considerando que las referencias que inicialmente delimitaban al ejido se fueron diluyendo. En ese tenor, los peritos establecieron cuáles son los

otra parte, la decisión adoptada por el juez es acorde con la naturaleza jurídica que al momento de las expropiaciones tenía el entonces Departamento del Distrito Federal, hoy Gobierno de la Ciudad de México.

Para corroborar lo anterior, se procede a transcribir los decretos expropiatorios multicitados, que en lo conducente, señalan:

"(...) DECRETO Que expropia al ejido Huipulco, de Tlalpan, D.F., una superficie de 3.331.47 M2, para la ampliación de la calzada de este último nombre.

*Al margen sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos. - Presidencia de la República.*

ADOLFO RUIZ CORTINES, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de las facultades que le confieren los artículos 27 de la Constitución Federal y 33 y 192 del Código Agrario; y

(...)

DECRETO

PRIMERO. Exprópiase al ejido de Huipulco, Delegación de Tlalpan, del Distrito Federal, 3,331.47 M2 (tres mil trescientos treinta y un metros, cuarenta y siete centímetros cuadrados).

(...)"

"(...) DECRETO que expropia por causa de utilidad pública, en favor del Departamento del Distrito Federal, a fin de que la destine a la apertura de un viaducto que ligará la Calzada de Tlalpan con las carreteras de Cuernavaca,

dos fracciones del ejido de Huipulco, Delegación de Tlalpan, D.F.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Presidencia de la República.

GUSTAVO DIAZ ORDAZ. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de las facultades que se confieren los artículos 27 de la Constitución Federal, 33 y 192 del Código Agrario en vigor, y

(...)

DECRETO

PRIMERO. *Se expropián por causa de utilidad pública, en favor del Departamento del Distrito Federal, a fin de que las destine a la apertura de un viaducto que ligará la Calzada de Tlalpan, con las carreteras de Cuernavaca, las dos fracciones del ejido de Huipulco, de la Delegación Tlalpan, Distrito Federal, que se describen a continuación; la fracción Norte, con una superficie aproximada de 2 hectáreas, 64 áreas y las siguientes medidas y colindancias, partiendo del vértice Noroeste del ejido; al Noroeste, en 32 metros, con la privada de San Francisco; al Sureste, en 464 metros, con resto del ejido de Huipulco; al Suroeste, en 60 metros, con la Calzada de San Juan de Dios; al Noroeste, en dos tramos, el primero de 346 metros con resto del mismo ejido, y el segundo de 128 metros con terrenos del pueblo de Huipulco. Esta superficie está dividida por la calle de Don Juan Bosco, en dirección Este-Oeste. La fracción Sur, con una superficie aproximada de 3 hectáreas, 5 áreas y las siguientes medidas y colindancias; al Noroeste, en 60 metros, con la Calzada a San Juan de Dios; al Sureste, en tres tramos, el primero en línea recta de 92 metros, el segundo en línea curva, de 406 metros, y el tercero en línea*

en 62 metros, con camino a Xochimilco; al Noroeste, en tres tomos, el primero en línea recta de 42 metros, el segundo en línea curva, de 370 metros y el tercero en línea recta de 88 metros, con resto del mismo ejido Esta Superficie está dividida por la Calle Ajusco, en dirección Este-Oeste. (...)”

De las transcripciones anteriores, como ya se indicó, se advierte que el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos fue quien emitió los decretos expropiatorios que afectaron predios del ejido quejoso, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro y el trece de agosto de mil novecientos sesenta y cinco, por lo que al provenir de dicha autoridad el perjuicio al ejido, debe hacerse cargo de la indemnización derivada de las expropiaciones.

Y, por otra parte, se observa que en las fechas de las expropiaciones multicitadas, en relación con el entonces Departamento del Distrito Federal, hoy Gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo con el artículo 89, fracción II, de la Norma Fundamental, así como con los numerales 1º, 17 y 18 de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, el Presidente de la República designaba a la autoridad ejecutiva superior de ese Departamento, pudiendo removerla libremente, lo que quiere decir, que el jefe del Departamento actuaba por encargo directo del jefe del Ejecutivo Federal respecto de la administración local del Distrito Federal; de manera que en ese contexto, deben ser vistos los decretos expropiatorios y la indemnización que derive de dichos decretos, lo que se traduce en que el titular del Ejecutivo Federal es el responsable del pago de la indemnización a favor del ejido quejoso.

DÉCIMO QUINTO. El **ejido recurrente** señala que la sentencia recurrida es ilegal, porque al resolver el juez de Distrito que se le debe pagar una indemnización por la expropiación derivada del decreto expropiatorio al Ejido de Huipulco, para la ampliación de la calzada de Tlalpan, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro, así como del decreto expropiatorio al ejido, para la apertura del Viaducto que ligara la calzada de Tlalpan con las carreteras de Cuernavaca publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto de mil novecientos sesenta y cinco, imprimó un alcance y efecto incorrecto a la concesión de la protección constitucional, porque substituyó a la responsable y se pronunció sobre el cumplimiento sustituto de la sentencia, sin darle la oportunidad de solicitar el pago de daños y perjuicios.

El agravio es ineficaz.

El artículo 80 de la ley de la materia, establece que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exige, como se corrobora con su contenido:

"Artículo 80. La sentencia que conceda el amparo tendrá

individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija."

En ese tenor, este órgano colegiado considera que si el juez determinó en el caso concreto, que el efecto de la concesión de la protección constitucional consiste en dar derecho de audiencia a la parte quejosa con la finalidad de determinar el pago de la indemnización correspondiente, ello es acorde con lo previsto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, en el sentido de restituir a la parte quejosa en su garantía violada, lo cual, cabe señalar no implica decisión alguna sobre el cumplimiento sustituto de la sentencia, ya que ese pronunciamiento, en su caso, se emitirá en el momento procesal oportuno, esto es, una vez que cause ejecutoria la ejecutoria en términos de lo previsto por la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Federal; al igual que lo relativo al incidente de pago de daños y perjuicios.

DÉCIMO SEXTO. Este tribunal advierte que el agravio aducido por la Directora Jurídica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en representación de las autoridades responsables del sistema citado, es **ineficaz**, dado que se confirmó el sobreseimiento decretado en el juicio en relación con dichas autoridades; de manera que desapareció la condición a la que estaba sujeta la revisión adhesiva, esto es, reforzar la sentencia recurrida; en consecuencia, debe declararse sin materia

Al respecto, es aplicable el criterio sustancial contenido en la jurisprudencia 2a./J. 166/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario citado, Novena Época, Tomo XXVI, septiembre de dos mil siete, página quinientos cincuenta y dos, que informa:

“REVISIÓN ADHESIVA EN AMPARO INDIRECTO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA SI LA REVISIÓN PRINCIPAL RESULTA INFUNDADA. El artículo 83, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé la procedencia del recurso de revisión contra las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito, y en su último párrafo establece que en todos los casos a que se refiere ese precepto, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses puede adherirse a la revisión principal. Ahora bien, si se toma en cuenta que el recurso de revisión adhesiva carece de autonomía, al señalar el párrafo indicado que la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste, es evidente que si la revisión principal resulta infundada, aquél debe declararse sin materia, por su naturaleza accesoria.”

En las relatadas condiciones, lo procedente es modificar la sentencia recurrida en cuanto a la precisión de los actos reclamados a que se refiere el considerando octavo de esta ejecutoria; sobreseer en el juicio respecto de los actos precisados por el juez de Distrito en los considerandos quinto y séptimo de la sentencia recurrida; negar el amparo respecto de los decretos expropiatorios publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro y trece de agosto de mil novecientos sesenta y cinco;

indemnización al ejido quejoso derivada de los decretos expropiatorios recién precisados; y dejar sin materia la revisión adhesiva.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida únicamente para tener como actos destacados los precisados en el considerando octavo de esta ejecutoria.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo número 579/2005 y su acumulado 259/2015, promovidos por el Ejido de Huipulco, en la ciudad de México, a través de su respectivo comisariado ejidal, en contra de los actos y las autoridades precisados en los considerandos quinto y séptimo de la sentencia recurrida.

TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al ejido de Huipulco, a través de su respectivo comisariado ejidal, en contra de los decretos que expropian al ejido, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro y trece de agosto de mil novecientos sesenta y cinco, respectivamente, para la ampliación de la Calzada de Tlalpan y apertura del Viaducto Tlalpan; negativa que se hace extensiva a los actos consistentes en:

a) La cancelación, revocación, desconocimiento, suspensión, que aducen hicieron las responsables, de los acuerdos presidenciales de fechas veintiocho de octubre y veinte de diciembre de mil novecientos cuarenta.

b) La privación en forma total y definitiva de las propiedades, posesiones y disfrute de los derechos agrarios del ejido denominado "Ejido de Huipulco", delegación Tlalpan, en la Ciudad de México, correspondiente a la dotación contenida en la resolución presidencial de fecha diecinueve de octubre de mil novecientos veintidós.

c) La cancelación, revocación, desconocimiento o suspensión de cualquier otra índole de la resolución presidencial de dotación y ampliación de tierras con las que se vio beneficiado el ejido quejoso.

d) La cancelación, revocación o suspensión de cualquier otra índole, que tenga como consecuencia el desconocimiento de los derechos agrarios que haya adquirido el quejoso.

e) La cancelación, revocación, desconocimiento o suspensión de cualquier otra índole en forma unilateral por las responsables de la toma de posesión, planos provisionales y definitivos de ejecución de las diligencias, censos, certificados y resoluciones agrarias que desconozcan los derechos del quejoso.

f) La prohibición e impedimento para que la impetrante de garantías realice los fines sociales con las tierras con que fue beneficiada.

g) La orden de desalojo de las tierras, aguas, posesiones y derechos agrarios de la quejosa.

h) Los permisos, autorizaciones, licencias de construcción y funcionamiento, la aprobación de planos, las

otorgando las autoridades responsables y que afectan la superficie de terreno con que fue beneficiado el ejido quejoso.

i) El fraccionamiento de los terrenos de propiedad del impetrante de garantías, lotificación, ventas, enajenaciones, planos de notificación, planos de urbanización, resoluciones o sentencias por autoridades judiciales o administrativas, inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de escrituras, fideicomisos, convenios, acuerdos, resoluciones, sentencias, que tengan como propósito lotificar la superficie citada."

CUARTO. La justicia de la Unión ampara y protege al ejido de Huipulco, a través de su respectivo comisariado ejidal, en contra de la omisión de pago de la indemnización derivada de los decretos expropiatorios publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro y trece de agosto de mil novecientos sesenta y cinco, para los efectos precisados en el considerando último de la sentencia recurrida.

QUINTO. Se declara sin materia la revisión adhesiva.

NOTIFÍQUESE; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al juzgado de su origen, y, en su oportunidad, archívese el toca, en el entendido de que conforme al punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día

quince de diciembre de dos mil nueve, que entró en vigor a los treinta días siguientes, esto es el quince de enero de dos mil diez, este expediente es susceptible de depuración.

Así, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Magistrados Rolando González Liconá (Presidente), Magistrado Arturo Iturbe Rivas (Ponente) y Óscar Palomo Carrasco, integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos quien da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE:

(FIRMADO)

ROLANDO GONZÁLEZ LICONA



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUATEMALA
SECRETARÍA DE ACUERDOS
20 de Enero de 2010

MAGISTRADO PONENTE:

(FIRMADO)

ARTURO ITURBE RIVAS

MAGISTRADO:**(FIRMADO)****ÓSCAR PALOMO CARRASCO****SECRETARIA DE ACUERDOS:****(FIRMADO)****LAURA ZÁRATE MUÑOZ**

Al día del engrose, la Secretaría de Acuerdos hace constar que la presente foja corresponde a la parte final de la sentencia dictada en el **AMPARO EN REVISIÓN 467/2017**. Ciudad de México, veinticinco de enero de dos mil diecinueve. Doy fe.

LA SECRETARIA DE ACUERDOS EN FUNCIONES DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, CERTIFICA: QUE EL TESTIMONIO QUE ANTECEDE CONSTANTE DE SETENTA Y SIETE FOJAS ÚTILES, ES FIEL REPRODUCCIÓN DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL AMPARO EN REVISIÓN **467/2017**, INTERPUESTO POR EJIDO DE HUIPULCO DE LA DELEGACIÓN TLALPAN. CIUDAD DE MÉXICO, DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. DOY FE.

SECRETARIA DE ACUERDOS EN FUNCIONES**MARLEN ÁNGELES TOVAR.**

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO